La Política Petrolera en América Latina: 1970-2010
Los casos de México y Venezuela, Argentina y Brasil, Colombia y Bolivia

Luis Humberto Hernández R.
Autor
LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Coordinador del núcleo de desarrollo local de la maestría de la ESAP, y del grupo de Seguridad y Energía, adscrito al Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional.


LA POLÍTICA PETROLERA EN AMÉRICA LATINA: 1970-2010
LOS CASOS DE MÉXICO Y VENEZUELA,
ARGENTINA Y BRASIL, COLOMBIA Y BOLIVIA.
LA POLÍTICA PETROLERA EN AMÉRICA LATINA: 1970-2010
LOS CASOS DE MÉXICO Y VENEZUELA,
ARGENTINA Y BRASIL, COLOMBIA Y BOLIVIA.

Grupo de Investigación
SEGURIDAD Y DEFENSA GISDE

Autor
Luis Humberto Hernández R.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
INSTITUTO UNIDAD DE INVESTIGACIONES JURÍDICO - SOCIALES
"GERARDO MOLINA" - UNIJUS
A Isaura,
la primavera de mi otoño.
LA POLÍTICA PETROLERA EN AMÉRICA LATINA: 1970-2010
LOS CASOS DE MÉXICO Y VENEZUELA, ARGENTINA Y BRASIL, COLOMBIA Y BOLIVIA.

© UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales
Gerardo Molina – UNIJUS

© Luis Humberto Hernández R., autor


Grupo de Investigación: Seguridad y Defensa GISDE

Diseño de carátula: Corcas Editores S.A.S

Primera Edición: Noviembre de 2013

Impreso y hecho en Bogotá D.C., Colombia.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
**Indice**

**I. REFERENTE TIEMPO-ESPACIAL: 1970-2010**
- 1.1 El ciclo sistémico .......................................................... 17
- 1.2 Estado de crisis de la agencia fundamental actual: Los Estados Unidos ........................................ 19
- 1.3 La crisis petrolera de los años Setenta: Consecuencias .......................................................... 25
- 1.4 América Latina Dinámica de la política petrolera: 1973-2010 .................................................. 34

**II. MÉXICO Y VENEZUELA** .................................................... 37
- 2.1 Antecedentes ........................................................................ 37
- 2.2 Venezuela: 1970-1990 ............................................................ 38
- 2.4 México-Venezuela: 2000-2010 ................................................ 53
  - 2.4.1 México ........................................................................... 53
  - 2.4.2 Venezuela ...................................................................... 60
- 2.5 Conclusión ........................................................................... 71

**III. BRASIL Y ARGENTINA** ................................................... 73
- 3.1 Antecedentes .......................................................................... 73
- 3.2 Brasil: 1970-2000 .................................................................. 74
- 3.3 Argentina: 1970-2000 .............................................................. 85
- 3.4 Argentina- Brasil: 2000-2010 .................................................. 95
  - 3.4.1 Argentina ....................................................................... 95
  - 3.4.2 Brasil ............................................................................ 100
- 3.5 Conclusión .......................................................................... 109
La Política Petrolera en América Latina: 1970 - 2010

IV. BOLIVIA Y COLOMBIA

4.1 Antecedentes .............................................. 111
4.2 Bolivia: 1970-2010 .......................................... 114
4.3 Colombia: 1970-2002 ....................................... 126
4.4 Colombia- Bolivia: 2000-2010 .............................. 147
  4.4.1 Colombia .................................................. 148
  4.4.2 Bolivia .................................................... 160
4.5 Conclusión .................................................. 171

V. CONCLUSIONES ............................................. 173

BIBLIOGRAFÍA .................................................... 177

SIGLAS ............................................................ 189
Índice de Gráficas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gráfica N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Página</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Modelo de Mensch</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Estados Unidos: importaciones de petróleo (MB)</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Precio Barril de crudo (US$ Barril/WTI)</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>México Ingresos Petroleros Millones US$</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Venezuela Ingresos Petroleros: Lusinchi, Pérez, Caldera y Chávez</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Reservas probadas de Venezuela: Crudo (MMB) y gas (MMM MPC). 2005</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>México – Venezuela. Reservas: 1970-2010</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Brasil: Producción, importación consumo. 1955-1985</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Argentina: Reservas/producción 1980-2008</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Argentina-Brasil: Reservas: 1970-2010</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Argentina-Brasil: Exportaciones de petróleo: 1970-2010</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Gas Boliviano: distribución propiedad</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Precio Máximo con Sobretasa</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Colombia Reservas de Petróleo</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Bolivia Reservas de Gas</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Colombia Producción Petróleo</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Bolivia Producción Gas</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Colombia-Bolivia: Deuda Externa: 1970-2010</td>
<td>170</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Índice de Cuadros

Cuadro N° 1. Renta Petrolera Países Exportadores (MMUS$) .................................................. 26
Cuadro N° 4. Interconexiones Indirectas en los Directorio de las Compañías Petroleras Mayores a través de Bancos Comerciales 1972 ......................................................... 29
Cuadro N° 5. Beneficios de las Sietes Grandes Compañías Petroleras. .................................. 31
Cuadro N° 8. Huelgas Trabajadores del Catatumbo ................................................................. 112
Cuadro N° 10. Flujo de Inversión Petrolera ................................................................. 156
El siguiente texto hace referencia a la Política Petrolera en América Latina, los casos de México y Venezuela, Argentina y Brasil, Colombia y Bolivia en el periodo 1970-2010.

Se considera que los países latinoamericanos no son ajenos a la crisis petrolera mundial que se da en la década de los setenta, gatillados en las siguientes décadas por el auge que revisten las materias primas durante la implementación del modelo neoliberal. Eso incide de manera significativa en los índices que muestran sus variables económicas como la deuda, y en las implicancias socio-políticas que los acompañan. ¿Qué características revisten las políticas implementadas en el sector de los hidrocarburos? y, ¿Qué implicancias sociopolíticas tuvieron?, son los interrogantes que acá se desarrollan.

Para su abordaje se parte del supuesto, que las políticas petroleras de características estatistas que predominan en estos países hasta la década de los setenta, asumen en los años ochenta rasgos comunes de privatización, en el marco de la financiarización neoliberal de la economía global. Que en los inicios del siglo XXI, por la diversidad de regímenes políticos que emergen en la región, esas políticas petroleras asumen diversas formas, con sus consabidas consecuencias socioeconómicas.

Se considera que el proceso se enmarca en un ciclo sistémico que tiene su inicio en los años setenta, y se clausura en el año 2008 con la crisis financiera mundial. En ese periodo, el petróleo y demás materias primas juegan un papel de primer orden en la economía del sistema mundo capitalista y en la dinámica política de los países de la región.
Se concentra la reflexión en los casos de México y Venezuela, Argentina y Brasil, Colombia y Bolivia porque se considera que esos países, condensan el espectro de las políticas petroleras de los demás países de la región. Venezuela y México son los países que cuentan con las mayores reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), y son también los mayores ofertantes para el mercado de crudos del mundo; por tanto, protagonistas de primer orden en el manejo de los asuntos energéticos y políticos de Latinoamérica. Argentina y Brasil, son países que cuentan con recursos, pero no suficientes para satisfacer sus demandas internas, por lo que tienen que importarlo de su vecino Bolivia. Colombia y Bolivia son países con recursos hidrocarburíferos modestos que les permite ser autosuficientes, y ofertar un margen significativo a los Estados Unidos y sus vecinos. Tres pares de países con cambios sustanciales en sus políticas petroleras desde los años setenta, que es precisamente lo que se quiere resaltar en este esfuerzo académico.

El estudio está dividido en cinco capítulos. En el capítulo 1 se ubica el marco teórico o temporal en el que se ubica la reflexión. Está dividido en tres acápites: el primero, reseña el concepto de ciclo sistémico propuesto por Giovanni Arrighi. El segundo, describe brevemente el estado que presenta la agencia del actual ciclo: Los Estados Unidos. El tercero, describe de manera sucinta la crisis mundial petrolera de los años setenta y sus consecuencias. El cuarto, hace alusión a la dinámica petrolera en general de Latinoamérica. En los capítulos 2, 3 y 4 se desarrollan las políticas petroleras de México y Venezuela; Brasil y Argentina, y Colombia - Bolivia respectivamente, teniendo en cuenta las administraciones gubernamentales del periodo 1970-2000. Cada capítulo comprende tres partes. En la primera, se describen algunos rasgos claves de sus antecedentes petroleros. En la segunda, se desarrolla el proceso acaecido en esos treinta años en cada uno de los países en mención. En la tercera, se reseña la dinámica de los respectivos países en el periodo 2000-2010, y en la cuarta, se indica la conclusión del respectivo capítulo. En el capítulo 5 se redactan las conclusiones generales y, finalmente, se refiere la bibliografía y la lista de siglas.

Se destaca en sus conclusiones generales la diversidad de opciones implementadas, como expresión de la persistente búsqueda de estos
países de hacer camino por cuenta propia. Se arriesga una redefinición o actualización conceptual de los términos, Nacionalización y Estatización, alrededor de los cuales se centra la atención en la región cuando se trata la política petrolera y los recursos naturales.

El desarrollo del trabajo en su conjunto está acompañado con 10 cuadros y 21 gráficas. Las cifras se obtienen de diversas fuentes, en su mayoría de los organismos oficiales.

El autor resalta sus agradecimientos al Grupo de Seguridad y Defensa dirigido por el profesor Alejo Vargas, y a UNIJUS por hacer posible la publicación de este esfuerzo.

1.1 EL CICLO SISTÉMICO

En su libro El largo siglo XX, señala Giovanni Arrighi (1999) la existencia de cuatro ciclos sistémicos de acumulación del sistema capitalista a lo largo de su existencia, desde el siglo XV hasta la actualidad. Cada ciclo está definido por una unidad fundamental de la agencia primaria y por la estructura de los procesos de acumulación en cabeza de un Estado: 1. El ciclo genovés hasta el siglo XVII, 2. El ciclo holandés hasta finales del siglo XVIII, 3. El ciclo británico desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX y los primeros años del siglo XX y 4. El ciclo americano, que comenzó a finales del siglo XIX, “que en la fase de expansión financiera de los años noventa está destrozando las estructuras del “viejo” régimen estadounidense y creando presumiblemente las de un “nuevo” régimen”. (Arrighi, 1999, pág. 9). Señala que estos ciclos son totalmente diferentes de los ciclos seculares (logísticos de precios) y de los ciclos de Kondratieff aunque “guarda con ellos notables similitudes”.

La diferencia y consecuente definición que hace del concepto de Ciclos Sistémicos, reside en la interpretación de la famosa fórmula general del capital acuñada por Marx (DMD´), que la considera no solo como “la descripción de la lógica de las inversiones de los capitalistas individuales, sino también como la pauta de comportamiento recurrente del capitalismo histórico como sistema mundo” (Arrighi: 18). La fórmula en su conjunto representa el desarrollo de un ciclo sistémico de acumulación completo, en cuyo seno se encuentra la alternancia y respectiva expansión de dos épocas, la primera de expansión material
(Fase DM) de acumulación de capital, y la segunda (Fase MD) de renacimiento y expansión financiera. Cada una de esas épocas cuenta con su respectiva “edad dorada”. Las fases de expansión material son de cambio continuo durante la cual la economía capitalista crece en virtud de una senda única de desarrollo. Las fases de expansión financiera son de cambio discontinuo donde el crecimiento en virtud de la senda establecida alcanza sus límites, desplazándose la economía-mundo a otra senda mediante reestructuraciones y reorganizaciones radicales. Considera que en la fase de expansión material, el capital dinero “pone en movimiento” una creciente masa de mercancías (incluidas la fuerza de trabajo mercantilizada y los recursos naturales), y en las fases de expansión financiera, una creciente masa de capital-dinero “se libera” mediante procedimientos financieros.

Con base en la expresión acuñada por Gerhard Mensch (Arrighi: 75), Arrighi denomina el comienzo de cada fase de expansión financiera como la crisis-señal (Sn) del régimen dominante de producción. Momento en el cual la agencia o país líder del proceso de acumulación comienza a desinvertir cantidades cada vez mayores de capital del comercio y de la producción, para invertirlas en la intermediación y en la especulación financiera. Ese desplazamiento es expresión de una “crisis” al señalar un punto de inflexión o “tiempo crucial de decisión”.

**Gráfica N° 1. Modelo de Mensch**

![Gráfica N° 1. Modelo de Mensch](image)

Figura 1. Modelo de metamorfosis de Mensch. (Fuente: Mensch, 1979: 73.)
El desplazamiento desencadena procesos que transforman el fin de la expansión material en una "época dorada" para sus promotores y organizadores, asumiendo dimensiones y formas variadas. Estas "edades doradas" se constituyen en el preámbulo de la profundización de tal crisis, y de la sustitución final del régimen de acumulación dominante, dando origen a una crisis terminal (Tn). Esta crisis consiste en una serie de hechos que conducen a la sustitución, indicativo del fin del siglo largo que engloba el ascenso, la expansión y el declive del régimen.

Arrighi describe el largo siglo XX, constituido por tres segmentos específicos. El primero inicia en 1870, de Crisis Señal (S3), y se prolonga hasta 1930 de Crisis Terminal (T3); es el régimen de acumulación británico. El segundo que se extiende desde la anterior T3 británico hasta la C4 del régimen estadounidense, que se sitúa alrededor de 1970. Y el tercero, y último segmento, que abarca desde 1970 hasta la T4 del régimen estadounidense. Crisis (T4) que a nuestro juicio se produce en el 2007.

1.2. ESTADO DE CRISIS DE LA AGENCIA FUNDAMENTAL ACTUAL: LOS ESTADOS UNIDOS.

Los Estados Unidos, considerados la unidad fundamental del cuarto ciclo sistémico, experimentan, cincuenta años después de su guerra civil, una revolución organizativa que propicia la creación de las Grandes Corporaciones organizadas verticalmente. Estas son empresas que integran sus propias operaciones con las de sus suministradores y clientes; además, se gestionan de forma burocrática. Ellas se originan alrededor de la producción petrolera (Standard Oil) y automotora (Ford y General Motor), y se constituyen en el actor más importante del régimen de acumulación, animando la centralización de la liquidez, es decir, del poder de compra y la capacidad productiva del capital. Igualmente, son empresas que frente al capitalismo de mercado británico y el modelo corporativo alemán, se despliegan al amparo de la protección del Estado, y del disfrute de las ventajas competidoras decisivas en la economía mundo capitalista. Se define la economía mundo como una entidad económica pero no política, cuyas decisiones económicas,
están orientadas hacia la arena de la economía-mundo, mientras que las decisiones políticas están orientadas principalmente hacia las estructuras menores que tienen control legal (Wallerstein, 2007).

También ellas hacen, que la denominada libre competencia del mercado, propia del denominado capitalismo clásico, se transforme en una situación de competencia imperfecta:

Una situación del mercado en la que los vendedores o empresas que compiten en él, tienen cierto control sobre el precio debido a que ofertan productos diferenciados y/o limitan el suministro. Además, en este tipo de mercado existe información incompleta del mercado y comportamiento emocional de compra, por lo que las empresas utilizan la promoción para informar, persuadir o recordar a su mercado meta las características y beneficios de sus productos. El monopólio, el oligopolio y la competencia monopolística, son los tres tipos de competencia imperfecta que existen en la actualidad (Thompson, 2006).

Esa situación es estimulada por el manejo, entre otros, de la información, debido a la influencia que ejercen a través de los medios de comunicación.

Por la acción de estas nuevas corporaciones, se sustituye el libre mercado por la determinación imperativa de los precios y de las cantidades que tienen que ser vendidas y compradas a valores por ellas determinados; clave para la planificación industrial que entra a controlar, suspender o sustituir al mercado. Afirmó Arrighi, que “la diferencia específica del capitalismo corporativo estadounidense no radica ni en la suspensión ni en el control del mercado, sino en su sustitución”. (Arrighi. 1999: 347).

En ese marco, entre 1950-1960 se lleva a cabo la fase de expansión material (DM) de la economía mundo capitalista bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Un periodo en el cual la renta per cápita aumenta en los países en vías de desarrollo, como media en un 3% anual; y se acelera la tasa de crecimiento del stock de capital, cuya duración y vigor carecen de precedentes históricos. Un periodo denominado de los años dorados. Entonces, el capital excedente será reinvertido de nuevo en el comercio y la producción a una escala ampliada, que genera
una intensificación de las presiones competitivas sobre las diversas organizaciones de la economía-mundo, e implica la sustracción de capital-dinero del comercio y de la producción.

El cambio se produce entre 1968-1973, años durante los cuales, los depósitos efectuados en el mercado de eurodólares o eurodivisas experimentaron un alza repentina atada al alza de los precios del petróleo, seguida de veinte años de crecimiento significativo. En esos cinco años los Estados Unidos abandonan el sistema de paridades fijas entre las monedas nacionales y el dólar estadounidense, y entre este y el oro, que estuvo en vigor durante la fase (DM) de expansión material; y opta por el sistema de cambio flotantes. Producto de esa dinámica, a mediados de los setenta, el volumen de las transacciones monetarias de los mercados monetarios extraterritoriales son mayores que el valor del comercio mundial, y hace imparable la expansión financiera. En 1979 las operaciones de divisas equivalen a US$ 17.5 trillones, once veces más que el valor del comercio mundial de US$ 1.5 trillones. Cinco años después, las operaciones de divisas ascienden a US$ 35 trillones, que representan cerca de veinte veces el valor total del mercado mundial, el cual se incrementa en un 20%.

En ese período 1968-1973 sitúa Arrighi la crisis del régimen estadunidense (C4), que se expresa en tres ámbitos interrelacionados: 1. Militarmente, su derrota en Vietnam, 2. Financieramente, la Reserva Federal rompe el modo de producción y regulación del dinero mundial establecido en Bretton Woods, y 3. Ideológicamente, su cruzada anticommunista comienza a perder legitimidad tanto interna como externamente. Señala que,

...durante el resto de 1970, las estrategias estadounidenses de poder se caracterizaron por un descuido fundamental de las funciones gubernamentales mundiales. Fue como si los grupos dominantes de los Estados Unidos hubieran decidido que, dado que el mundo no podía ya ser gobernado por ellos, debía permitirse que se gobernase a sí mismo” (Arrighi. 1999: 361).

El despegue de su fase financiera (DM) comienza en 1968, cuando se acelera de manera explosiva los fondos líquidos colocados en el mercado de eurodólares de Londres. Este mercado entra a dominar el
proceso de fijación de los precios recíprocos de las monedas nacionales y su precio en relación con el oro; de igual manera, es resultado de la inesperada expansión del régimen de acumulación estadounidense. Esa situación hace que la Multinacionales norteamericanas, que eran depositantes del mercado monetario de Nueva York, se pasaran al mercado de eurodólares para evitar las pérdidas en sus depósitos, y creaban una estructura organizativa que no podía ser controlada por los bancos centrales, sino por ellas. Hasta entonces se regulaba la oferta de dinero mundial de acuerdo a los pactos de Bretton Woods. Ahora, bajo la nueva condición, se da inicio a la transnacionalización del capital de la mano de las grandes corporaciones privadas.

Al pasar de esa manera el control de la liquidez mundial en la producción y regulación del dinero, de manos públicas a privadas y de Washington a Londres; y al no existir una alternativa viable al dólar como moneda fundamental de reserva y medio de intercambio internacional, hace que Estados Unidos abandone el patrón dólar-oro y produzca el establecimiento del patrón dólar puro. De esa forma se aumenta la importancia del dólar como dinero mundial. Esta política dota, al gobierno estadounidense, entre 1973-1978, de una libertad sin precedentes para producir dinero mundial, que le permite explotar los recursos del resto del mundo sin restricciones, y valerse de su poder para emitir su propia moneda de obligado uso para el resto del mundo. Las sucesivas devaluaciones, que desde entonces hace el gobierno estadounidense de su moneda, estimulan sus exportaciones y renta, reduce el precio de sus productos en los mercados exteriores y encarece los productos exteriores en su mercado, que le permite mejorar su economía en el periodo 1973-1979, respecto a la europea y japonesa. Esa expansión la hace al amparo de la sobreabundante oferta de dólares que pone en circulación, en la eliminación de sus controles y en la autoexpansión interna y externa de su capital.

El sistema que está respaldado por las enormes reservas norteamericanas y su superávit de la balanza de pagos, refuerza la función del dólar como dinero mundial, y facilita la expansión de su capital corporativo, que hace autosuficiente la expansión financiera mediante el endeudamiento en Europa. La expansión de las actividades corporativas en el exterior, junto al mercado de las eurodivisas,
entra en contradicción con los fundamentos nacionales del poder estadounidense. El conflicto emerge cuando sus reservas en oro empiezan a disminuir por debajo del nivel considerado necesario para las autoridades monetarias estadounidenses.

La transnacionalización y “financiarización” del capital se hace en el contexto de la fuerte presión alcista sobre los precios de compra de las materias primas, “explosión de pagos” que provoca la contracción en los rendimientos del capital invertido en el comercio y la producción. Esta presión es expresión de la “Crisis del petróleo” de 1973, que multiplica los precios del crudo importado por los países denominados desarrollados y miembros de la OCDE. Con esa sobreabundancia de dólares son beneficiados los países del tercer mundo y las transnacionales petroleras por sus exportaciones de crudo. La sobreabundancia de capital que esperaba ser invertido en mercancías, se traduce en la Señal-Crisis del régimen de acumulación estadounidense.

En poco tiempo, el reciclaje no regulado de los petrodólares en préstamos prácticamente ilimitados a países del tercer y segundo mundo trocó el goteo en inundación. Parecía que el capital se había hecho tan abundante como para ser casi un producto gratuito, haciendo que el control sobre el poder adquisitivo mundial, principio y fin de la acumulación capitalista, se escapara de los estados del primer mundo. (Arrighi. 1999: 388).

La desconfianza en el dólar, que se empieza a manifestar a finales de los años setenta, obliga la toma de medidas enérgicas (6 de octubre de 1979) por parte de los Estados Unidos, con el fin de restringir la oferta de dólares y elevar los tipos de interés en los mercados financieros mundiales. La crisis de confianza en el dólar se liga al revés sufrido por los Estados Unidos en Irán, al ser sustituido el régimen del Sha por el de los Ayatolas; por la invasión Soviética a Afganistán, y por la segunda crisis petrolera en 1979. Paul Volker presidente de la Reserva Federal considera la posibilidad que el dólar colapse, lo que podrá conducir a una crisis financiera mundial, que presiona la remonetización del oro; una medida contra lo cual se habían batido los Estados Unidos durante más de una década. Esa preocupación excesiva por las finanzas y de tolerancia de las deudas, presagia su declive económico.
Los Estados Unidos plantean como salida inmediata, una alianza con las altas finanzas privadas y la búsqueda de su asistencia para recuperar la supremacía. La alianza que comporta la centralización del poder adquisitivo de los Estados Unidos, arroja rendimientos que superan sus mismas expectativas. No así para los países del tercer mundo, que se ven devastados por los efectos restrictivos de la política monetaria implementada, los altos tipos de intereses reales, y la desregulación estadunidense; que pone de rodillas a sus respectivos Estados ante el sistema financiero mundial. Las medidas que toman les obliga al recorte drástico de la demanda de los suministros procedentes de estos países, la disminución de sus exportaciones en un 40%, y de los precios del petróleo en un 50%; junto al incremento de los costos del pago de sus deudas. Ahora no serán los banqueros del primer mundo los que piden a los Estados del tercer mundo que se endeudén con el capital hiperabundante que ellos poseen, sino que son los Estados tercermundistas quienes entran a mendigar a los banqueros y Estados del primer mundo los créditos necesarios para mantenerse a flote, en un mercado cada vez más competitivo, integrado y contraído. Así se origina la “bella época” de la era de Reagan (1981-1989), cuyos beneficiarios no son capaces de percibir que, esa repentina prosperidad sin precedentes, no reposa precisamente en la resolución de la crisis de acumulación; y cuyo estallido era cuestión de tiempo, tal como sucede posteriormente en el 2008 en los mismos Estados Unidos, y que cobija a todo el mundo. (Krugman, 2008).

Esta crisis financiera que se desata alrededor de los fondos de inversión y de los bancos que buscan mayor rentabilidad, encuentra una veta artificial de ganancia ilusoria, al adquirir y revender de banco en banco, de país en país, paquetes e hipotecas que eran préstamos de vivienda colocadas a usura, cuyos usuarios aceptan recibir firmando pagarés a tasas imposibles y sin contar con ingresos fijos. Por ese medio se multiplica una andanada de hipotecas basura, que en las bolsas de valores les permite, a los fondos de inversión y bancos diversos, colocar sus capitales y activos, que se benefician de sus altas tasas. (Krugman, 2008). Esa burbuja financiera, eleva los precios de las materias primas de una manera espectacular, en particular del petróleo que pasa la media mensual de US$33.9 dólares el barril (WTI) en el año 2000, hasta los US$91.5 el barril en el 2007, hasta llegar a US$145 en
el 2008, para bajar de manera abrupta hasta los US$50 en el 2009. Su estallido soporta una progresiva recesión colectiva, que se esparce como metástasis por el resto del mundo, y de la que somos testigos en la actualidad.

1.3. LA CRISIS PETROLERA DE LOS AÑOS SETENTA: CONSECUENCIAS.

Señala Roberto Centeno, que hasta los años 70, pocas personas estaban interesadas por los problemas energéticos, pese a ser la mayor industria del mundo, “la palabra crisis aplicada a los recursos parecía haber desaparecido” (Centeno, 1982, pág. 9). Tal percepción cambia a partir de la denominada crisis petrolera de los años setenta (1973), que se traduce en el alza sucesiva de precios y pone en jaque el crecimiento que acusa hasta entonces la economía a nivel mundial.

La crisis que tiene su detonante en el conflicto árabe israelí, iniciado el 6 de octubre de 1973, pone al descubierto las causas y consecuencias del poder económico, político y militar que potencia la industria petrolera y gasífera. Esta industria suministra en su conjunto el 65% de las necesidades energéticas mundiales. El embargo petrolero hecho durante el conflicto por los países árabes, visibiliza el poder político y militar que porta el recurso (Dada, 1984).

Antes del conflicto, el mercado petrolero favorece a los países consumidores y sus empresas, en especial de los industrializados, que son los mayores importadores. En el momento de la coyuntura considerada, las grandes empresas petroleras, conocidas como el cartel de las siete hermanas (Sampson, 1975) que fijaban los precios de referencia de los crudos, se quejaban por la baja en los márgenes de beneficios. A lo que se añade el protagonismo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), creada en 1960, que en los setenta tiene conciencia de la posibilidad y poder para incrementar sus rentas (Seymour, 1981).

El estallido del conflicto se da en el momento en que los gobiernos de los países productores exigen mayor participación en la renta, y se
plantea la revisión de los acuerdos vigentes entre las grandes compañías petroleras y los países productores del Golfo Pérsico.

La decisión que toman los países árabes de disminuir el suministro, y de los países productores de fijar unilateralmente los precios de referencia sin tener en cuenta a las grandes compañías, incrementa automáticamente los precios en una magnitud sin precedentes en el pasado «...entre el 1 de octubre de 1973 y el 1 de enero de 1974, los precios de referencia se multiplicaron prácticamente por cuatro, o por ocho si los comparamos con los precios existentes el 1 de enero de 1970” (Centeno 1982: 27).

Los ingresos de los países exportadores los podemos apreciar en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 1. Renta Petrolera Países Exportadores (MMUSS)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OPEC</td>
<td>14,4</td>
<td>90,5</td>
<td>116,1</td>
<td>119,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Otros</td>
<td>0,4</td>
<td>8,9</td>
<td>11,1</td>
<td>11,8</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>14,8</td>
<td>99,4</td>
<td>127,2</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingresos medios por barril</td>
<td>1,9 US$</td>
<td>8,4 US$</td>
<td>11,1 US$</td>
<td>11,8 US$</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: Con base en Centeno, 1982: 32

En el apreciamos como los ingresos de la OPEP, equivalen entonces a la mitad mundial de las reservas monetarias oficiales.

El alza de precios entre 1973 – 1979, (Ver cuadro N° 2.), pasa de US$5 (Bravo, 2008), y alcanza en algunos casos US$ 45 el barril, que obliga a los Estados Unidos a aumentar la emisión de dólares. Esa emisión le permite pagar, prestar y financiarse sus gastos con moneda ajena como lo ilustra John Nuller:

Imagínese que todas las personas acepten en pago los talones girados por usted añada a eso que todos los beneficiarios de sus talones, repartidos por el mundo, omiten cobrarlos y se sirven de ellos como forma de moneda para cubrir sus propios gastos. Eso tendría para sus finanzas dos consecuencias importantes. La primera sería que si todo el mundo aceptara sus talones, usted ya no necesitaría usar billetes de banco, le
bastaría con su talonario. La segunda consecuencia sería que, al revisar su extracto bancario, tendría la sorpresa de descubrir la existencia de un saldo de dinero superior al importe de la suma no gastada por usted. ¿Por qué? Por el motivo expuesto antes, a saber: que los cheques girados por usted circularían, sin ser jamás cobrados, pasando incesantemente de mano en mano. En cuanto a los resultados práctico, serían los de poner a su disposición más recursos para consumir y para invertir. Cuanto más los otros usaran sus cheques como moneda, más abundantes serían los recursos suplementarios de que usted dispondría (Nuller, 1990).

Es así como el abandono que hacen los Estados Unidos, en 1971, del patrón oro-dólar: “le otorga una situación de privilegio al poder pagar sus deudas con la misma moneda que imprime y además tener la posibilidad de afectar, y hasta cierto punto manejar, la política económica internacional a través de su política económica interna” (Martínez, 1989, pág. 11). De igual manera la devaluación del dólar en 1971 tiene efectos inflacionarios, y propicia los reajustes al alza de los precios del petróleo en 1973. El hecho de mantener sobrevaluado el dólar durante 1980-1985, facilita las importaciones y estimula el consumo de los norteamericanos, cargando como costo la pérdida de competitividad de sus manufacturas y el aumento de su déficit comercial, que lo convierten en el país más endeudado del mundo. Que por el hecho de ser considerado el más poderoso económicamente, se ve libre de las presiones que agobiaba a los países cuyas monedas no son reserva internacional.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Precio</td>
<td>1.8</td>
<td>10.2</td>
<td>31.0</td>
<td>40.0</td>
<td>40.0</td>
<td>50.0</td>
<td>70.0</td>
<td>90.0</td>
<td>100.0</td>
<td>95.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Entonces, se aumenta “... la oferta de moneda en el mundo más de doce veces en una década” (Frank, 1988), un fenómeno conocido como la Petrodolarización de la economía, es decir, cuando los dólares son depositados en el sistema financiero internacional y los bancos ven llegar a sus arcas (Pecchioli, 1977) inimaginables cantidades de
dólares; que se constituye en el efecto más significativo de la crisis, y cuyas implicancias impelen la crisis financiera del 2007-2008.

**Cuadro N° 3. Excedente Financiero Estimado de la OPEC: 1974 - 1975**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inversión en</th>
<th>Miles de millones de US$</th>
<th>Porcentaje del total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Estados Unidos</td>
<td>17.5</td>
<td>19.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Reino Unido</td>
<td>7.5</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Otros Países desarrollados</td>
<td>12.5</td>
<td>13.9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td><strong>37.5</strong></td>
<td><strong>41.6</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Países en desarrollo No Petroleros</td>
<td>7.0</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Organizaciones internacionales</td>
<td>7.5</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Mercados de eurodivisas</td>
<td>28.5</td>
<td>31.7</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Otros</td>
<td>9.5</td>
<td>10.6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>90.0</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Depósitos bancarios</td>
<td>35.0</td>
<td>39.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: (Pecchioli, 1977)

Los ingresos obtenidos por la OPEC sirven para aumentar sus reservas monetarias, que alcanzan en 1978 el 24% del total mundial. Los fondos destinados para inversión son depositados en los bancos privados, preferiblemente de los países industrializados, o invertidos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tantos dólares no se quedan encriptados en las bóvedas de los bancos, enlazados con las grandes petroleras (Ver cuadro N° 3), sino que sirven para que los diez mayores bancos de los EEUU, presten en los años siguientes, sólo a América Latina, más del 100% de sus activos. Los dos mayores conocidos, el City Bank y el Chase Manhattan Bank, de los Rockefeller (Propietarios de la EXXON, la multinacional petrolera más grande del mundo), le prestan cada uno a Latinoamérica, más del doble de sus activos; en un ambiente financiero en donde, un desembolso, que antes de 1979 requería de cinco años, ahora se puede lograr en menos de dos.

Ese sistema de préstamos se da en el marco de una organización global de los prestamistas, que se vinculan en forma de sindicatos bancarios, a través de la figura oligopólica, y del desarrollo del mercado interbancario, como si se trata de un “acreedor colectivo” (Aschentrupp, 1987). Se funda de esa manera la financiarización del sistema, definido por Epstein como “la creciente importancia de los
mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras, y élites financieras que operan en la economía, acompañadas de las instituciones rectoras del gobierno, tanto a nivel nacional como internacional" (Epstein, 2005, pág. 1)

**Cuadro N° 4.** Interconexiones Indirectas en los Directorio de las Compañías Petroleras Mayores a través de Bancos Comerciales 1972.

---

**INTERCONEXIONES INDIRECTAS EN LOS DIRECTORIOS DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS MAYORES A TRAVÉS DE BANCOS COMERCIALES 1972**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compañías Petroleras</th>
<th>Bancos Comerciales</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EXXON</td>
<td>CHASE MANHATTAN</td>
</tr>
<tr>
<td>MOBIL</td>
<td>FIRST NATIONAL CITY</td>
</tr>
<tr>
<td>STANDARD (IND.)</td>
<td>MORGAN GUARANTY</td>
</tr>
<tr>
<td>SOCAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SHELL</td>
<td>BANKERS TRUST</td>
</tr>
<tr>
<td>TEXACO</td>
<td>CHEMICAL BANK</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Otras Grandes</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PHILLIPS</td>
<td>CONTINENTAL ILL. NAT. BANK &amp; TRUST</td>
</tr>
<tr>
<td>UNION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AMERADA HESS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONTINENTAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CITIES SERVICE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GETTY</td>
<td>WESTERN BANCORPORATION</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Buena parte del auge financiero se convierte, para los gobiernos de los países latinoamericanos endeudados, en fuente de especulación, evasión y/o fuga de capitales invertidos en edificios de apartamentos en Miami, Bancos suizos etc. La feria prestamista da origen a la crisis de la deuda en los años ochenta, al declarar, inicialmente Polonia (1980-81), seguida de Argentina, México y Brasil (1982), su incapacidad para responder por los créditos adquiridos.

Un contexto que propicia en estos países la implementación de la política reaganiana de privatización de los activos estatales, en el marco del denominado modelo Neoliberal y Consenso de Washington, cuya gestión involucra diez temas de política económica: 1. Disciplina presupuestaria 2. Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras) 3. Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados 4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés 5. Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos 6. Liberalización comercial; 7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas 8. Privatizaciones 9. Desregulaciones y 10. Garantía de los derechos de propiedad. (Serrano., 2006). Estas medidas se inspiran en las ideas de Friedrich August Hayek, un liberal monetarista que considera que mediante las políticas del lado de la oferta, de reducción del llamado costo laboral, se recupere la tasa de ganancia; proclama además un retorno a las leyes liberales del mercado, pasando la economía a manos de la iniciativa privada. Donde el gobierno tenga una intervención mínima, y asuma como oficio el mantenimiento del orden y la seguridad, garantice los derechos políticos y civiles, oriente la política exterior hacia la apertura de las fronteras, y establezca las condiciones atractivas para la inversión de capital extranjero. (Montoya., 2002).

De la crisis petrolera se benefician también las grandes compañías petroleras privadas, que maniobran muy hábilmente la situación, para obtener pingües ganancias (Ver cuadro N° 4). Como rentable resulta, política y económicamente, para los Estados Unidos que ven acumular gigantes beneficios por parte de sus sociedades petroleras y sus bancos, favorecidos por los excedentes monetarios en ellos depositados. Por este medio, con el servicio de pago de la deuda y la venta de armamentos,
los países importadores de petróleo como los europeos, Japón y los Estados Unidos, reciclan los dólares que pagan por el petróleo a los productores. Eso lo ejemplifica la deuda de la mayoría de los países de la OPEC, que en el 2007 asciende a US$394.000 millones de dólares, situación que responde a la paradójica figura financiera según la cual, como países productores de petróleo prestan en deuda los mismos dólares que depositan en los bancos de los países del centro; precisamente, importadores de materias primas.

**Cuadro N° 5.** Beneficios de las Sietes Grandes Compañías Petroleras.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compañía</th>
<th>1971</th>
<th>1972</th>
<th>1973</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EXXON</td>
<td>357</td>
<td>353</td>
<td>638</td>
</tr>
<tr>
<td>Royal Dutch Shell</td>
<td>209,3</td>
<td>110,5</td>
<td>413,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Texaco</td>
<td>218,2</td>
<td>207,4</td>
<td>307,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobil Oil</td>
<td>134,1</td>
<td>140,9</td>
<td>231,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Standard California</td>
<td>135</td>
<td>150,5</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>Gulf Oil</td>
<td>141</td>
<td>110,0</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>British Petroleum</td>
<td>87</td>
<td>35,0</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>1,281,60</td>
<td>1,107,30</td>
<td>2,211,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: Con base en Centeno, 1982:33

Se resalta la situación de los Estados Unidos, porque es su situación energética interna una de las causas fundamentales de la crisis. Estados Unidos, que es en el siglo XIX y avanzado el siglo XX proveedor de petróleo para el resto del mundo, acusa en la coyuntura de los setenta una franca inversión de esa situación, al mostrar una disminución de sus reservas, y el aumento de su dependencia de los países productores del Medio Oriente y América Latina. (Ver Gráfica N° 2). Entonces el precio del crudo es el más alto alcanzado en el mundo, por lo que tiene que pagar la energía más cara frente a sus competidores. La coyuntura hace que sus presidentes declaren como prioritario de su Seguridad Nacional, la búsqueda de energía en el mundo: "Todo intento de controlar la región del golfo Pérsico por parte de cualquier potencia extranjera será considerado como un ataque a los intereses vitales de los Estados Unidos de América- aseveraba Jimmy Carter (1977-1981) ante las dos cámaras-, y repelido mediante el empleo de todos los
medios necesarios sin exceptuar las fuerza de la armas". (Klare, 2003, pág. 219). Postura denominada doctrina Carter y afirmada por los posteriores Presidentes Bill Clinton y los Bush padre e hijo.

La situación origina un nuevo planteamiento denominado por Klare: "econocentrismo" de la seguridad nacional que funde la economía con la diplomacia, y surge en el marco del fin de la guerra fría cuando la competición económica eclipsa la rivalidad ideológica. Al decir del presidente Clinton, "el impulso de la seguridad económica de Norteamérica se haría con la misma energía e inventiva que antes dedicaban a la guerra fría". Esa política se liga a la expansión del comercio, a través de los acuerdos de libre comercio con América latina y Asia, abriendo los mercados a la venta de sus productos, y eliminado las restricciones a la exportación de satélites, ordenadores y otros productos de alta tecnología.

Gráfica N° 2. Estados Unidos: importaciones de petróleo (MB)

[Gráfica de importaciones de petróleo]

Fuente: (Oystein, 2001)

El efecto económico financiero que se prolonga hasta principio de los años ochenta, es tal vez la mayor consecuencia de la crisis, unida al cambio de propiedad del recurso. Hasta ese momento el recurso es propiedad de las compañías que lo encuentran, y que lo manejan a través de los Contratos de Concesión. Esa situación cambia con la crisis, cuando los acontecimientos subsiguientes hacen emergir nuevamente las políticas de nacionalización por parte de los productores.

Las consecuencias positivas para los propietarios del recurso y sus beneficiarios financieros del centro, lo son de signo contrario para
los países consumidores de la periferia. Estos países ven incrementar los desequilibrios de sus balanzas exteriores, reducir sus crecimientos económicos, aumentar la inflación y el desempleo al igual que el endeudamiento. Factores que marcan sus subsecuentes desarrollos socio-políticos. "Entre los deudores más importantes de la banca privada internacional se encuentra, un grupo de países productores y exportadores de hidrocarburos, para quienes los índices de liquidez y de solvencia se encuentran supeditados a los ingresos provenientes de la liquidación de sus recursos petroleros". (Guerrero, 1990, pág. 69). Una situación avivada por el segundo Crack petrolero acaecido en 1979.


La crisis hace que en 1982 aumente considerablemente la proporción de la deuda de los países respecto a los financiamientos, como consecuencia de los elevados niveles de interés internacionales (hasta de un 17.4%), y la devaluación de sus monedas. Una situación que se replica en las deudas internas por el alza de las tasas de interés nacional y que duplica en algunos casos su participación en los presupuestos. (Pérez, Julio- septiembre de 1987). Para América Latina "se calcula que entre 1983 y 1988 las transferencia neta de recursos ascendía a 180 millones de dólares (a pesar de ello, la deuda en lugar de disminuir, creció de 280 mil millones de dólares en 1983 a 400 mil millones en 1988" (González J. E., 1989, pág. 133).

La búsqueda de equilibrio del sistema hace que el mismo capital privado se interese en los organismos financieros internacionales. De esa manera entra en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El FMI para imponer a los países deudores una mayor disciplina financiera y políticas de estabilidad interna, es decir, medidas de reajuste económico; y el BM, que altera su anterior comportamiento e inicia entre otros, el financiamiento de proyectos
energéticos, junto a programas de créditos, todo en el marco de la disciplina neoliberal.

Las implicancias para América Latina de las políticas neoliberales impuestas en la década de los ochenta, se traducen en los años 90 en una serie movimientos sociales y políticos, que originan nuevos gobiernos. Se destacan países como: Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina que tienen en su mira un nuevo manejo de los asuntos petroleros y energéticos, junto a otros que se mantienen en el marco neoliberal como México y Colombia.


Latinoamérica, hasta la primera década del siglo XX, es una región que en términos del uso del petróleo a nivel mundial, interesa como consumidora más que productora (Philip, 1982). Para las necesidades petroleras del mundo económico de entonces, era suficiente con el petróleo de los Estados Unidos, cuya producción y comercialización de su principal derivado: el Kerosene, estaba monopolizado por la Standard Oil Company, creada por John Rockefeller en 1870. (Yerguin, 1991).

La posterior expansión y nuevos usos del petróleo, a raíz de la introducción del carro y el uso de la gasolina en Europa y los Estados Unidos, alientan, hacia la década de los años veinte, su búsqueda en la región; con sus consabidas consecuencias políticas. Los países de la región presentan dificultades en la construcción de sus Estados nacionales modernos y respectivas democracias. Los gobiernos son presa de caudillos decimonónicos, que regentan sobre economías agrarias pre-modernas, y países que arrastran deudas contraídas desde la independencia, y padecen débiles condiciones fiscales y administrativas. Esas condiciones hacen a esos gobiernos generosos con las multinacionales al firmar las primeras Concesiones petroleras. Un sistema de contratación que involucra la entrega por parte del Estado firmante, de una porción del ejercicio de su soberanía interna y externa, a cambio de una regalía. (Villegas, 1975).
Los intentos y logros de la nacionalización del recurso petrolero en Bolivia en 1937 y en México en 1938, ilustra las improntas de estos países de darse formas gubernamentales y económicas propias, al colocar al centro de sus agendas y planes gubernamentales el uso del recurso. De igual manera se puede considerar, la creación de empresas estatales petroleras por parte de los militares de Argentina en los años treinta, del movimiento obrero nacionalista de Colombia a fines de los cincuenta, y las reformas en el sistema contractual por parte de Venezuela. Acciones que, hasta los años setenta, siguen más dependientes que autónomas frente a las disposiciones que imponen las grandes corporaciones en el tratamiento de las políticas petroleras. (Centeno.1982) (Sampson.1975).
México y Venezuela son los mayores productores de petróleo de la región, y están clasificados dentro de los países que cuentan con mayores reservas en el mundo. En la coyuntura de crisis de los años setenta, por su condición de ofertantes, ambos países aumentan sus ingresos de manera considerable (Ver cuadro N° 6). Pero también en los años ochenta los encontramos altamente endeudados, lo que incide en los sucesos sociopolíticos posteriores.

Al finalizar el siglo XX sus políticas petroleras asumen procesos diferenciados. México hasta ese momento, tiene una historia petrolera singual, por su nacionalización en 1938 por parte del Presidente Lázaro Cárdenas. Esa gesta es producto de una cruzada nacionalista apoyada por una población que entrega joyas y enseres valiosos, para crear el fondo financiero que constituye la empresa PEMEX, y para contrarrestar el embargo hecho por el Departamento de Estado norteamericano. Inicialmente orienta su producción hacia el mercado interno, en vez de usarlo como medio de pago al exterior por importaciones, como lo hacían otros países; e impone precios propios, ajenos a los internacionales. Las ventas que hace al exterior a compradores independientes, las hace con descuentos; y aprovecha coyunturas como la II guerra mundial para tener como países compradores a Alemania. Igualmente se mantiene al margen de la OPEC, que le permite jugar a su favor con los precios. México establece un modelo particular para manejar sus asuntos petroleros (Portillo, 1975), hace, por ejemplo, de la demanda del mercado interno, el motor de crecimiento de su producción petrolera,
que contribuye hasta los años setenta en el crecimiento de un 6.2% promedio anual.

Venezuela, tiene en el siglo XIX serios conflictos con los Estados Unidos por razones petroleras, y con las potencias europeas por motivos de deuda; al punto de ser amenazada militarmente en diciembre de 1902, por Alemania, Italia y Gran Bretaña. En 1943, realiza una revisión básica de su legislación redactando una nueva ley petrolera con visos estatistas. Por esa ley aumenta los ingresos fiscales y obliga a las compañías petroleras a ampliar sus inversiones en el área de refinación. Como resultado de la denominada Revolución de 1945, liderada por Rómulo Betancourt y la promulgación de la constitución de 1947, instaura el famoso régimen petrolero denominado 50 y 50; y declara formalmente que no otorgará nuevas concesiones petroleras a particulares. (Betancourt, 1956.). En 1960 crea La Corporación Venezolana de Petróleos (CVP) como empresa estatal. Se destaca como su figura insigne en el manejo de los asuntos petroleros, Juan Pablo Pérez Alfonzo. De él son las propuestas, aún vigentes, de sembrar el petróleo, y crear una organización de países exportadores de petróleo, fundamento de la OPEC. Pérez Alfonzo es un intelectual comprometido políticamente, que introduce elementos conservacionistas en la política petrolera con el fin de convertirla en una doctrina práctica en la formulación de alternativas dentro de la política petrolera mundial. (Hernández., 2008).

El comportamiento de sus principales variables en el periodo 1970-2010, lo vemos ilustrado en el cuadro N° 6.

2.2 VENEZUELA: 1970-1990

Para Venezuela, la crisis de los años setenta, le permite vivir una edad dorada de petrodólares. En medio de esa bonanza lleva a cabo el proceso de nacionalización. Una decisión política a tono con la OPEC, de la cual es promotora y fundadora en los años sesenta.

La crisis se da al finalizar el primer Gobierno de Rafael Caldera, (1969-1974), quien inaugura una política de reformas desarrolllistas que
tiende a superar la exclusiva dependencia del país de los hidrocarburos, pues el 90% de los ingresos de la balanza comercial proceden de su exportación. En 1971, Caldera le notifica a Estados Unidos la expiración del Tratado de Reciprocidad vigente desde 1939, por el que a cambio de facilidades aduaneras para las materias primas venezolanas: petróleo y derivados, las mercancías de aquel país entraban en Venezuela libres de aranceles. Esa situación perjudica seriamente las manufacturas nacionales, sobretodo en tiempos de depreciación del dólar. También invoca la plena soberanía del Estado venezolano para decidir los precios oficiales de los hidrocarburos, eso incrementa los impuestos que las compañías extractoras y comercializadoras deben pagar.

**Cuadro Nº 6. Comportamiento de sus Principales Variables en el Período 1970-2010,**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas de Petróleo Iviano MB</td>
<td>3.288</td>
<td>3.300</td>
<td>40.800</td>
<td>41.000</td>
<td>56.400</td>
<td>48.800</td>
<td>26.800</td>
<td>13.700</td>
<td>13.992</td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Gas M Mm3</td>
<td>134</td>
<td>317</td>
<td>1.723</td>
<td>2.172</td>
<td>1.910</td>
<td>1.320</td>
<td>1.370</td>
<td>420</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Petróleo Kdpd</td>
<td>0.178</td>
<td>0.831</td>
<td>1.936</td>
<td>2.746</td>
<td>2.553</td>
<td>2.618</td>
<td>3.012</td>
<td>3.330</td>
<td>3.102</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Gas Mm3</td>
<td>13.3</td>
<td>16.9</td>
<td>28.33</td>
<td>26.99</td>
<td>23.6</td>
<td>26.0</td>
<td>35.0</td>
<td>39.5</td>
<td>60.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportación Petróleo Kdpd</td>
<td>N.D</td>
<td>94.4</td>
<td>830.0</td>
<td>1.439</td>
<td>1.277</td>
<td>1.305</td>
<td>1.665</td>
<td>1.814</td>
<td>1.358</td>
</tr>
<tr>
<td>Deuda MUS$</td>
<td>4.262</td>
<td>14.449</td>
<td>33.813</td>
<td>72.682</td>
<td>77.770</td>
<td>100.933</td>
<td>84.660</td>
<td>71.675</td>
<td>110.428</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas de Petróleo Ivanos MB</td>
<td>16.000</td>
<td>18.039</td>
<td>19.666</td>
<td>20.300</td>
<td>56.500</td>
<td>66.300</td>
<td>78.800</td>
<td>78.700</td>
<td>97.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Gas M Mm3</td>
<td>N.D</td>
<td>1.173</td>
<td>1.262</td>
<td>1.754</td>
<td>3.429</td>
<td>4.060</td>
<td>4.150</td>
<td>4.190</td>
<td>4.983</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Petróleo Kdpd</td>
<td>3.708</td>
<td>2.346</td>
<td>2.168</td>
<td>1.677</td>
<td>2.137</td>
<td>2.959</td>
<td>3.239</td>
<td>2.600</td>
<td>2.472</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Gas M Mm3</td>
<td>N.D</td>
<td>17.04</td>
<td>18.51</td>
<td>20.36</td>
<td>19.7</td>
<td>27.2</td>
<td>27.0</td>
<td>29.4</td>
<td>23.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportación Petróleo Kdpd</td>
<td>2.435</td>
<td>1.472</td>
<td>1.415</td>
<td>1.700</td>
<td>2.252</td>
<td>2.51</td>
<td>2.787</td>
<td>2.500</td>
<td>2.320</td>
</tr>
<tr>
<td>Deuda MUS$</td>
<td>1.422</td>
<td>10.000</td>
<td>29.310</td>
<td>35.332</td>
<td>33.170</td>
<td>35.846</td>
<td>36.437</td>
<td>31.063</td>
<td>36.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Igualmente, dispone de las condiciones en que se desarrolla, a partir de 1983 la asunción por el Estado, sin indemnización, de todos los bienes relacionados con las actividades y servicios del negocio petrolero; tal como preveía la Ley de Hidrocarburos de 1943. Para
su efecto Caldera se vale de tres instrumentos legales, aprobados sucesivamente por el Congreso: 1. La Ley sobre Bienes Afecos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, que las compañías afectadas demandan ante la Corte Suprema de Justicia por su supuesta inconstitucionalidad; 2. La Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural; y, 3. La Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos. (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona, 2011). Con base en esas disposiciones, Caldera eleva al 60% el impuesto sobre la renta a las compañías petroleras, e inicia la construcción del complejo petroquímico El Tablazo, en el Estado Zulia. De esa manera deja sentadas las condiciones para la nacionalización y el desarrollo de la política por parte del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1975-1979), es conocido con el apodo de “Venezuela Saudita” por la llegada al país de los efectos de la bonanza petrolera mundial. En ese marco Carlos Andrés decreta el 29 de agosto de 1975, la nacionalización del petróleo; que tiene como antecedente la nacionalización de la industria del hierro. Por el decreto 1123 del 30 de agosto de 1975 crea la empresa de Petróleos de Venezuela. S.A. (PDVSA), para que se encargue de su administración.

Esa nacionalización es considerada por algunos intelectuales y activistas venezolanos como una “estatización concertada”, que a diferencia de la mexicana de 1938 es hecha desde arriba y no desde abajo, es decir, sin la participación de la población venezolana. Es un proceso montado sobre la anticipación de las Concesiones que concluían en 1983, después de 40 años en poder de las multinacionales; pero que siguen conservando las empresas al controlar la organización, la tecnología y las ventas del petróleo al exterior. Es un modelo de nacionalización considerado no traumática sino negociada, que en 1975, a la firma de las “actas de avenimiento” y entrega de las instalaciones, las empresas aceptan a cambio de ser indemnizadas (Mieres, 1981). Esas indemnizaciones van a pesar posteriormente en el endeudamiento del país. Igualmente Venezuela se ve obligada,

...a firmar contratos de asistencia técnica y de comercialización con las trasnacionales cuyas filiales pasarían a convertirse en empresas
operadoras nacionalizadas a partir del 1 de enero de 1976... Se trataba
de una prolongación del viejo estatus de filial concesionaria bajo la nueva
cubierto de nacional, al mando de personal ejecutivo venezolano...
quienes hasta antes de la nacionalización habían defendido los contratos
de sus empleadoras extranjeras...Esta permanencia en los puestos de
c control de estos venezolanos que operan como directivos y de extranjeros
como consejeros formaba parte de la misma negociación global de
las multinacionales para retener el dominio sobre la fracción que le

De esa manera se pasa en el sector, de la dependencia financiera
por la deficiencia de capital para invertir, a la dependencia tecnológica
por la falta de capital intelectual. Detrás de esa dependencia tecnológica
queda oculto el ejercicio de la soberanía plena. En conclusión, las
derivaciones del tipo de nacionalización y del modelo de desarrollo
puesto en práctica en Venezuela, conducen a la reimplantación de
viejas formas de succión del excedente económico, transitoriamente

En cuanto a los ingresos, “en 1974 el ingreso ordinario fiscal ascendía
en Venezuela a Bs. 42.558.000.000, con un incremento del orden de
165% con respecto a 1973. El ingreso fiscal petrolero aumentó en 226%,
para situarse en Bs. 36.448.000.000 en 1974” (Gobierno Bolivariano de
Venezuela, 2008). En años posteriores este ingreso petrolero sufre un
descenso, pero se mantiene en un rango cuantitativo sustancialmente
superior a la tendencia histórica registrada hasta 1973.

La bonanza petrolera le permite a Carlos Andrés Pérez embarcarse
en un programa económico ambicioso, enmarcado en los patrones
entonces en boga del desarrollismo a ultranza. En su despliegue pone
el acento en el sector secundario, y descuida el manejo de los recursos
financieros; establece una política de fuertes inversiones en grandes
complejos industriales, y en transformaciones de estructuras agrarias,
con cargo a sendos fondos especiales nutridos con la renta petrolera. En
el V Plan Nacional propuesto para el período 1976-1980, le apuesta a un
programa de grandes construcciones industriales como la ampliación
de la Siderurgia del Orinoco (Sidor), la creación de nuevas plantas de
refinado de bauxita y fundición de aluminio, y el acometimiento de
diversas obras hidroeléctricas en los caudalosos afluentes del Orinoco.
Otras inversiones hechas en negocios inmobiliarios y financieros, tienen un carácter especulativo, que estimulan las subvenciones y las prebendas. Todas esas inversiones están diseñadas en la expectativa del encarecimiento del petróleo, por eso cuando se da la baja del precio entre 1976-1979, Pérez tiene que a recurrir a los créditos de la banca privada internacional. El Estado entra en endeudamiento, y agrava el déficit de la balanza de pagos. El endeudamiento neto público aumentó en Bs. 40.665.000.000, o sea en 482%, en lo que concierne a la la deuda autorizada;

...pero si se agrega la deuda flotante, estimada al cierre de 1978 en Bs. 30.000.000.000, se llega a un gran total de Bs. 79.099.000.000, como deuda pública. Una parte apreciable del endeudamiento público externo en el periodo considerado se originó en la indemnización acordada a las compañías petroleras concesionarias, como consecuencia de la reserva al Estado de la industria y el comercio de hidrocarburos decretado legalmente en 1975; esa indemnización fue estimada en Bs. 5.000.000.000 (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008).

Venezuela es entonces un país paradójico, tiene una de las gasolinas más baratas del mundo, y uno de los suelos más fértiles del mundo, pero importa el 80% de los alimentos que consume a precios subsidiados. Su agro es ignorado por el Gobierno que no atiende un campesinado emigrado a las ciudades. Un país cuyas manifestaciones de progreso y bienestar resultan engañosas. En 1979 ya queda claro que el viejo enunciado de “sembrar el petróleo” era más que dudoso, y que el gobierno de Pérez no había sido capaz de administrar con tino esa primera avalancha de petrodólares.

Durante el gobierno de su sucesor Luis Herrera Campins (1979-1983) se da el segundo aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Una situación que atiza la situación anteriormente descrita, entre ella el aumento de la deuda externa (CIDOB. 2011). La deuda pasa de US$ 29.310 millones en 1980 a US$38.297 millones en 1983, lo que genera un desfalco de más de 700 millones de dólares en las reservas del Banco Central de Venezuela; y lleva en 1983 a un déficit de 4.246 millones de dólares, para completar una exigencia de 5.940 millones de dólares. Campins decreta la devaluación del bolívar, que oscila hasta el final de su mandato, entre Bs. 12 y Bs. 15 por dólar en
el mercado libre, junto a la disparidad que se genera del bolívar con respecto al dólar. Igualmente crece la inflación.

Su sucesor Jaime Lusinchi (1983-1988) hereda una situación socioeconómica crítica. Con el lema de un gobierno de austeridad y sensibilidad social, se propone la construcción de un nuevo pacto social y reformar el Estado. Sus propósitos resultan un fiasco por los escándalos de corrupción administrativa, el mal manejo del sistema cambiario en el organismo de Régimen de Cambio Diferencial (RECADI), en los que están incluidos los partidos políticos, y la inversión en empresas del Estado que nunca existieron, creadas con la única finalidad de solicitar dólares preferenciales. “el abuso de los más de 50.000 millones de dólares en el pago de la deuda pública externa que nunca se solventó el mal manejo de recursos y el desprecio que causó el balance de las reservas del Banco Central de Venezuela, que en diciembre de 1985 eran de 10.251 millones de dólares, y para 1988 eran de apenas 3.092 millones de dólares”. (Wikipedia, 2012).

En 1989 se inicia la segunda presidencia de Carlos Andrés (1989-1993) en medio de una situación económica que empeora paulatinamente con la baja en los precios del petróleo, la devaluación de la moneda, una alta inflación y una pesada deuda externa. Pérez se acoge a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y se somete a un programa, bajo la supervisión del FMI, con el fin de obtener aproximadamente US$4.500 millones en los 3 años siguientes. En consecuencia con las exigencias de esos organismos, implementa un plan de austeridad, aumenta el precio de la gasolina en un 100%, y un 30% el transporte; congela los salarios, y reduce el tamaño del Estado y del gasto público. Junto a la liberación de las importaciones, elimina los controles de precios, y da paso a la privatización de empresas estatales, en consecuencia pone en venta la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

La reacción del movimiento popular se hace sentir los días 27 y 28 de febrero de 1989 con a través del denominado “caracazo”. El movimiento se inicia en Caracas y se expande por otras ciudades del país: La Guaira Barquisimeto, Mérida, Guayana y los Valles del Tuy. La población saquea los supermercados, centros comerciales y establecimientos de todo
tipo. Ante la incapacidad policial, el gobierno hace intervenir al ejército a través del denominado Plan Ávila para contener las manifestaciones, pero deja una cifra oficial de 276 muertos y numerosos heridos y cerca de 2.000 personas desaparecidas. Los hechos debilitan el piso político en el que se sustentaba el gobierno.

A estos hechos de acción popular le siguen dos intentos de golpe militar. Uno en la madrugada del 4 de febrero de 1992, liderado por varios oficiales medios de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuales se encontraba el Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez. De este golpe escapa el presidente refugiándose en la planta de la cadena de televisión Venezvisión, desde donde recupera el control. El segundo intento se da el 27 de noviembre del mismo año, durante el cual los golpistas llegaron a bombardear algunos edificios públicos, como el Palacio de Miraflores, El Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Aeropuerto La Carlota, que resultó igualmente fallido. La pérdida de las elecciones municipales y regionales el 6 de diciembre de ese año por parte de su partido la Acción Democrática, abre las puertas del proceso que se cierra el 21 de mayo de 1993, cuando es separado de sus funciones por el Congreso Nacional.

Elegido Rafael Caldera para un segundo mandato (1994-1999), muestra escepticismo frente al proceso de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y la apertura económica defendida por Washington. En sus dos primeros años, promulga una política económica estatista y de controles. Pone distancia con el gobierno de Bill Clinton, que se empeña en profundizar las reformas neoliberales en América Latina y en colocar los temas de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos como prioritarios de la agenda hemisférica. Caldera enfrenta una vertiginosa espiral inflacionista, y el descenso de las reservas de divisas, empleadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) para sostener la baja del bolívar frente al dólar. Las entidades financieras que se encuentran en bancarrota por la fuga de capitales y las prácticas especulativas, son intervenidas y saneadas por el Estado. Pero esas y otras medidas tomadas no son suficientes para generar la estabilización esperada. En 1996 se registra la histórica inflación del 103% y un crecimiento negativo del PIB de menos de medio punto, tras el 4% de crecimiento positivo generado en 1995.
Entonces opta por "las medidas ortodoxas de corte neoliberal, que el FMI venía reclamándole como condición para liberar un préstamo standby de 1.400 millones de dólares y que hasta entonces el presidente, preocupado por las repercusiones sociales, se había resistido a adoptar en cumplimiento de una promesa electoral" (CIDOB, 2011). Devalúa el bolívar en un 70%, unifica los tipos de cambio, levanta los controles sobre las transacciones corrientes y de capitales, y liberaliza los tipos de interés bancarios; eleva las tarifas de los servicios públicos y eleva los precios de los combustibles en un 800%. Destina para el pago del servicio de la deuda una tercera del presupuesto (US$ 36.000 millones), abraza la disciplina fiscal e implementa una reforma tributaria ad hoc. Implanta el IVA y reforma el régimen de prestaciones sociales. Ese paquete de medidas de estabilización y ajuste estructural, que recibe el nombre de Agenda Venezuela es ejecutado por el ministro de Planificación Teodoro Petkoff Malek. Las perturbaciones financieras y bursátiles a nivel de la región en 1998, espoleadas por la crisis brasileña; más la súbita caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, arruinan las expectativas de recuperación. Al final del mandato de Caldera regresa el estancamiento, así como las desvalorizaciones del bolívar, preludio de una aguda recesión. La mala coyuntura del mercado del petróleo tuvo un efecto automático en las rentas del Estado. Ante la crisis fiscal el Estado hace uso de los productos de las privatizaciones parciales acometidas en los sectores siderúrgico, turístico y de las telecomunicaciones.

En cuanto al sector petrolero, Caldera le apuesta a la apertura al capital privado internacional de la compañía estatal de petróleos PDVSA, con el fin de repartir los costos y abrir nuevas líneas de negocios.

Los bajos salarios, la inequidad en el reparto de la renta y la parquedad de los programas sociales para amortiguar el impacto de las recetas anticrisis, y los índices de pobreza que no hicieron más que empeorar, crean las condiciones para que Rafael Chávez, a través de un nuevo partido: el Movimiento Quinta República (MVR), sea elegido presidente en 1998. Un mandatario que dentro de una estructura internacional cambiante, tiene una interpretación muy singular de un país en turbulencia.
2.3 MÉXICO: 1970-2000

En México, en el momento de darse la elevación de precios del petróleo en los años setenta, se encuentra al borde de su propia crisis, después de un período de crecimiento conocido como de "desarrollo estabilizador", montado sobre la riqueza prodigada por el recurso petrolero. En ese periodo el país alcanza un crecimiento del PIB absoluto del 108%, para un promedio anual del 6.3%. La inflación crece un 34% en el ciclo de 12 años, equivalente a un promedio anual del 2.47% anual, significativo para tan largo período (Aguirre, 2010). La política desarrollista de industrialización se sostiene en el subsidio de los precios energéticos, junto a un acelerado gasto público por encima de la recaudación tributaria; que al perder solvencia financiera incide en su endeudamiento. En 1973, tres años antes de estallar su crisis, los impuestos petroleros representan el 2.2% de los ingresos del gobierno federal y 0.3% del PIB. (Colmenares, 2009).

En los primeros años de la década de los setenta México está al borde de una crisis petrolera, pues Pemex acusa problemas financieros, debido entre otras a que, desde 1958, no incrementa sus precios internos. En 1972, aumenta la importación de crudo y derivados para abastecer el mercado interno, estos derivados los vende a pérdida porque se hacen a precios inferiores al de compra y en pleno aumento de los precios a nivel mundial. La situación se solventa con el descubrimiento en 1972 del campo de la Reforma con reservas calculadas en 20 mil millones de barriles de crudo y cerca de 300 MMm3 de gas (Escalante, 1987); que ubica a México en el cuarto lugar a nivel mundial, con reservas totales calculadas en más de 40.000 millones de barriles. Ese descubrimiento, más el aumento de los precios internos impuestos desde diciembre de 1973, provoca un cambio en la posición financiera de Pemex, que se replica en un cambio cualitativo en el conjunto de la economía mexicana. Esas condiciones impulsan la actividad refinadora en el marco de la ideología económica desarrollista, de exportar manufacturados en vez de materias primas, también propicia la baja en los costos internos para estimular la industria nacional. Las exportaciones son restringidas al excedente que resta de satisfacer la demanda interna, en consecuencia con la posición asumida, desde la nacionalización, de que los recursos petroleros nacionales deben destinarse solamente a la satisfacción
de sus necesidades internas. Ante la nueva situación México es asediado por los Estados Unidos, que le ofrece ayuda técnica y financiera para el desarrollo del descubrimiento a cambio del pago de los servicios ofrecidos, o su amortización de los créditos, con una porción de la producción. (Philip, 1982; Estados Unidos se convierte, entre 1975 y 1979, en centro del 85% de las exportaciones mexicanas; posteriormente,

"...desde 1982, con exportaciones del orden de 632 mil barriles diarios (que significaban el 14 por ciento de las importaciones totales petroleras norteamericanas) México desplazó a Arabia Saudita como el principal país abastecedor de dicho mercado, a la vez que se convertía en el único proveedor de la reserva estratégica norteamericana con volúmenes promedios de 50 mil BD". (Palacios I., 1987, pág. 30).

La administración de Luís Echevarría Álvarez (1970-1976) aumenta de forma considerable el gasto público, emite papel moneda sin valor y contrata una gran deuda externa. La deuda pasa de US$6.000 millones, heredados del gobierno de Díaz Ordaz, a más de US$20,000 millones, que la utiliza para la compra de empresas al borde de la quiebra y sostener una burocracia estatal ineficiente y corrupta. A fines de 1976 se da el inicio de la captura de la renta petrolera externa que contribuye al crecimiento del momento, pero que no impide que en 1976 estalle la crisis. Durante la crisis, se da la salida de miles de millones de dólares del país y una devaluación que alcanza el 80%. Echevarría apela a un préstamo del Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo de ejercer un presupuesto reducido y mantener bajos los salarios. Al finalizar el gobierno el excedente petrolero mexicano es cuatro veces superior a 1973 y alcanza una producción de más de 800,000 B/D. (Ver cuadro N° 6), una situación de bonanza que hereda su sucesor José López Portillo (1976-1982).

López Portillo inaugura su gobierno señalando que México debe prepararse para administrar la abundancia. El aumento en el volumen de las exportaciones por el alza en los precios internacionales (1980: US$31,19 y 1981: US$32,20) aumenta sus exportaciones, que representan el 72% del total de las ventas externas en 1980 y el 82% en 1982; y los impuestos petroleros que representan el 25% y 44%, respectivamente. Eso origina el fenómeno conocido en México como
la Petrodolarización de las finanzas públicas, que ante cualquier cambio en los precios a nivel mundial, pone en jaque al gobierno y al país. (Colmenares, 2009).

La bonanza le prodiga a López Portillo unos 100 mil millones de dólares entre 1978-1981, que aprovecha Portillo para tramitar una serie de préstamos ante la banca internacional. Los préstamos los destina a la exploración e infraestructura petrolera, y para impulsar proyectos de desarrollo como: la Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo. También le sirven para multiplicar la burocracia estatal, al crear nuevas secretarías de Estado y variados organismos, y para adquirir y participar en cientos de empresas. Esas acciones reducen los excedentes del petróleo y multiplican la deuda externa. En 1982 declara la moratoria del pago de la deuda, y la devaluación de la moneda de $28.50/dólar a $70/dólar. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, anuncia el caos, y opta por nacionalizar la banca. Esta nacionalización, le va a costar al Estado mexicano el pago de una fuerte indemnización, que aumenta su apretada situación fiscal.

Su sucesor Miguel de la Madrid (1982-1988), es ungido presidente bajo una elección cuestionada frente a su opositor el candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas. Llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, pues en 1982 se da la caída de los precios del petróleo y en 1986 se da su desplome, que reduce a US$ 5.460 millones el valor de las exportaciones petroleras. La tercera parte de 1984. Esa situación hace visible la dependencia de la renta petrolera, tanto de la economía como de las finanzas del Estado mexicano.

La economía pasa de un crecimiento del 9% entre 1980-1981 a 0,6% en 1982, y al 4,2 en 1983. El desplome de los precios petroleros en 1986 reduce la participación de los impuestos petroleros al 37% del total de los ingresos ordinarios del gobierno federal, la caída de 1998 coloca al precio real solo 8% por encima de 1973 y al mismo nivel de 1948. Esos indicadores muestran la vulnerabilidad de la economía ante los cambios externos. Pero la economía también se resiente por el crecimiento de la inflación en un promedio de 100% cada año y del empleo informal en un 20% entre 1983 y 1985; como la disminución del
poder adquisitivo, y la caída drástica de la producción de las industrias gubernamentales.

Miguel de la Madrid emprende las conocidas medidas de "corte estructural", que incluye la "privatización hormiga", es decir, gradual de PEMEX (Jalife-Rahme, 2007), y que va a continuar su sucesor Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). De la Madrid implementa lo que denomina la Renovación Moral de la sociedad, elabora un Plan Global de Desarrollo, denominado "desarrollo estabilizador", y establece a nivel constitucional un sistema de planeación democrática con el fin de reducir el gasto público del 28% en 1981 al 18% en el 94 y 16% en el 2000. Con esas medidas busca responder con el pago de la deuda que absorbe el 30% de los ingresos. La política neoliberal de la Madrid es de conservadurismo fiscal, y financiamiento del déficit público por el sector privado mediante transferencias de ahorros financieros, basadas en las crecientes tenencias de deuda pública por los bancos y demás financieras. De la Madrid inicia la implementación de la apertura económica, la desregulación y la descentralización del Estado, así como la privatización de empresas estatales, un proceso que profundiza con sucesor. De esa manera introduce a México en el círculo del consenso de Washington y da inicio a una silenciosa pero creciente integración de la economía mexicana a la norteamericana (Ortíz, 1987).

Carlos Salinas (1988-1994) considera ineludibles la profundización de las políticas neoliberales para conformar el México moderno del siglo XXI. Acelera la campaña de privatizaciones, comenzada en 1982, de todas las grandes empresas del Estado: Telmex, es adjudicada a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú; en seguida las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y la banca, que supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo. El Banco central de México, Banxico, lo dota de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, opere con autonomía funcional y administrativa. Las privatizaciones las justifica a efectos de ingresos para el Estado, que el Gobierno destina a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales. Una gigantesca operación que le generó ingresos por US$10.700 millones.
Pemex no sale indemne de la avalancha de liberalizaciones, pues a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empieza a ser estructurada como un holding corporativo, bajo los criterios de eficiencia y racionalidad. La dota de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y la abre a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias. Orienta su producción hacia las exportaciones en detrimento de la industrialización. Fundamenta el desarrollo en la liberalización comercial, y el desarme arancelario a gran escala, y en ese orden le apuesta a la inclusión de México en el área de libre de Canadá y Estados Unidos. El proceso culmina el 17 de diciembre de 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto al presidente norteamericano George Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. El pacto considera un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años a partir del primer día de 1994. En opinión de Salinas, el libre acceso al vasto mercado norteamericano de 290 millones de habitantes va a relanzar las exportaciones mexicanas, mientras que la apertura normativa doméstica va a facilitar el desembarco de fuertes inversiones de los empresarios del norte en las maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial, con la consiguiente creación de miles de puestos de trabajo. El gobierno mexicano de Salinas concibe el TLCAN como un elemento fundamental en su estrategia económica. “La estrategia era y sigue siendo exactamente la receta del FMI y del Banco Mundial: crecer en base a la demanda externa (exportar) y el impulso de la inversión extranjera. El crecimiento generaría empleos y permitiría disminuir la pobreza” (Picard, 2004). Efectivamente crecieron de manera enorme las exportaciones y se atrajo una gran inversión extranjera, que terminó yendo más allá de los asuntos comerciales al trasladarse al dominio sobre la inversión extranjera directa de la política monetaria, la seguridad nacional y el manejo y usufructo del territorio mejicano y sus recursos naturales, incluido los recursos fósiles. (Saxe-Fernández, 2007).

Salinas es igualmente diligente para adherir a México a las iniciativas emergentes de la nueva economía globalizada. Ingresa en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1993, y es admitido en 1994,
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo exclusivo del capitalismo internacional. A partir de entonces se convierte en una especie de embajador y hacedor de tratados de libre comercio. Su diplomacia económica aprueba la lleva a Centroamérica y Sudamérica. En 1991 realiza una cumbre con los cinco presidentes centroamericanos con quienes firma en 1992, la creación de una zona de libre comercio, que se extiende en 1994 a Nicaragua y Costa Rica. Con Colombia y Venezuela, socios del denominado Grupo de los Tres (G-3), establece un área de libre comercio a partir en 1995. En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), firma otro Tratado de Libre Comercio con Bolivia en 1994, y un Acuerdo de Complementación Económica con Chile en 1991.

La gestión económica muestra un crecimiento del PIB anual mexicano del 3.2% en el primer cuatrrienio de la administración. En 1993 la tasa cae al 0.4%, debido a una actuación del Gobierno para impedir el recalentamiento de la economía. En 1989 la inflación es del 19.7% para remontarse en 1990 al 30%, y descender progresivamente hasta el 7.1% en 1994. La gestión económica está ligada a la negociación con el FMI, la banca comercial y una serie de gobiernos acreedores para la reestructuración de la deuda externa. En 1989 se acoge al Plan Brady ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos, por ese medio recorta el servicio de la deuda a la mitad, oscilando el monto de la misma, hasta 1992, por encima de los US$100.000 millones, para iniciar nuevamente su crecimiento. Los logros en las luchas contra la inflación y el déficit de las finanzas públicas le permiten obtener un superávit del 3.4%, a un costo alto para la población, con la disminución sistemática del poder adquisitivo de las clases medias y bajas, y de las pobreza generalizada que compensa con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), financiado con el producto de las privatizaciones. Salinas invierte US$18.000 millones de dólares en infraestructura de comunicaciones, servicios sociales, vivienda subvencionada, becas de estudios y otras ayudas. En el sexenio salinista se supone la constatación de un nuevo milagro económico mexicano, pero que resulta huero pues la mayoría de los capitales privados están siendo invertidos, no en actividades productivas y generadoras de riqueza estructural, sino en fórmulas de riesgo financiero con alta rentabilidad, por ejemplo, en instrumentos de
deuda pública como los tesobonos pagados en dólares en vez de pesos, que crean una peligrosa burbuja especulativa.

El sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo (1994-2000), se encuentra con una complicada debacle financiera al ser enterado por el Banco Central (BANXICO) de que las reservas de dólares se están agotando, en el vano intento de sostener al sobrevalorado peso. Para contrarrestarla, aprueba una devaluación monetaria del 15% que es absorbida de inmediato por la dinámica del mercado libre. De inmediato se revela una gravísima crisis financiera provocada por la salida masiva de capitales especulativos, unos US$24,000 millones. El peso, puesto en flotación, cae en barrena y pierde el 60% de su valor, que convulsiona los mercados internacionales y origina en 1995 la crisis o efecto tequila, que coloca al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra. La catástrofe se evita por un apurado plan de salvamento internacional, coordinado por el FMI y dirigido por el Tesoro de Estados Unidos, que le inyectan US$51,000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad. El plan consiste en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, y la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. Bajo una condición extrema y dolorosa que le impone Washington al Estado mexicano, que a cambio de la gigantesca contingencia crediticia, depositara como garantía de pago en un banco estadounidense los US$7,000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, que nos es otra cosa, que una hipoteca sobre la columna vertebral de la producción nacional: La producción de hidrocarburos.

El préstamo que estabiliza al sistema financiero, acompaña, en 1995, una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. La restauración financiera conduce a la destrucción de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. México con un 40% de la población por debajo del umbral de una pobreza acentuada, se convierte en uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Una situación social que se simboliza con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de enero de 1994, y las protestas estudiantiles en la capital del país.
2.4 MÉXICO-VENezUELA: 2000-2010


2.4.1 México

En el año 2000, al momento de posesionarse Vicente Fox, la economía mexicana crece en un 7%, y la inflación desciende del 16,6% al 9,5%. El peso está estabilizado frente al dólar. BANXICO, aumenta sus reservas en US$33.500 millones. La colocación del precio del barril de crudo está por encima de los US$30 dólares, lo que dispara los ingresos petroleros. Las exportaciones no petroleras crecen en un 20%. Pero en el último trimestre del año 2000 se empiezan a manifestar las consecuencias negativas de la deceleración económica de Estados Unidos, debido al efecto de la dependencia comercial mexicana de ese país, del cual es cliente en cerca del 90% de las exportaciones, y proveedor del 73% de sus importaciones. En la segunda semana de diciembre los precios internacionales del petróleo comienzan una tendencia a la baja. Fox prioriza la reforma del sistema fiscal aplicando un Impuesto al Valor Agregado (IVA), único del 15%, a los alimentos y los medicamentos. Con esa medida espera obtener para las arcas públicas US$14.000 millones, suplementarios hasta 2006, para solventar los compromisos derivados de las deudas del Estado, que alcanzaba los US$150.000 millones de dólares. El nuevo marco fiscal precisa la enmienda de la Constitución y la aprobación por el Congreso, de mayoría Priista. El Congreso aprueba
tres leyes en materia de fiscalidad, pero deja por fuera el polémico punto del IVA. (CIDOB. 2011.). El primer año de gobierno de Fox, presenta un balance globalmente positivo de: estabilidad monetaria, elevación de las reservas de divisas en los US$ 40,000, control de la inflación en 6,4%, y de los tipos de interés; control del déficit público y, un vigoroso aumento de la inversión extranjera directa que supera los US$24.000 millones, el triple de tres años atrás. El severo impacto de la crisis estadounidense demora la implementación de las reformas estructurales prometidas, y la inamovilidad del problema de la pobreza; en medio de una sociedad menos interesada en los planes de liberalización de las ramas de la economía, que en la mejora sustancial de su nivel de vida.

En el 2002 Fox se encuentra en una encrucijada, pues la empresa privada y los sectores políticos más conservadores de su propio partido, le instan para que avance sin remilgos por la senda de las reformas estructurales. En su contra, las izquierdas y los movimientos sociales le advierten contra sus tentativas neoliberales. Fox que hasta el final de su mandato persiste en las reformas, envía en el 2003 al Congreso, varios paquetes de reformas, entre ellas la de abrir sin restricciones a PEMEX a la inversión privada extranjera según la fórmula de “asociación bajo contrato”. Una apertura de la petrolera que considera fundamental para modernizarla y expandir su capacidad productiva sobre nuevas bases tecnológicas. Sus intentos reformistas se agotan en el 2004, debido a la agitación social suscitada, y al deterioro de las relaciones con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su dirigente Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno cierra con una inflación reducida, cierto equilibrio presupuestario, el peso fortalecido, un manejo eficiente de la deuda externa, y reservas internacionales de US$ 73,000 millones; gracias a la escalada alcista que se da de los precios del petróleo.

A nivel internacional se destaca los enfrentamientos de Fox con los gobernantes de los países de más peso en el escenario Latinoamericano, que distancia a ese país de los demás de la región, y de sus procesos de integración. En el año 2005, en el marco de la IV Cumbre de Las Américas, en Mar del Plata, Argentina, en la denominada “Cumbre de los Pueblos”, (concebida por sus organizadores como una contracumbre alternativa); mientras Chávez la defiende en aras de su propuesta Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Fox abandera el orden
México y Venezuela

de prioridades del relanzamiento del ALCA, y considera que se puede poner en marcha sin la presencia de Venezuela y de los cuatro países del MERCOSUR. Estos países se oponen al ALCA, por considerar que daña los intereses de la subregión. Fox a su vez, se enfrenta duramente con el presidente anfitrión y miembro del MERCOSUR, Néstor Kirchner, y se va de Argentina convencido de que México, obtendrá el estatus de estado asociado al MERCOSUR antes de terminar su mandato en diciembre de 2006. Un optimismo exagerado, si se tiene en cuenta el malestar que le suscitó también a Brasil al suspenderle un acuerdo bilateral sobre la exención recíproca de visado, tal como lo había hecho también con Ecuador. Con Venezuela rompe relaciones, que quedan reducidas al nivel de encargados de negocios. En el 2005 entra en pugna con Chile alrededor de la elección del nuevo secretario general de la OEA, ante la derrota de su postulado de Luis E. Derbez frente al ex canciller chileno José Miguel Insulza. En enero de 2006, critica la estrategia nacionalista sobre el gas de Bolivia llevado a cabo por Evo Morales. Ese accionar diplomático de Fox, indica la pérdida del ascendiente de México en la diplomacia del sur del hemisferio, vigente desde entonces.

Fox en reemplazado por Felipe Calderón (2006-2012) un abogado de perfil tecnocrático y miembro del partido de Fox, que concibe una campaña electoral distante de su predecesor. Propone un crecimiento económico que supere el mediocre 2,3% de promedio registrado en el anterior sexenio, la creación de empleo productivo, la puesta de un modelo de desarrollo humano equitativo, y un entorno de mayor seguridad frente a los zarpazos de la criminalidad ligada al narcotráfico. Calderón presenta el Proyecto de Gran Visión México 2030, como punto de partida de su Plan Nacional de Desarrollo, que consiste en una serie de foros y talleres nacionales en los que representantes de la sociedad civil analizan las perspectivas de México y elaboran recomendaciones para el futuro. Calderón prospecta escenarios para el México del 2030, metido entre las “cinco economías emergentes más importantes del mundo y probablemente entre las diez más poderosas”, donde cada habitante tuviera “ingresos cercanos a los 30.000 dólares, equiparables a los que tienen las economías desarrolladas”, y donde la pobreza extrema estuviera “totalmente erradicada. (CIDOB. 2011). La crisis del 2008 en Norteamérica, golpea al unísono a la mexicana por estar enmarcada en el TLCAN. Este gris panorama representa un golpe para
las expectativas de Calderón sobre una pronta recuperación económica y sus planes anticrisis, que incluye el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo. Por efecto de la crisis en cosa de tres meses se pierden 413 mil empleos y la producción fabril acumula un crecimiento negativo del 8.3%. En el periodo enero-julio de 2010 el déficit promedio de la balanza comercial en México supera los 724 millones de dólares, y alcanza su punto más alto en julio; mientras que el producto interno bruto solo crece un 3 %, después de la caída del año anterior del -7%, que lo coloca en un crecimiento real del -4% (Morón, 2010). A esa situación se le añade la escalada del narcotráfico que pone a México al borde de un estado fallido.

Vicente Fox y Felipe Calderón, al igual que Hugo Chávez, se ven beneficiados del aumento de los precios del petróleo a nivel internacional (Ver Gráfica N° 3), además de imponerse en México un aumento en los precios internos.

Gráfica N° 3. Precio Barril de crudo (US$ Barril/WTI)

Fuente: Ecopetrol.
En la gráfica N° 4 se aprecia cómo, de los US$500 mil millones captados entre 1977-2006, el gobierno de FOX recibe más del 48%, unos US$240.892. La renta petrolera externa aumenta en más del 12%, duplicándose en 6 años (Ver gráfica N°2), que se utilizada para el crecimiento del gasto corriente del sector público y el pago de las obligaciones del servicio de la deuda. No se “despetrolizaron” las finanzas públicas sino que se vuelven más dependientes de los impuestos petroleros. Una situación afín al modelo desarrollista, que no es superada por la implementación de las políticas neoliberales y el TLCAN. (Colmenares. 2009).

**Gráfica N° 4.** México Ingresos Petroleros Millones US$

Por su parte Chávez recibe el 77.5% de los ingresos petroleros obtenidos entre los años 1986-2010. Como lo ilustra la siguiente gráfica.
La Política Petrolera en América Latina: 1970 - 2010

Gráfica N° 5. Venezuela Ingresos Petroleros: Lusinchi, Pérez, Caldera y Chávez

Fuente: Briceño-León 2011. BCV, y Santos 2011

Fox no ahorra esfuerzos en impulsar la profundización de la privatización de Pemex de la mano de su aliado el Presidente norteamericano George W. Bush (2001-2009), a través de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM). Los CSM permiten la incorporación del capital privado en la explotación y exploración de petróleo, y habilita la contratación de un administrador que sustituya al administrador principal, en ese caso a Pemex. Por ese medio se da la inversión de Lewis Energy Texas, con el apoyo de la Casa Blanca, y la censura del senado mexicano. La regasificación y distribución son entregados a Royal Dutch, Shell, Total, Chevron Texaco, Maratón Energy, Halliburton, Kellogg, Brown and Root, Bechtel, entre otras. La gestión petrolera de Fox se enmarca en “El esquema de integración de la América del Norte (que) impulsa el control directo de Washington sobre cualquier provincia petrolera de México”... Estados Unidos, Fox y el Banco mundial insisten en el desmantelamiento de Pemex y en dejar a la empresa como mera instancia de trámite de contratos de exploración y explotación” (Saxe-Fernández, 2007, págs. 77,79). En ese orden en junio de 2005 con motivo de la actualización del TLCAN y con el objetivo de avanzar en una integración a profundidad, se acuerda avanzar en la homologación regulatoria, la eficiencia energética, el comercio del gas natural, la energía nuclear el gas y al producción petrolera a partir de las arenas bituminosas, incorporados a mecanismos de seguridad. La estrategia tiene como objetivo suplir la deficiencia estadounidense de su autarquía energética, que lo hace dependiente del aprovisionamiento en el exterior.
y, particularmente, de sus vecinos: Canadá, México y Venezuela. De esa manera con la integración energética, se termina de crear el contexto para concluir las reformas estructurales pendientes en el TLCAN.

Los resultados de la política petrolera señalan que desde el 2003 a 2006 se hace una inversión en el sector de US$1.5962.2 millones, y se encuentran reservas de 2.456.7 millones de barriles, que acompaña un incremento fenomenal en la producción y las exportaciones. Las reservas igualmente se reducen en casi un 50% entre los años: 2000-2005, que pasan de 26.900 millones de barriles a 13.700 millones, al unísono con las exportaciones, que pasan de 585.3 millones de barriles a 663.8 millones un poco más del 14% (Ver cuadro N° 6). En el 2006, México es el sexto mayor productor de petróleo, con una de 3,71 millones de barriles por día. La disminución de sus reservas se corresponde con el aumento de las exportaciones a los EE.UU. Igualmente, como se ha dejado de invertir en la refinería se promueve la importación de derivados “en cerca del 30% de la gasolina, 155 de diesel, 20% del gas licuado, y entre 15 y 10% de gas natural. A precios superiores a los de la producción nacional”. (Sheinbaum, 2007, pág. 97) Las reservas que en el año 2000 se consideraban para 20 años con 24.700 millones de barriles, en el 2006 con 11.800 millones que alcanzan para 10 años. En gas se han reducido las reservas a la mitad, en el 2.000 eran de 38.950 miles de millones de pies cúbicos para 24 años, en el 2006 son de 19.956 que alcanzan para 11 años (Garaicochea, 2007). Un consumo sinigual de las reservas, que tiene su inicio en la década de los ochenta y que caracteriza, desde entonces, la política petrolera mexicana.

El Presidente Calderón le da continuidad a la política de Fox. En el 2008 propone una Reforma Energética con el objetivo de asociar a Pemex con empresas extranjeras a través de alianzas estratégicas, asociaciones integrales y venta de acciones, para financiar proyectos de explotación eincrementar la exploración en aguas profundas. La reforma implica cambiar el artículo 27 de la Constitución Nacional, que impide el otorgamiento de concesiones y contratos para la explotación del petróleo mexicano. Simpatizantes de la reforma como Humberto Aguirre, catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, señala: “Ahora, se tiende a asustar a la gente usando el estandarte de la soberanía. Lo que realmente ocurre es una confusión en la terminología usada,
el petróleo es un asunto de seguridad nacional, no de soberanía". (Universia Knowledge@Wharton, 2008). El proceso lo arrecia Calderón a través de la denominada por algunos académicos como “privatización cucaracha” de Pemex, por hacerse a escondidas de la nación, a través de las alianzas estratégicas (Jalife-Rahme). Un proceso que indica el desmonte de la política petrolera nacionalista mexicana, iniciada sesenta años antes con Lázaro Cárdenas. Por su parte, el Banco Mundial induce para que Pemex restrinja sus programas de ampliación de la planta refinadora, y aumente inusitadamente las exportaciones de crudo (Saxe-Fernández, 2007).

Para el 2010, las cifras de la producción de petróleo crudo de México caen desde el 2007, y se sitúan por debajo de 3,0 millones de barriles por día. Las mismas autoridades mexicanas pronostican la continuidad de esta disminución en el futuro, y se declaran pesimistas de que pueda llegar de nuevo a los niveles anteriormente alcanzados. La inversión extranjera que aumenta la producción, cae de 8,4% durante el primer trimestre 2009 a unos 2,67 millones de barriles diarios a fines del mismo año debido a que el principal campo del país, Cantarell, sigue en declive. En marzo del 2010, PEMEX informa que con la tasa de producción actual, las reservas probadas de petróleo alcanzarían sólo para 10 años más de producción. Para ese mismo año, Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo.

2.4.2 Venezuela

En Venezuela, con la declaración de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Presidente Chávez, se inicia el siglo XXI. Chávez en 1994 es sobreseído por Rafael Caldera del caso militar golpista de 1992 a cambio de su baja del Ejército. La indulgencia le permite desarrollar activismo político en el ámbito civil y legal. Se acerca a Cuba y se inscribe en Montevideo en el Foro de Sao Paulo (FSP), un marco de encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, montado en 1990 por Fidel Castro y el dirigente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva.

Al interior de Venezuela se dedica a construir la fuerza política con militantes profesionales de trayectoria izquierdista que
simpatizaban con el bolivarianismo, de la que surge el Movimiento Quinta República (MVR);

...con el objetivo fundamental: derrocar a la vieja clase partidista, que el común de los venezolanos identificaba con los abusos cleptocráticos y los despiñafres que habían dilapidado los ingentes ingresos obtenidos en los años del boom petrolero y, en general, las vacas gordas de las exportaciones primarias de un país regalado con vastos recursos naturales. (CIDOB. 2006).

Para su efecto se propone la reforma de la Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente.

En las elecciones legislativas de 1998, el MVR, se convierte en el segundo partido del país al obtener 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, cuatro décimas menos que AD; mientras Convergencia, el partido de Caldera, obtiene el 2.4%, y se da el hundimiento del COPEI. En las elecciones presidenciales de 1998 Chávez es elegido presidente en el marco de un Polo Patriótico compuesto por varias fuerzas de izquierda. En el debate obtiene el 56,2% de los votos válidos, se posesiona en 1999 para el quinquenio que termina en 2004. En su primer decreto, convoca un referéndum para decidir sobre una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el fin de abrogar la Carta Magna de 1961 y la disolución del Congreso. Acto seguido solicita del legislativo la aprobación de una Ley de poderes especiales para enfrentar el estado de “emergencia social” y reducir el déficit fiscal, que alcanza los 9.000 millones de dólares, equivalente al 9% del PIB; enfrentar la recesión y la inflación que superaba el 30% anual y el paro laboral que marcaba el 12%. Acuña el lema: “tanto Estado como sea necesario y tanto mercadado como sea posible”. Al considerar que los militares deben desempeñar tareas de apoyo a la población, elabora el Plan Bolívar 2000, con el objetivo de movilizar a soldados y voluntarios civiles en labores de vacunación, distribución de alimentos, construcción de carreteras y facilitación de servicios educacionales; con base en ese Plan en el 2004 institucionalizaba posteriormente las Misiones Bolivarianas. (CIDOB. 2006).

El 5 de agosto de 1999 Chávez proclama en la ANC la defunción de la “IV República” y declara la “reorganización de todos los órganos

En las elecciones presidenciales del 2000, en el marco de la nueva constitución, Chávez obtiene el 59,8% de los votos e inicia un segundo mandato con fecha de conclusión en enero de 2007. Luego será reelecto en el 2006 para un tercer periodo hasta el 2013.

El segundo mandato lo acompaña de una agresiva política exterior impregnada del pensamiento bolivariano, expresado en una suerte de nacionalismo hemisférico. Sus periplos por el mundo lo llevan a tener enfrentamientos con los Estados Unidos al visitar regímenes como el Saddam Hussein y concertar negociaciones con gobiernos cuestionados por el gobierno americano. El enfrentamiento se patentá en la gira del año 2000 por los otros diez estados de la OPEP, con el objeto de invitar a sus respectivos mandatarios a una cumbre en Caracas encaminada a fortalecer la unidad de criterio en la organización energética, y a estabilizar el precio del barril de crudo, que entonces cotizaba al alza en torno a los US$30.

En lo que respecta a la gestión interna, en el año 2000 Venezuela registra una inflación del 13,4%, siete puntos menos que en 1999 y la tasa más baja desde 1986. La cuenta corriente consigna su mayor superávit en cinco años, y el déficit fiscal se ve reducido hasta el 2%. En el segundo año de gobierno se salda un crecimiento positivo del PIB del 3,2%, cuando 1999 había tenido una recesión del 7,2%.

En 2001, da los primeros pasos hacia la reforma agraria con la entrega de 105,000 acres de latifundios baldíos del estado de Zulia al Instituto Agrario Nacional (IAN). La reforma la profundiza a partir del 2004, con la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se tradujo en expropiaciones por decreto de “tierras ociosas” pertenecientes a grandes terratenientes, y su entrega a campesinos pobres.

En los años 2002-2003 Chávez es derrocado y restaurado en el poder, tras una huelga que involucró la petrolera PDVSA y un golpe de estado congratulado por los EE.UU, (Golinger, 2005) pero condenado
por los gobiernos de Latinoamérica en la XVI Reunión del Grupo de Río realizada en Costa Rica. Tras un contragolpe se hace nuevamente al poder en medio de una caída de la producción, la depreciación del bolívar y la huida de capitales del país, una recesión del 9,2%, una inflación del 31% y una radical caída de las exportaciones de crudo, que le causan a la economía nacional pérdidas calculadas en más de US$7.600 millones, que obligó al Gobierno a importar gasolina. Disipada la huelga, despidió a 17.000 trabajadores, cerca de la mitad de la plantilla de PDVSA. (Hernández L. H., 2011).

En febrero de 2004, devaluó el bolívar en un 20% para incrementar los ingresos petroleros y disponer de más dinero para sufragar los programas sociales y las Misiones Bolivarianas; ésta medida, y la escalada del precio internacional del crudo iniciada en julio de ese año, auguran una rápida recuperación económica.

En consecuencia con su proyecto declarado socialismo del siglo XXI, anuncia que las fábricas privadas que estén paradas por las razones que fueren y no se reactiven, serán adquiridas por el Estado y puestas a funcionar bajo la modalidad de Empresas de Producción Social (EPS), en propiedad compartida entre el Estado y organizaciones cooperativas de los trabajadores.

Por su parte la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que toca los medios de comunicación privados.

Finalizando la primera década del nuevo siglo, el estado de la gestión parte del reconocimiento del propio Chávez, de la insuficiencia de la producción nacional y la escasez crónica, un clima de poca inversión privada, y el desfase entre la capacidad productiva de la nación y el ritmo del aumento de la demanda; que se traducen en una inflación que alcanza el 22,5 por ciento en 2007, el 30,9 por ciento en 2008 y el 25 por ciento en 2009 (Steve, 2010.), considerada la más alta de la región. Para el 2010 el PIB bordea el 4.19%, las reservas los US$ 28.841 millones, la tasa de desocupación el 6.5%, y una balanza comercial positiva de US$11.878. (CESLA. Centro de estadísticas de estudios latinoamericanos., pág. 2011). Respecto a la deuda, en el 2007 la
canceló con el FMI y el Banco Mundial; en el 2010 el monto total suma los US$ 58.000 millones. (Ver cuadro N° 6). Las cuentas nacionales reportan que desde 1999 la economía venezolana se ha sextuplicado, al pasar de US$ 85 mil millones a US$ 367.000 millones. Las reservas internacionales del país cerraron el año en US$29.500. La deuda, de un poco más de US$ 68.500 millones, representa el 20% del PIB, de los cuales US$ 21.5 (30%) corresponden a PDVSA.

En lo que respecta a la gestión de la política petrolera, Venezuela cuenta con unas reservas convencionales de 348 mil millones de barriles, 73.000 millones de barriles de crudo liviano y en la faja del Orinoco con 275.000 millones más de crudos pesados. Cifras que ubican a Venezuela como el país más rico en petróleo en el mundo, y el cuarto entre los países poseedores de crudos livianos, lo que significa tener reservas para unos 60 años en el primer caso, y para 350 años, si se consideran los crudos del Orinoco; con unos costos de producción que están entre los más bajos del mundo. Al reconocer Chávez la bendición y maldición que representa esa riqueza para Venezuela, que afectan al desarrollo de los sectores industrial, agrícola, minero y de servicios, subraya la necesidad de un nuevo un modelo que aleje a la economía de su dependencia del petróleo, como la única fuente generadora de riqueza, para lo que apela al lema acuñado por Juan Pablo Pérez Alfonzo de “sembrar el petróleo”.

Desde la campaña electoral, Chávez había prometido emprender una drástica reforma de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que aportaba el 80% de las exportaciones, el 40% de los ingresos del presupuesto nacional y el 27% del PIB, con el objeto de erradicar la mala gestión y las prácticas corruptas. Amparado en la Ley Habilitante del 2000, propone la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos con el fin de aumentar la tributación de las corporaciones extranjeras hasta el 30% y reservar al Estado una participación mayoritaria del 51% en las sociedades mixtas, formadas con las empresas concesionarias privadas. Posteriormente, modifica los contratos con las empresas privadas que participan del negocio petrolero de los crudos pesados en el país, y congela los precios internos de los combustibles, US$ 0,167 el galón de gasolina (359 bolívares). Con los recursos del negocio se propone el pago de la deuda para así cortar con la dependencia de los centros financieros internacionales e impulsar un sistema financiero para la región. En el 2005 da un paso adelante en su política petrolera con el Plan Siembra Petrolera, con ella se persiguen seis objetivos a lograr entre el 2005 y el 2030: 1. Magna Reserva, 2. Proyecto Orinoco, 2. Proyecto Delta Caribe, 4. Proyecto de Refinación, 5. Proyecto de Infraestructura y 6. Integración energética regional. En el 2007 implementa el plan, denominado de Plena Soberanía Petrolera, y decreta, por Ley N° 5.200, el fin de la Apertura Petrolera que pone fin al dominio de las empresas extranjeras a través de las llamadas Empresas Mixtas, que se habían formulado en 1992. Su objetivo es reafirmar la mayoría accionaria en todas las esas empresas y hacerse a su control. Por efecto de esa política, salen de
esas empresas: la ChevronTexaco, Statoil, Total, BP, ENI y Sinopec e Ineparia. “A finales del 2005, todas las empresas aceptaron renegociar sus contratos respectivos a excepción de la empresa estadounidense Exxon Mobil, que prefirió vender sus activos en Venezuela a Repsol-YPF, y de las empresas ENI y Total Final Alf, cuyas operaciones fueron asumidas por el estado en el transcurso de 2006” (Fleisher, 2007 citado por (Fontaine, 2010). En 2010, Chávez vende las acciones de PDVSA en Rühr Oel a la empresa rusa Rosneft, que incluye porciones en las refinerías alemanas en Gelsenkirchen, Neustadt, Karlsruhe y Schwedt; así como la planta petroquímica DHC Solvent Chemie GmbH, también en Alemania. Y anuncia su interés en vender Citgo, filial estadounidense de PDVSA.

A nivel internacional se propone el fortalecimiento de la OPEP, venida a menos en los gobiernos anteriores que, por la vía de la privatización a partir de los 90, buscan un acercamiento a los Estados Unidos, y un distanciamiento de la OPEP. Chávez da confianza a la Organización, en cumplimiento de los pactos de cuotas que se habían relajado, y propone la política de banda o techo de precios de US$ 20 para el techo bajo, y de US$ 28 para el techo alto, para defender los precios del crudo a favor de los países dueños del recurso. (Hernández, 2011).

Chávez, que desde el inicio de su gobierno le da peso a la situación internacional, activa un marco de integración continental radicalmente político: La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). El 14 de diciembre de 2004 en La Habana, con base en el recurso petrolero propone el impulso de organizaciones como: Petrosur, Petrocaribe, Petroandina; unas iniciativas subregionales de integración energética que conformen a Petroamérica. También la conformación de entes como Tele SÚR, el Banco del Sur y el Gran Gasoducto del Sur, entre otros. (Hernández L. H., 2005). Con esas iniciativas pretende articular la bolivarianización del hemisferio, que entiende como la emancipación de las naciones del Sur de los mecanismos económicos y financieros controlados por los países del centro, y la actualización del viejo sueño unificador del subcontinente concebido por Francisco de Miranda y Simón Bolívar. En esa postura integracionista Chávez encuentra en el mandatario argentino Néstor Kirchner, defensor de la autonomía y fortaleza del MERCOSUR, un aliado con quien firma una carta de
intención para crear la compañía sudamericana de energía Petrosur, con la participación de PDVSA y su equivalente argentino recién creado: Enarsa. (Obando, 2008). En el 2005 con Lula del Brasil, Chávez suscribe diversos acuerdos de cooperación económica, entre los que destacaba un protocolo entre PDVSA y Petrobras para la construcción en Pernambuco de una refinería de petróleo venezolano, con una inversión de US$2.000 millones. El denominado foro Petrosur se formaliza con la firma por los tres ministros de minería y energía de Argentina, Brasil y Venezuela, con el objetivo de desarrollar proyectos petroleros compartidos por PDVSA, Petrobras y Enarsa. En el 2005 Chávez firma con Tabaré Vázquez presidente del Uruguay, un acuerdo sobre intercambio de petróleo venezolano por alimentos uruguayos.

Con los Estados Unidos, firma a través de la compañía texana Citgo, filial de PDVSA, y las autoridades locales del Partido Demócrata, un programa de distribución de combustible venezolano barato para calefacción en comunidades de bajos ingresos de Massachusetts y Nueva York. En el 2005 suspende el programa de intercambio de instrucción militar y cese de toda colaboración con la DEA, la agencia antidroga estadounidense, y retira de los Estados Unidos dos terceras partes de sus reservas internacionales depositadas en el extranjero, US$20.000 millones, para colocarlas en una cuenta en Suiza nominada en euros. Ante la suspensión de la venta de armas que le hacen los EE.UU., Chávez amenaza con cortar el suministro de crudo, reduciendo el volumen de las exportaciones; a medida que PDVSA diversifica su clientela petrolera (CIDOB. centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona., 2006), sin embargo en el 2007 el 60% de las ventas de petróleo se siguen realizando con los Estados Unidos.

En la actualidad Venezuela, además de satisfacer su demanda interna de derivados, es el cuarto proveedor del principal consumidor de energía del mundo los Estados Unidos. También es proveedora de los países centroamericanos y del Caribe, incluyendo a Cuba, deficientes del recurso. En el 2010 las exportaciones petroleras de Venezuela caen en 6,3%, a 2,32 millones de barriles por día, un descenso que se presenta desde el 2009 debido a la aplicación de recortes instruidos por la OPEP.
Los resultados cuantitativos de esas políticas petroleras mexicana y venezolana, anteriormente descritas, las podemos apreciar en las siguientes gráficas:

**Gráfica Nº 7.** México – Venezuela. Reservas: 1970-2010

En la gráfica se puede apreciar la irregularidad que han seguido las curvas de reservas de los dos países, con tendencias totalmente opuestas al final del periodo. Venezuela presenta una dinámica ascendente, mientras México muestra un comportamiento tipo campana de Gauss, que alcanza su cúspide en 1990, para descender de manera vertiginosa en el 2010. México, parte en 1970 con más de 3.000 millones de barriles, logra su tope máximo en 1990, con 56.000 millones (casi a la par con Venezuela que marca uno 58.000 millones), y las reduce a 14 mil millones en el 2010; es decir, que México, en 20 años, agota cerca del 77% de las reservas que tenía en 1990. Venezuela por su parte, inicia con unas reservas modestas de un poco más de 1.300 millones de barriles en 1970, hasta alcanzar los casi 98.000 barriles en el 2010, que representa un aumento del 74.000%. Es innegable
que en ese comportamiento pesa la fortuna geológica de cada uno de los países, pero resulta inquietante si se observa a partir de los años noventa, cuando los dos países marcan reservas similares y bifurcan sus comportamientos de manera diferenciada. Es indudable que esa tendencia está relacionada con las políticas disímiles que empiezan a implementar sus respectivas administraciones gubernamentales.

**Gráfica N° 8.** México - Venezuela. Exportaciones de petróleo: 1970-2010

Las dinámicas de estas curvas muestran dos tipos de comportamientos. Venezuela una dinámica moderada promedio de 2.2 millones barriles diarios en el periodo, sin sobrepasar los 3 millones de barriles, ni disminuir más allá de los 1.4. México, que inicia sus exportaciones en 1975, muestra a partir de entonces un promedio
exportador de 1.215 millones. Su comportamiento se corresponde y se explica, con el comportamiento de las curvas de reservas anteriormente descritas. También nos permite considerar a las políticas petroleras implementadas en México como agresivamente exportadoras, y a las de Venezuela de talante moderado.


![Gráfica N° 9](image_url)

Respecto a la deuda, guardando las proporciones y en términos generales, las dos curvas se presentan medianamente similares en su dinámica. Curvas de crecimiento hasta 1995 – 2000, cuando México alcanza un poco más de US$ 100 mil millones y Venezuela los cerca de US$ 37 mil millones, respectivamente; con descenso en el 2005, para
retomar su ascenso en el 2010, con un fuerte incremento por parte de México. Las deudas se corresponden con las de los demás países de la región y el mundo, que empiezan a incrementar sus débitos a partir de los años setenta, con el fin de satisfacer sus demandas energéticas; pero que en el caso de países productores como México y Venezuela, se usan para desarrollar la industria productora por parte de sus estatales: Pemex y PDVSA. México, desde el gobierno de la Madrid, le apuesta a la participación del capital transnacional y el incremento de sus exportaciones a los Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de NAFTA. Venezuela con Hugo Chávez, radicaliza su nacionalización y salda sus deudas con organismos como el FMI. Para el 2010 la deuda de México representa el 37% del PIB, y la de Venezuela el 20%.

2.5 CONCLUSIÓN

Los casos de las políticas petroleras de México y Venezuela antes descritas, ilustran las características e implicancias de la gestión de los gobiernos de los dos países que cuentan con las mayores reservas petroleras del hemisferio. Es el desarrollo del ciclo de dos procesos de nacionalización del recurso, de orígenes y destinos distintos.

El caso mexicano, que inicia su nacionalización en 1938 con un proceso hecho desde abajo, es decir, con la participación de la población que aporta para el pago de la indemnización a la multinacionales; pero que a partir de Miguel de la Madrid (1982-1988), en el marco de la caída de los precios de los años ochenta, inicia lo que algún autor denomina la “privatización hormiga”. Un proceso de privatización que profundiza Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, proclives al TLCAN acordado con los EE.UU y Canadá. Igualmente, una nacionalización que se enmarca inicialmente, en el despliegue de un modelo desarrollista interno de país, en el que el petróleo era la columna vertebral, con un uso autosuficiente del recurso y sin mayores compromisos con el mercado externo, como lo ilustra su no participación en la OPEC; que le permite incluso aprovecharse de la dinámica de los precios.

Por su parte en Venezuela, la nacionalización se da en el marco de la crisis de los años setenta por efecto de las reversiones de las Concesiones firmadas cuarenta años atrás con las multinacionales,
y con la cuales los gobiernos venezolanos mantienen una tensión alrededor del reparto de la renta. Venezuela forma parte, desde los años sesenta, de la OPEC. La nacionalización que realiza el primer gobierno de Carlos Andrés (1975-1979), pretende revertirla quince años después, en su segundo mandato (1989-1993); cuando se acoge a las políticas del FMI, a raíz del endeudamiento respaldado en el petróleo, y en el que había embarcado al país desde su primera administración. A fines del siglo XX, ese proceso de Nacionalizaciones es retomada a profundidad por Hugo Chávez, quien cancela la deuda con el FMI y el Banco mundial, y se enfrenta a los retos propios de un recurso del cual dependen las potencias tradicionales de occidente: EE.UU., Europa y Japón y las nuevas emergentes: China, India y Brasil. Acción ligada a una mayor presencia del gobierno en el escenario internacional y diplomático.
III

Brasil y Argentina

3.1 ANTECEDENTES

Brasil y Argentina son el ejemplo en el hemisferio del desarrollo de una política petrolera a partir de sus propias capacidades, llevada a cabo por iniciativa de militares nacionalistas. Estos países en los inicios de esta industria, no fueron objeto de interés por parte de las multinacionales.

Brasil que ocupa la mitad del territorio de Sudamérica, paradójicamente es deficiente en el aprovisionamiento de recursos hidrocarburíferos. Sus intentos de búsqueda en 1864, son abandonados en 1918. En 1934, bajo el gobierno de Getulio Vargas, se inicia un proceso de intervencionismo de Estado que se prolonga hasta los años ochenta. Vargas expide una ley en que las Concesiones solo se otorgan a brasileños o empresas brasileñas. En 1938 establece el Consejo Nacional Petrolero y considera que el petróleo es de utilidad pública, esa política nacionalista en el tratamiento del recurso va a mantener a las multinacionales fuera del país. En 1952 los militares crean la empresa Petróleo Brasileiro (PETROBRAS). Para ese entonces el sector privado: Standard Oil Company of New Jersey, Atlantic y Gulf Texaco hacen presencia en el área de refinación y comercialización, abasteciendo el mercado interno con productos venezolanos. Desde entonces la política petrolera brasileña va a girar, no alrededor del recurso, sino de su emblemática empresa PETROBRAS.

Argentina en el siglo XIX es un país rico en Carbón y recursos hidroeléctricos, prestandole poca atención al petróleo. En 1907 hacen su primer descubrimiento en Comodoro Rivadavia, el cual cobra
importancia con la creación, en 1923, de la corporación Yacimientos petrolíferos fiscales argentinos (YPF), por el general Enrique Mosconi. YPF es una empresa que domina el mercado interno. Mosconi, impone precios uniformes en todo el país, y crea el Instituto del petróleo en la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de formar técnicos en el área. En 1929 declara: “nuestro país es el único que se ha librado de la ley de hierro de los consorcios imperialistas”, compara a la Standard con una soga de yute y a la Royal con una seda, decía que las dos servían para ahorrarlos. (Hernández. 2008).

Para el periodo definido en este estudio, el comportamiento quinquenal de sus estadísticas lo vemos ilustrado en el cuadro No. 7.

3.2 BRASIL: 1970-2000

En la coyuntura petrolera de los sesenta gobierna en Brasil el General Emilio Garrastazu Médici (1964-1974), instaurado en la presidencia por un golpe militar que asiste en 1964. Una dictadura que dura 21 años, desde 1964 a 1985. Garrastazu mantiene instituciones democráticas como el parlamento y el sufragio universal, pero impide a los detractores el ejercicio de derechos políticos. Mediante los llamados Actos Institucionales permite la actividad política de los grupos afines al régimen.


Desde el gobierno de Garrastazu Medici, Petrobras, que se había creado para refinar el petróleo importado, se convierte en una empresa rentable capaz de financiar su propia expansión. La empresa recibe entre 1970-1975 ingresos netos cercanos a los US$5.000 millones, producto de su capacidad refinadora, que se convierte en su columna financiera. En cuanto a su producción, ésta pasa de 365.000 b/d en 1965 a 986.000 b/d en 1975, un crecimiento de 2.7 veces; que logra gracias al monopolio que tiene desde 1963 en la importación de petróleo, que le da ventaja cambiando de fuente de abasto, y por la disminución de los costos de los tanqueros. Esta última situación la
<table>
<thead>
<tr>
<th>AÑO</th>
<th>ARGENTINA</th>
<th>PETRÓLEO MB</th>
<th>GAS MMM3</th>
<th>KBD</th>
<th>ARGENTINA</th>
<th>PETRÓLEO MB</th>
<th>GAS MMM3</th>
<th>KBD</th>
<th>BIENES</th>
<th>ARGENTINA</th>
<th>PETRÓLEO MB</th>
<th>GAS MMM3</th>
<th>KBD</th>
<th>BIENES</th>
<th>ARGENTINA</th>
<th>PETRÓLEO MB</th>
<th>GAS MMM3</th>
<th>KBD</th>
<th>BIENES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1970</td>
<td>2000</td>
<td>2.000</td>
<td>n.d</td>
<td></td>
<td></td>
<td>393.5</td>
<td>7.664</td>
<td>10.609</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.187</td>
<td>1.878</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>1980</td>
<td>2.000</td>
<td>201</td>
<td>461</td>
<td>493.0</td>
<td>460.4</td>
<td>10.275</td>
<td>13.466</td>
<td>15.563</td>
<td>227</td>
<td>113</td>
<td>1.726</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.000</td>
<td>1.207</td>
<td>2.095</td>
<td>3.446</td>
</tr>
<tr>
<td>1985</td>
<td>1990</td>
<td>3.500</td>
<td>673</td>
<td>650</td>
<td>497.1</td>
<td>722.2</td>
<td>773.9</td>
<td>19.113</td>
<td>15.936</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>2.221</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.000</td>
<td>n.n.</td>
<td>25.9</td>
<td>52.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>2000</td>
<td>3.500</td>
<td>620</td>
<td>780</td>
<td>350</td>
<td>666.7</td>
<td>30.505</td>
<td>45.135</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>2.210</td>
<td>2.171</td>
<td>504</td>
<td>504</td>
<td>2.171</td>
<td>1.000</td>
<td>n.d</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>2010</td>
<td>3.500</td>
<td>350</td>
<td>500</td>
<td>350</td>
<td>666.7</td>
<td>30.505</td>
<td>45.135</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>2.210</td>
<td>2.171</td>
<td>504</td>
<td>504</td>
<td>2.171</td>
<td>1.000</td>
<td>n.d</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

aprovecha para construir su propia flota. Geisel amplía la participación de la empresa en el sector de la distribución y crea en 1971 una subsidiaria distribuidora con ese nombre, para su efecto aduce razones de seguridad, pues considera que las empresas privadas que monopolizan el sector no eran confiables en el suministro en las áreas de bajo rendimiento, donde eran altas las necesidades sociales. En este rubro la participación de la empresa pasa de 10.4% en 1965 a 27.5% en 1973.

El punto débil de la política reside en el área de exploración, que el Estado monopolizaba, impidiendo que lo hicieran las empresas extranjeras; en un momento crucial como 1970, cuando dependen de las importaciones del medio Oriente. Geisel crea una subsidiaria: BRASPETRO, para explorar en el exterior, cuyo producto se dedica al mercado interno. Eso presiona a la empresa a expandirse en el exterior de una manera integrada, en la comercialización, la petroquímica y la producción. Esa política, junto al permiso para que las extranjeras exploraren dentro del país, convierte a Petrobras en algo más que un simple monopolio petrolero estatal; que, al abandonar la autosuficiencia como su objetivo, convierte la rentabilidad en el nuevo criterio de inversión. (Philip, 1982). A fines de los setenta los campos de Bahía están en plena producción y se han explorado casi todas las cuencas sedimentarias de las playas, aunque Brasil dista de ser autosuficiente. Entonces se pone la mira en la plataforma continental, que era explorada desde 1967. Hasta ese momento los bajos precios a nivel mundial no incentivaban la inversión, que Geisel consideraba que no era razón para no aprender a buscar petróleo en aguas profundas, partiendo de un yacimiento como Guaricena que se encontraba a 20 metros.

La situación descrita de Petrobras se da en el marco del denominado "milagro brasílero", que se financia aprovechando la facilidad para obtener préstamos a nivel internacional en los primeros años de la década de los setenta. El milagro se traduce en un sostenido crecimiento de la economía y un aumento del PIB hasta niveles no conocidos hasta entonces. Una situación que no sobrevive a la crisis de 1973, y deja una creciente deuda externa, un gasto público excesivo, y un aparato estatal sobrecargado.
El gobierno del General Ernesto Geisel (1974-1979) que hereda la crisis, inicia su mandato con el ánimo de evitar el alineamiento incondicional con los EEUU y obtener nuevas alternativas de cooperación económica. En 1976 inicia un intento de democratización y apertura política civil. Su política denominada Pragmatismo Ecuménico y Responsable (PER), es un instrumento clave en la acción externa de Brasil, en un contexto internacional de crisis energética y ascendente multipolaridad económica.

Este diseño centraba sus preocupaciones en el desarrollo del país a través de una estrategia productiva de sustitución de importaciones. A través de una política exterior cada vez más flexible y más pragmática se pretendía renegociar la dependencia brasileña y llevar al país a ser una economía industrializada con proyección internacional (Lechini, 2010).

En lo que respecta a la política petrolera, Petrobras mantiene su política de desarrollo. En 1978 descubre petróleo por primera vez en el Amazonas, y cierra la década con la construcción de otras 4 refinerías, la mayoría en la región sudeste del país, y los complejos petroquímicos de São Paulo y de Camaçari, en Bahía. Geisel, destina un significativo presupuesto para iniciar el desarrollo tecnológico en aguas profundas.

Las dos crisis mundiales del petróleo, de 1973 y 1979, hizo que los gobiernos creen el programa PROALCOOL, para la utilización de alcohol carburante como combustible. También abren a Petrobras, sin romper el monopolio, para que celebre contratos de riesgo para exploración. En total firma 243 contratos, 156 con empresas internacionales y 87 con empresas nacionales. Al final de la década existía una producción de 165 mil bpd, de los cuales 35% en el mar y 65% en tierra, y 5 millones de m3/día de gas, de los cuales 61% en tierra” (ALIP). Petrobras invierte entre 1954 y 1997, unos US$ 94.000 millones en sus actividades, de los cuales US$ 57.000 millones, en exploración y producción. De esa manera Petrobras alcanza cierto nivel de madurez, siendo reemplazados funcionarios militares por técnicos civiles formados dentro de la empresa. La empresa está organizada en departamentos dotados de fuertes lealtades internas. “La compañía estaba adquiriendo ciertas características típicas de las grandes organizaciones; tendía a ser secreta, a huir del riesgo e inclinarse hacia el extremo conservador” (Philip, 1982: 398).
Geisel logra que sea elegido como sucesor otro militar continuador de sus ideas: Joao Figueredo (1979-1985), con quien finaliza el régimen dictatorial. En 1979 Figueredo decreta una ley de amnistía firmada para los condenados por crímenes “políticos o relacionados”, en 1980 disuelve al partido controlado por el gobierno: ARENA y permite la expresión de nuevos partidos. En 1981 el Congreso emite una ley que restaura las elecciones directas de los gobernadores estatales. Las elecciones generales de 1982 le dan el triunfo al pro-gobiernista Partido Demócrata Social (PDS). Estos desarrollos políticos ocultan los problemas económicos que tienen su evidencia en los altos crecimientos de la inflación y el desempleo, y una deuda que alcanza un monto cercano a los US$90.000 millones, que hace de Brasil uno de los mayores deudores del mundo. Figueredo impone entonces un programa de austeridad que al finalizar su gobierno no muestra señales de recuperación de la economía.

En 1985 la oposición encabezada por Tancredo Neves gana las elecciones. Con él, Brasil se abre a la democracia, pero su muerte intempestiva lleva a la presidencia al vicepresidente José Sarney (1985-1989). Sarney encuentra un país de 136 millones de habitantes, que tiene una tasa de crecimiento del PIB del 4.5% y una balanza comercial supervaritaria. Esas cifras están acompañadas por una deuda pública externa de US$105.000 millones de dólares –el segundo mayor montante del mundo– un déficit federal del orden de US$13.000 millones, una inflación con una tasa promedio mensual del 10% mensual o 250% anual, y una desvalorización constante del cruzeiro. El presidente impone un programa de austeridad a través del Plan Cruzado que incluye mejoras sociales, una nueva unidad monetaria: el cruzado; la congelación de los salarios, reajustables de manera automática siempre que la inflación no sobrepase el 20% mensual, (banda de indexación conocida como el gatillo salarial), que “levanta a la izquierda obrera, en especial al del cinturón industrial paulista, capitaneada por el petista Lula da Silva” (CIDOB. 2011).

Pese a los esfuerzos, la situación obliga a Sarney a proponer el Plan el Cruzado II, que igualmente fracasa. En 1987 Brasil se encuentra ante una virtual quiebra de las arcas del Estado, entonces el gobierno anuncia la suspensión de los pagos de la deuda externa, que ascendía
a los US$108.000 millones de dólares. Invoca la “unidad y patriotismo” de los ciudadanos, e interviene una serie de bancos públicos acuciados por la liquidez. En 1988, es inacabable la debacle financiera. En el campo se cometen desmanes contra los campesinos por parte de los ricos hacendados rurales y de las fuerzas de seguridad pública para reprimir los movimientos sociales. Acciones juntas que eclipsan los alcances parciales del proceso democratizador, acompañado por la promulgación de la Carta Magna en 1988, que reemplaza el texto impuesto por los militares en 1967.

Petrobras realiza grandes avances en la exploración marítima con los descubrimientos en 1984-1985, de los campos gigantes de Albacora y Marlim, hallados en aguas profundas de la cuenca de Campos. Un producto de la política agresiva de exploración off-shore y del esfuerzo por desarrollar tecnología propia, que se manifiesta en grandes avances. En 1985, Brasil iguala las reservas probadas de petróleo de Argentina (cuando en 1980 eran apenas de un 50%); sin embargo debe importar cerca del 60% del petróleo consumido. En 1986, la estatal inicia un programa de innovación que le permite perforaciones a profundidades de hasta 3.000 metros. En 1988, un pozo del campo de Marlima establece el récord de 492 metros de profundidad bajo el océano. En diciembre de 1989, produce 675 mil bpd y 16,3 millones de m3/día de gas, de los cuales el 65% se extraen del mar y el 35% del continente, que inverte la relación tierra-mar, que dominaba hasta entonces la producción. Para minimizar la dependencia brasileña del petróleo, se implementa una política estatal activa con el fin de realizar diversas fuentes como la energía hidroeléctrica y la utilización de agro combustibles como el alcoafta, proveniente de la caña de azúcar. Con su política de adelantar exploraciones en el exterior, Petrobras obtiene Concesiones y realiza inversiones en países como Argelia, Colombia, Egipto, Irán o Irak. En la década del 80, sus inversiones externas privilegian regiones como el Golfo de México norteamericano y el Mar del Norte; mientras sigue invirtiendo en exploración y explotación del suelo brasileño (Mansilla, 2008).

Sarney se va de la Presidencia con más pena que gloria. Su partido la Alianza Democrática llega fracturada a las elecciones de 1989, cuando es elegido Fernando Collor de Mello (1989-1992), del Partido
de Reconstrucción Nacional (PRN), de tendencia conservadora. Su drástico programa anti-inflacionista empeora la recesión de Brasil, y las acusaciones de corrupción llevan a su dimisión en 1992. Lo reemplaza Itamar Franco (1992-1994), un presidente en funciones. Su gobierno transcurre bajo una complicada grave crisis económica, con una inflación que en 1993 alcanza 6.000%. En ese marco se propone un plan para reestructurar y reducir la deuda externa; implementa el Plan Real diseñado por su ministro Enrique Cardoso, cuyo éxito le brinda en 1994 la oportunidad de derrotar a su opositor Lula da Silva, en una campaña donde ambos candidatos proponen la promoción de una mayor justicia social y el desarrollo de profundas políticas económicas y sociales.

En lo que respecta a Petrobras, pese que para entonces cuenta con grandes descubrimientos de reservas que duplican las de 1985, Brasil sigue importando el 66% del petróleo, como ha sido su historia.


Fuente: (PLAN ALTO.)
Desde entonces se realiza en Brasil un cambio a fondo en la política energética pública, con el objetivo bajar la dependencia de la matriz petrolera. En ese sentido se continúa con el desarrollo de los agrocombustibles, y se incentiva el uso del gas natural en la generación termoeléctrica. En cuanto al gas, que representa una porción muy pequeña del consumo energético, por la insuficiencia de las reservas para garantizar el desarrollo de su demanda, se incentiva el inicio de una década de desarrollos tecnológicos, para abastecer la creciente demanda para la generación de termoelectricidad en plantas creadas por la propia Petrobras, y el consumo industrial y domiciliario de los grandes centro urbanos del sur del país. Petrobras firma a través de su subsidiaria Gaspetro

...un acuerdo con la estatal boliviana Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de un gasoducto que uniera los dos países. El gasoducto que conecta Santa Cruz (Bolivia) y San Pablo (Brasil) fue comenzado en 1996 y terminado en 1999. En el lado boliviano, el gasoducto pertenece a Ashmore (originariamente Enron), Shell y Gaspetro (Petrobras) mientras que en el lado brasileño Petrobras tiene el 51% y el resto repartido entre Ashmore (ex Enron), Shell, British Gas y otras. (Mansilla 2008).

El sucesor de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) gobierna a Brasil por dos periodos consecutivos. Desde su primer mandato pone en marcha una serie de cambios socioeconómicos de acuerdo a la globalización financiera, al amparo de la reforma de la Constitución en 1995, que le permite la reelección presidencial. Su gobierno se enmarca en las políticas neoliberales en boga en la región desde la década de los 90, para dar continuidad al proceso que había empezado la anterior administración, cuando ejercía como ministro. Las reformas producen una serie de movilizaciones sociales variadas a lo largo de 1997, a raíz de las privatizaciones, el desempleo que alcanzaba el 15%, los escándalos políticos y la corrupción en varios niveles. Además de la lenta en la implementación de la reforma agraria, área en la cual tiene la presión el MST (Movimiento de los Sin Tierra), cuyas invasiones son objeto de preocupación del gobierno federal.

Las reformas de corte neoliberal que concitan la desregulación y las privatizaciones, golpean al sector energético. Cardozo se respalda en
la “Enmienda Constitucional Nº 9”, que permite el ingreso de capitales privados a las actividades de hidrocarburos mediante Contratos de Servicios, aunque el Estado mantiene el monopolio federal. La Ley 9.478 de 1997 otorga a los concesionarios la libre disponibilidad de los hidrocarburos, que incluye su exportación. Crea la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), para que regule la industria petrolera y le quita a Petrobras la concesión de la mayor parte de las áreas. La nueva agencia queda encargada de realizar Rondas Anuales de licitación de áreas para la exploración en la que Petrobras se presenta en igualdad de condiciones con el resto de las petroleras. La ANP otorga a Petrobras concesiones sobre las áreas con reservas probadas, que por su conocimiento en la perforación en aguas profundas, le permite ganar la mayor parte de las áreas más importantes. Petrobras realiza igualmente una apertura del capital al sector privado, al transformarse en una sociedad de economía mixta y cotizar en las bolsas de San Pablo, Buenos Aires y Nueva York.

El estado federal mantiene el control accionario (según dictamina su estatuto) a pesar de contar con apenas el 32% del capital social y el BNDES el 8% (al 31/12/06). Esto es así ya que el estado cuenta con el 56% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Por esta razón, a pesar de contar con el control empresario, el estado brasileño no recibe la mayor parte de sus cuantiosas ganancias. La participación privada en las decisiones es importante (aunque no mayoritaria) ya que el estatuto les garantiza un director de cinco (Mansilla.2008).

En el segundo mandato, Cardozo aplica un nuevo modelo organizacional de gestión descentralizada que opera con cuatro aéreas de negocios definidas, que le significa a Petrobras la oportunidad para realizar inversiones en áreas estratégicas, mediante un proceso permanente de evaluación de resultados. También, implementa una gestión de planeación estratégica a mediano y largo plazo, (de 15 años), y un plan de negocios de corto y mediano plazo, (5 a 7 años), con énfasis en los proyectos de exploración y producción a nivel nacional e internacional. La planeación abarca toda la cadena de suministros con el objetivo ampliar la capacidad productiva de sectores altamente competitivos. "A fin de apoyar lo anterior, se destina un presupuesto para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas como parte de los compromisos para el desarrollo de la cadena de empresas productoras
de bienes y servicios. Evitar convertirse en un estado rentista es también parte de la planeación estratégica que se diseña” (Vargas, 2012).

En consecuencia con esa política, aprovecha las privatizaciones y desregulaciones de sus vecinos, adapta su estrategia de transnacionalización aumentando su inversión internacional, que concentra en la región. Suma nuevas áreas en refinación, petroquímica, comercialización de combustibles, generación eléctrica o distribución y transporte de gas natural. Adquiriere empresas en diferentes sectores de la cadena energética, comprando activos en distribución de gas natural en Uruguay y Bolivia, y petroquímica en Argentina. En este país en el año 2000, Petrobras mediante un intercambio de activos con Repsol, adquiere la red de estaciones de servicio EG3 y una refinería en Bahía Blanca a cambio del 10% del yacimiento brasileño de Albacorta Leste, el 30% de una refinería y 250 estaciones de servicio en Brasil. De esta manera Petrobras obtiene el 12% del mercado argentino de naftas. Como resultado, Petrobras se convierte, iniciando el siglo XXI, en la octava transnacional del mundo, la tercera de América Latina y la primera de Brasil, con operaciones en los 5 continentes. En el año 2002, es considerada la principal empresa transnacional integrada en la región.

La política de Cardozo le permite inicialmente controlar la inflación que llega a 28%, la tasa más baja desde 1957. Obtener un crecimiento de las reservas y las inversiones extranjeras (representando el 70% de todas las realizadas en Sudamérica) a través de altos tipos de interés, que impone para frenar la demanda consumista, y que desequilibraba la balanza comercial. Sin embargo no deja de aumentar la deuda interna y los déficits en las cuentas públicas, a lo que se añade una reforma laboral que otorga carta legal a los despidos masivos, en consecuencia con las privatizaciones de doce grandes compañías públicas, entre ellas el gigante de las telecomunicaciones, Telebrás, que tiene el monopolio de la telefonía.

En el frente internacional Cardozo impulsa el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fundado en 1991, y pone en marcha una Unión Aduanera con arancel externo común. En 1997 salen a flote sus diferencias con Bill Clinton en materia de comercio continental, al
defender la profundización y la ampliación del MERCOSUR antes de poner en servicio el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que Washington deseaba que arrancara en 2005. Una postura acogida por el presidente venezolano Hugo Chávez, y que convierte a Brasil en el abanderado de una suerte de nuevo nacionalismo integracionista en la región.

Cardozo, al igual que sus homólogos de entonces: Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina, resulta reelegido para el periodo 1998-2003 con el apoyo del Partido Social Demócrata (PSD) y el derechista Partido Progresista Brasileño (PPB). Se impone nuevamente sobre Lula, candidato unitario de la izquierda, y al que descalifica como un hombre sin preparación e inapropiado para las complicadas tareas de gobierno.

Su segundo mandato está antecedido por las turbulencias financieras y bursátiles que desde 1998 padece el país, gatilladas por las crisis rusa y asiática. Eso da como resultado una fuga de capitales, superior los ingresos obtenidos por las privatizaciones y defendidas por Cardozo, con el argumento que brindaban recursos para la financiación del servicio de la deuda externa; una deuda que suma US$240.000 millones. Cardozo inicia su segundo mandato promulgando un programa de ajuste fiscal “dramático, definitivo y permanente”, que contempla: el aumento de los tipos de interés, más austeridad en el gasto público, nuevos recortes en las plantillas de funcionarios y el incremento de las cotizaciones de la seguridad social; con el fin de rebajar el déficit fiscal del 8,4% registrado en 1998 al 3% en 2000, entre otras medidas. Esas decisiones daban satisfacción a las condiciones del FMI.

Finalizando la década, Brasil muestra un crecimiento cero de la economía y mantiene una tendencia entre recesiva y anémica, con una tasa positiva de sólo el 0,5%. Además, es víctima de una crisis financiera o “efecto samba” (1998-1999), originada en la sangría de las reservas internacionales a un ritmo insostenible, que le representa la pérdida, en una sola semana, de más de US$4 mil millones. Para contrarrrestarla, el Banco Central brasileño abandona la defensa del real, e inaugura el sistema de libre fluctuación de la moneda. La crisis afecta fuertemente a sus socios en la región. En el 2002, con una inflación que se acerca
al 2% mensual y la economía decelerada, Cardozo llega a un acuerdo con el FMI para obtener una línea de crédito de US$30.400 millones a 15 meses; y la autorización de gastar US$10.100 millones de dólares adicionales de las reservas internacionales, para defender al real de los ataques especulativos. Con esas medidas, se cierra el ciclo de las políticas regulacionistas de periodo Cardozo.

Al final de su mandato se registra un profundo malestar y una inquietud por el futuro inmediato del panorama económico y social, que golpea con la miseria, el desempleo, la violencia e injusticia social, el quehacer cotidiano de numerosos ciudadanos. La situación es atizada por la crisis que emerge en el sector energético, donde millones de usuarios padecen un severo racionamiento eléctrico, provocado por el bajo nivel de las reservas hidroeléctricas, a causa de la sequía, que desencadena una ola de apagones en hogares e industrias. Esa situación erosiona la credibilidad de Cardoso y abre las puertas al triunfo de Lula.


En el periodo referido, Argentina es gobernada por 20 mandatarios, de ellos tres dictadores; que indica lo sobresaltada de la dinámica política de ese país en los últimos treinta años del siglo XX y primeros diez del siglo XXI.


Para ese preámbulo de mandatarios, y durante el periodo estudiado, la estatal Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF) continúa identificada de manera estrecha con sus gobiernos. La situación permite la aparición de empresas petroleras privadas en el país como Bridas Energy Holding
La Política Petrolera en América Latina: 1970 - 2010

(BEH) creada en 1948 y, posteriormente, en el 2001 Petróleos argentinos S.A.; que indica lo promisorio del negocio en el país. La ley 17.319 decretada por el General Juan Carlos Onganía en 1967,

...otorgaba a las empresas permisionarias y contratistas seguridades suficientes para operar en la Argentina. En apoyo de la nueva ley se alzaron las empresas petroleras medianas: Pan América, Cities services, Signal Gas, ENI, Philips Petroleum, Astra y Astrafor, las dos últimas de capital argentino...La ley conducía a perfeccionar la entrega de las totalidades de las ganancias que proporcionaba el mercado interno de combustibles (art.6) la destrucción de YPF, YCF y gas del estado" (Bernal, 2005, págs. 98-99). "De las 10 empresas operadoras mayores de hoy (2007), 3 son argentinas. De las casi 40 que hoy actúan en plaza, la mayoría es argentina (Calcagno, 2007, pág. 115).

La ley desintegra la empresa al desglosarla en empresas independientes, que la limitan para capitalizarse. De otra parte, las políticas peronistas que le anteceden, de redistribuir el ingreso sin crecimiento y el nacionalismo sin eficiencia (Ferrer, 1977); como de los conservadores, que consideran a la estatal como una molestia, que debe mantenerse pero sin otorgársele independencia, perjudican a YPF. (Philip. 1982). Los militares, por su parte, muestran escaso interés en las cuestiones petroleras, que dejan a definición de los civiles (Potash., 1980). YPF se maneja como otra rama más de la administración pública, sin estados contables ni análisis de costos reales; dirigida con mentalidad burocrática y liderada por personal poco idóneo cuya promoción se basada en la antigüedad. (Brunela, 1969). Además, carece de autonomía, de fondos, y obligada a mantener precios bajos; supeditada al pesado ritmo de la burocracia gubernamental. A fines de los años sesenta, cuando la producción se mantiene en un poco más de 15 mil metros cúbicos y disminuye su proceso exploratorio, será objeto de preocupación de los ministros en los años setenta. Daniel Brunella su director, presenta las mismas quejas que se habían hecho cincuenta años atrás, y propone descentralizarla, reducir el personal y mejorar su posición financiera. Pese a esa situación, para 1972, según su administrador el General Omar Carlos Actis, la empresa ha crecido en 50 años hasta convertirse en la primera empresa industrial del país, cubre el 90% de las necesidades nacionales y sus reservas
ascienden a un poco más de 392 millones de m3, y en gas a 141 millones de m3 (Bernal. 2005).

El gobierno de Roberto Levingston (1970-1971) que dura menos de un año, coloca a YPF en posición nacionalista. Cesa el otorgamiento de nuevas concesiones a las empresas extranjeras, le da a la empresa el derecho exclusivo para la importación, y de quedarse con las cantidades necesarias para cubrir sus propios requerimientos de comercialización. También la faculta para poner al tope la capacidad refinadora. Levingston llegó a considerar la posibilidad de su nacionalización total, que queda trunca con el golpe de Alejandro Lanusse.

Lanusse, al igual que sus sucesores Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, diciéndose nacionalistas, permiten el deterioro de la empresa. Sus estados contables se vuelven poco confiables pues no reflejan su situación financiera real. A partir de 1972 se inicia su declinación productiva, debida, entre otras, a las deficiencias técnicas. Igualmente fracasa su política de atraer capital extranjero. Lanusse abandona el intento de la nacionalización gradual y arrecia la política concesionaria. Una administración que, con el llamado Gran Acuerdo Nacional, habilita elecciones libres bajo un régimen electoral creado por la dictadura, que lleva al solio presidencial a Héctor Cámpora.

Durante los gobiernos de Héctor José Cámpora, Raúl Alberto Lastiri y Juan Domingo Perón, la estatal petrolera mantiene su anemia inercial, pues los dignatarios están preocupados por los apremiantes asuntos políticos que padecen. En ese sentido Cámpora firma un indulto masivo de presos políticos que sirve para el fortalecimiento del movimiento guerrillero. En 1973, firma el famoso “pacto social” que busca frenar la inflación y redistribuir el PIB, aumentar los salarios y congelar los precios. El pacto era clave para impulsar su plan trienal de desarrollo, fundado en los lineamientos económicos peronistas, con una política nacionalista, estatista y distribucionista. En 1973 al regresar Perón al país, tiene lugar la llamada Masacre de Ezeiza, producto del enfrentamiento entre ambas alas del peronismo, en ese mismo año Perón le retira el apoyo a su gobierno, Cámpora renuncia y es reemplazado por Raúl Alberto Lastiri quien convoca a elecciones en las que es elegido Perón. (Todo Argentina, (s.a)).
El gobierno de Perón debe afrontar la crisis petrolera del 73 y sus consecuencias, en un país no propiamente petrolero aunque con petróleo. Sin embargo la situación de YPF pasa desapercibida, debido en parte a que ese tercer gobierno de Perón está inmerso en la violencia política, que se da en un entorno de crisis económica y alta inflación. Su política económica es continuación del gobierno de Lastiri y su Plan Trienal, que busca mejorar la distribución y la inversión, aumentar el nivel de demanda y disminuir el proceso inflacionario; cimentada en un Pacto Social que, según Perón, va a permitir establecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el fortalecimiento del mercado interno, las restricciones a la operatoria del capital extranjero, ubicado en diversas ramas industriales. El Pacto Social, que era un pacto entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado intenta fijar precios máximos, que resulta ineficaz por la inflación, el desabastecimiento y el mercado negro. Para contrarrestar la situación, congela los salarios, y libera la mano de los patronos para despedir a trabajadores. Mientras, las organizaciones guerrilleras operan militarmente, con un accionar cada vez más osado, que lleva a la reforma del Código Penal, que eleva las penas correspondientes a las actividades denominadas terroristas. La situación se agrava con la muerte del líder en 1974. La presidencia la asume su esposa María Estela Martínez en medio de una situación económica y política calamitosa, pues la inflación alcanza niveles de destrucción de la moneda, los partidos se encuentran divididos, los grupos paramilitares operan el terrorismo de estado y la violencia política produce cerca de 500 asesinatos políticos. Martínez, que lleva a cabo una intervención del sector privado, roza el asunto petrolero de nacionalizar sin indemnizar; lo que apura la intención de la Shell de retirarse del país. En 1975, al borde de la guerra civil y previo al golpe militar, cuando se considera viable la exploración en la plataforma marítima, ninguna empresa estaba dispuesta a arriesgarse; y los propios esfuerzos de la estatal resultaron frustrados al hundirse en el golfo de México una torre de perforación submarina que no había sido asegurada.

La situación política desemboca en 1976 en el golpe de estado dirigido por Rafael Videla, junto al Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti, con quienes se inicia el
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que se extiende hasta la asunción de Raúl Alfonsín, elegido por el voto popular el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo según los golpistas, era refundar el país. Para su efecto se dan a la tarea de implementar una serie de reformas como la financiera de 1977 y la arancelaria, a la sombra de un creciente endeudamiento. Rompen con el modelo de sustitución de importaciones, y por tanto, el vínculo entre el sector industrial y el Estado. Priorizan la valoración financiera, que requiere otro tipo de Estado. En ese marco se reconoce en el sector minero la propiedad de los particulares sobre el subsuelo, una estrategia desnacionalizadora que después se profundizaría con Alfonsín (Schwarzer., 1986). Para entonces el sector privado pasa de extraer 5.9 millones de toneladas de crudo en 1976 a casi 11 millones en 1980, hasta alcanzar el 40% de la producción. YPF se mantiene estancada, vendiendo su crudo con precios subsidiados a las refinaderas privadas: ESSO y SHELL. (Bernal. 2005).

La dictadura se dedica a la represión indiscriminada, mientras la crisis económica y política lleva a miles de personas a emigrar del país. Elimina la guerrilla al costo de miles de desaparecidos, torturados y violación de los derechos humanos. Disuelve la organización sindical CGT, y extiende la persecución sobre los líderes sindicales y obreros. Decreta la prohibición de las actividades políticas y destituye a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Censura los medios de comunicación, y coopta numerosos organismos que pone a su servicio. Con la excepción de los ministros de educación y economía, los demás funcionarios son militares.

La gestión económica queda a cargo de Martínez de Hoz, quien proyecta abrir el país a la competencia internacional, que privatiza a favor de las multinacionales. La gestión la acompaña del debilitamiento del sector sindical, al que se le prohíben sus actividades. Promueve las exportaciones, y el restablecimiento del nivel de reservas monetarias de la mano del crédito internacional. Controla los salarios, aumenta los impuestos, disminuye el gasto público en materia social y educativa, y la ayuda a las provincias. Las medidas le permiten recibir del F.M.I cerca de US$1.300 millones en créditos de varios tipos, con el propósito
declarado de pagar la deuda externa. La reforma financiera elimina las restricciones del Banco Central sobre las tasas de interés y las limitaciones que impiden el endeudamiento en el exterior de las empresas, tanto públicas como privadas. De esta manera muchas empresas aprovechan la alta liquidez en los mercados internacionales para contraer tantos préstamos como quisieron. Gracias a esa medida sus ganancias se acrecientan, debido a que el endeudamiento permite su especulación financiera. Al sobrevaluar la moneda, mediante un mecanismo conocido como “la tablita”, permite al capital más concentrado del país hacer grandes negociados en la “timba financiera”, en detrimento de la industria. Al disponer altas tasas de interés, atrae capitales externos que obtienen en poco tiempo altos rendimientos en moneda extranjera. Con el peso sobrevaluado todo lo que se importaba resulta barato, y lo que se exportaba era caro en los mercados externos. Los viajes al extranjero se convierten en algo accesible para la clase media argentina. Los turistas argentinos vuelven al país cargados de artículos de consumo que adquieren a precios irrisorios, a costo de una economía industrial nacional en extinción. Era la época de la “plata dulce”. La crisis industrial de 1980 acompaña a una serie de quiebras de cierres de establecimientos, junto al aumento del petróleo en el mercado internacional que se presenta finalizando los años setenta e inicios de los ochenta, hace evidente la crítica situación, eso porque, al crecer la inflación mundial, los países importadores sienten el efecto y se inicia la etapa recesiva. Al contraerse el mercado internacional, descienden los precios de los productos básicos y aumentan considerablemente las tasas de interés. El alza en las tasas de interés al 8% en los Estados Unidos, decretada por Ronald Reagan en 1981, aumenta las deudas externas. La deuda de Argentina crece de una manera enorme en pocos años, aumenta en US$ 6 mil anuales entre 1978 y 1982. Deuda que, cuando Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central, decide estatizar, es decir, licuar; beneficia a los grandes grupos y perjudica al Estado y a la sociedad. En lo que se conoce en la región como la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.

En consecuencia con el modelo implementado por la dictadura, en el sector petrolero se le devuelven a las empresas privadas los canales de comercialización, y se dispone atraer la inversión privada en la mayor medida posible. Se firman tres contratos con la Shell, y uno con la

En 1982 la derrota en la Guerra de las Malvinas, asesta un duro golpe a la dictadura militar que procede una salida electoral, y la elección en 1983 de Raúl Alfonsín (1983-1989), con un discurso social-demócrata, de condena a la violencia política y la violación de derechos humanos, y de rechazo a la autoamnistía de los militares.

En lo que concierne al sector petrolero Alfonsín propone el Plan Houston para licitar internacionalmente 165 áreas continentales y marítimas, con una vigencia de treinta años y sin intervención del legislativo. Su fracaso lo hace impulsar el llamado Petroplan. Daniel Montamat, uno de sus gestores afirma:

...lanzamos un plan pensando en los cambios estructurales. El Petroplan abría, para la inversión privada, áreas marginales en producción, que explotaba YPF. El inversor podía acceder a la libre disponibilidad del crudo que extrajera. El plan buscaba crear un segmento de oferta de libre disponibilidad, etapa inicial de un proceso de desregulación del Up Stream (Montamat, 2007).

Un plan que tampoco se puede implementar. (Benclowicz, 2010). Ambos planes indican la intención de llevar a cabo un proceso de privatización de la empresa. “El Plan Houston inauguró la desregulación de la actividad exploratoria, en tanto que el denominado “Petroplan” reivindicó el principio de “libre disponibilidad” del crudo explotado” (Montamat.2007: 32)

Por lo demás, Alfonsín enfrenta el problema de la transición a la democracia. En 1983 sanciona los decretos 157 y 158, por medio de los cuales se enjuicia a los dirigentes guerrilleros y a las cabezas de las tres juntas militares que dirigieron el país. Crea una Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP) para que revele pruebas de violaciones de derechos humanos, y enjuiciar a las juntas militares; lo que ocasiona la rebelión de los “carapintadas”, y de mandos militares

Menem se acoge desde sus inicios a las políticas del Consenso de Washington que ponen al centro la privatización. Dispone de un duro programa de ajuste ultraliberal, para reducir la inflación cercana al 5.000%, y una deuda exterior de US$63.000 millones. En los dos primeros años su programa desregulador, privatizador general de las empresas públicas (al final de su gobierno no quedaba ninguna empresa en manos del Estado, incluido el sistema de seguridad social), reductor del gasto público y de los salarios (situados por debajo del índice de precios), y multiplicador de algunos servicios públicos, no genera los efectos esperados. También, con el argumento de la modernización, la eficacia y la extinción de los abusos del asistencialismo, desmantela el sistema de previsión social y liquida lo que quedaba del Estado-providencia.

En 1991, en un ambiente de tensión social, su ministro Domingo Felipe Cavallo, fija la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por dólar, en un año que cierra con un crecimiento del PIB del 4,5%, y una inflación de 173%. En 1992 con el Plan de Convertibilidad, se
recupera el peso como unidad monetaria con paridad exacta y fija con el dólar, y prohíbe toda emisión de moneda sin el debido respaldo en las reservas internacionales de divisas. La gestión económica se beneficia por la caída de los tipos de interés, que contribuye en un crecimiento sostenido hasta 1995, cuando sobreviene una recesión del -4,4%. Entre 1990 y 1999 la economía nacional crece en un promedio del 3,3% anual, acompañada de un PIB positivo, junto a una inflación contraída en 1996 en 0,1% anual. En un acuerdo conocido como el pacto de los Olivos, que da origen a la Reforma de la Constitución en 1994, se da paso a la reelección presidencial para un segundo período cuatrienal consecutivo en lugar del mandato sexenal no prorrogable.

El manejo del sector petrolero y de YPF durante la era Menen, y continuada por De la Rúa, se fundó en consecuencia con la implementación de su estrategia aperturista y Neoliberal. Inicia su gestión con el enunciado que YPF “es la única petrolera en el mundo que arroja pérdidas”. Su ministro de economía Cavallo diseña la fórmula para su privatización y desregulación, y el Congreso las aprueba a través de dos leyes: La ley de Reforma del Estado 23.696 y la Ley de Emergencia Económica 23.697. La primera permite asociaciones y concesiones en las áreas de exploración y explotación, para incentivar sociedades mixtas y dejar de lado el antiguo sistema de contratos. La segunda acaba con los subsidios a cargo del Estado, desafecta fondos con fines específicos, fija precios oficiales para los combustibles, y define los lineamientos para el pago de regalías. (Bernal. 2005). Por el Decreto N° 2.778/90 transforma a la petrolera YPF en una Sociedad Anónima, para denominarse como Repsol-YPF SA. La empresa queda regida por el derecho privado bajo el título de programa de propiedad Participada, y cotiza sus acciones en la bolsa de valores. El decreto incluye un estatuto para la nueva empresa con un capital social fijado en US$1.170 millones. En cuanto a las acciones, el Estado se reserva inicialmente el 51% de las mismas, aunque la ley lo autoriza vender su participación hasta llegar a un mínimo del 20%; una nueva ley la 24.2474, sancionada en 1995, “autorizaba al Estado a reducir su tenencia accionaria a una sola acción” (Dicco, 2006, pág. 29). La empresa española Repsol compra las acciones de YPF por un total de US$15.000 millones, y al tener libertad absoluta con el petróleo extraído, exporta grandes cantidades de crudo al mercado internacional, que le rinden ganancias por US$2.000
millones anuales. “La empresa obtiene el 61% de su producción de pozos argentinos, de donde extrae cada día 460 mil barriles diarios y 49 millones de metros cúbico de gas natural. Los dueños de Repsol son los bancos españoles La Caixa y el Bilbao Viscaya, (Sic) y el 9.36% de las acciones pertenecen al fondo estadounidense Brandés”. (Piqueteros Mosconi., 2006, pág. 63). Debido a la disponibilidad del petróleo extraído por parte de las productoras, se da una brusca caída en las reservas del país. (Ver cuadro N° 7). “Al actual ritmo de producción hidrocarburífera, Argentina tiene reservas probadas para 9 años en petróleo y 12 en gas” (IBAPE. Instituto Buenos Aires de planeamiento estratégico., 2005). De esa forma Argentina pierde totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.

En su segundo mandato Menem mantiene las políticas económicas de su primera administración, anuncia la aniquilación del paro y la difícil situación social de una población situaba en un 25% por debajo del umbral de la pobreza. Menen plantea dolarizar la economía para darle confianza a los inversores, y como signo del saludable estado de la economía argentina. Considera además que se debe extender a toda Sudamérica hacia 2005, en paralelo con desarrollo del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), auspiciado por Estados Unidos; que significaba el entierro del MERCOSUR. Esta situación lo enfrenta a Enrique Cardozo de Brasil que venía propugnando la consolidación y la profundización del MERCOSUR que iba más allá de los aspectos meramente librecambistas. Menem, demostraba así su incondicionalidad y alineamiento político con el grupo de países liderados por Estados Unidos. La recesión de 1998 y las acusaciones de corrupción tienen como consecuencia un descenso en su popularidad. Luego de un nuevo intento de reforma constitucional, con el fin de reelegirse nuevamente, Menem entrega el poder a Fernando de la Rúa en 1999.(Galasso, 2005).

Menem lega a de la Rúa una baja inflación, un fuerte déficit de las cuentas públicas de US$ 7.000 millones, y una creciente deuda que sumaba US$ 170.000 millones, más del doble que en 1989. Esa situación potencia la recesión de 1998 sustentada en una caída de la producción del 3.1%; variables que van a propiciar una situación de
inestabilidad política e ingobernabilidad argentina durante los primeros tres años del nuevo siglo XXI.


En el marco de una situación política sobresaltada en Argentina en la primera década del siglo XXI, ilustrada en la existencia de siete presidentes y las crisis de los partidos, que cierra en el 2010 con el gobierno de Cristina Fernández; y el gobierno de corte izquierdista de Luiz Ignacio Lula de Silva en el Brasil, se van a dar las nuevas políticas petroleras en estos dos países.

3.4.1 Argentina


El gobierno de Fernando de la Rúa es continuador del menemismo. Su ministro Domingo Cavallo aplica un sistema de convertibilidad que produce una fuerte fuga de divisas hacia el exterior, cubierta con las reservas argentinas y un gran endeudamiento externo, apoyado en los excepcionales respaldos financieros concedidos por el FMI. Pocos meses después este organismo decide terminar con el financiamiento y deja el manejo monetario del país ante el dilema de devaluar o dolarizar. El gobierno opta por imponer el denominado “corralito”, un régimen que impide a la población sacar sus depósitos bancarios, y la obliga a realizar los pagos mediante transacciones bancarias. Medida que la afecta seriamente. La situación social explota en saqueos y desmanes callejeros, encabezados por una pueblada compuesta de trabajadores diversos y piqueteros que reclamaban: “que se vayan todos”. La acción popular, que deriva en la renuncia del presidente, al que le siguen, en un solo año del 2001 la renuncia de cuatro ejecutivos; que resultan políticamente insignificantes, pero dicientes de la situación. “De las
jornadas de diciembre de 2001, los partidos salieron malheridos. Las asambleas barriales... dieron la impresión, no infundada, de que el cuerpo político argentino estaba averiado y que iba a ser muy difícil restáuralo.” (Sarlo, 2011)

En enero del 2002 y en medio de un ambiente de ingobernabilidad, la Asamblea Legislativa elige, vía consenso del peronismo y la oposición, a Eduardo Duhalde para que finalice el cuatrienio, para el que había sido elegido de la Rúa en 1999. No se anticipan comicios y se agenda encontrar un Ejecutivo estable con el máximo apoyo partidista. Duhalde, reconoce que el país estaba “quebrado”, y anuncia un Gobierno de Unidad Nacional con el fin de “reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”.(Wikipedia, 2012). Duhalde se propone pacificar el país, y con su Ministro Roberto Lavagna gestiona una serie de medidas económicas para reactivar la economía, azotada por la recesión, entre las que cuenta: 1.La devaluación de la moneda para poner fin a la ley de convertibilidad y la pesificación forzada de los depósitos bancarios, 2. El impulso de un plan económico productivista interno, que lleve a la economía argentina a un crecimiento del 5% en el primer trimestre de 2003.

La gestión de Duhalde se valora aceptable, pero la situación con vistas a las elecciones presidenciales en el 2003 no deja de ser confusa. La situación social indica un 54% de la población por debajo del límite de pobreza, y de ésta, el 27% del total por debajo de la línea de indigencia. Como estrategia electoral el partido justicialista toma la decisión inédita de suspender la elección interna y permitir a todos sus precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general, lo que significa su enfrentamiento, como si perteneciesen a partidos distintos. Entre los candidatos se encuentra Néstor Kirchner del Frente para la Victoria, quien impulsa un programa de corte socialdemócrata, con el que busca diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa. Son sus consignas: “Un país en serio” y “Primero Argentina”. Entre sus colaboradores se van a encontrar Roberto Lavagna, y su esposa Cristina Fernández. Kirchner, es elegido con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina para dirigir al país hasta el 2007.
Kirchner le da continuidad al programa económico de Duhalde. Confirma como Ministro de economía a Roberto Lavagna. Mantiene la devaluación de la moneda mediante la compra de divisas por parte del Banco Central. Impulsa, vía las exportaciones, el crecimiento económico y el comercio exterior dentro del Mercosur, que le permiten alcanzar tasas del PBI cercanas al 10%. En medio de una situación de conflicto con el FMI cancela por anticipado la totalidad de su deuda por un monto de US$9.810 millones, de esa manera saca al país de la cesación de pagos, y canjea la deuda por nuevos bonos indexados por la inflación. Es su objetivo declarado, terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI. Una situación que surge a raíz de la crisis del 2001, cuando el país entra en la suspensión de pagos (default) de una deuda que alcanza en el 2004 los US$ 178.000. Los informes económicos señalan que en el período 2003-2007 se registran tasas de crecimiento anual promedio del orden del 9%, el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo, y una caída de la tasa de desempleo urbano del 53,8% (CEPAL); que se explica por la mayor incorporación de mano de obra en la producción, y que acompaña la dinámica de la economía en su conjunto. Igualmente a nivel internacional, Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios latinoamericanos: Luiz Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela), quienes se plantean la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas.

Kirchner, que había apoyado a Menen en la privatización de YPF (Sarlo, 2011), en el mismo discurso inaugural de gobierno hace una defensa del Estado como garante de la dimensión social del mercado, que debe intervenir allá donde éste “excluye y abandona”, bajo las nociones de un “capitalismo nacional” y de un “modelo de producción de trabajo y crecimiento sustentable”. Por lo mismo le apuesta a aumentar el papel del Estado en la economía con la imposición de nuevos controles, aún a riesgo de desincentivar la inversión foránea, junto a una propuesta de renacionalizaciones, iniciado con las Aerolíneas Argentinas.

En esa disposición, por la crisis que presenta el sector petrolero, atribuida en parte a la falta de inversiones por las petroleras privadas,
Kirchner propone en 2004 la creación de una empresa estatal de energía: Energía Argentina, S.A. (Enarsa).

En 1998 nuestro país había dejado de importar gas y nos convertimos... en un país exportador... Lo curioso y mucho más preocupante aún es que a partir del año que dejamos de importar gas, cayeron verticalmente las exploraciones en la búsqueda de nuevos yacimientos. En el año 2002 y 2003 apenas si se realizaron una veintena de perforaciones (Delfico, 2005, pág. 116).

Enarsa es creada en el año 2004, por la Ley Nacional 25.943 y promulgada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1529/2004. Con esa decisión institucionalizada, Kirchner entra a jugar a nivel de la región en un proceso de integración energética. Enarsa se concibe como una compañía de titularidad pública encargada del sector de la energía, que se considera una “cuestión de Estado”, por tratarse de un insumo básico para el bienestar humano y el desarrollo económico; teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar el acceso a los recursos energéticos a todos los ciudadanos. Son los propósitos de la empresa: colaborar en el suministro de energía para atender las necesidades de crecimiento del país y el bienestar de todos los ciudadanos; promover el desarrollo de la industria nacional y generar valor para los accionistas. La empresa puede adquirir cuota de mercado en todos los tramos del negocio de los hidrocarburos así como el monopolio legal sobre de la exploración y explotación de la plataforma submarina del Mar Argentino. Enarsa cobija al sector eléctrico, que debe generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y realizar actividades de comercio vinculadas con este tipo de bienes. En el 2004, en el prólogo de la XXVI Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú, firma con Hugo Chávez una carta de intención para crear la compañía sudamericana de energía Petrosur, con la participación de Enarsa y PDVSA. (Acosta, 2008). Argentina sale beneficiada de su asociación con Venezuela, pues PDVSA aporta grandes sumas de capital para la extracción de crudo de los pozos offshore del Golfo San Jorge, mientras que Enarsa se introduce, en la explotación de la Faja Petrolera del Orinoco, es decir, se involucra en un lucrativo negocio compartido.
Argentina importa combustibles de una forma crecientes desde el 2005. En el 2008 alcanza los $16.200 millones, y en el 2009, $19.900 millones. Acompaña esa importación el desabastecimiento en el suministro de gas y de nafta de algunas de sus provincias, achacado por el ministro de planificación a la Shell y Petrobras, con el fin de subir los precios. (Harry854).

La presidenta Cristina Fernández que mantiene la perspectiva de su antecesor, se plantea en el 2008 la nacionalización de YPF Repsol YPF, sin concretarse en el 2010 aún la iniciativa. (Rebossio., 2012). Para este año las reservas probadas de petróleo en Argentina totalizan los 2.500 millones de barriles, 500 millones por debajo de comienzos de la década y en los mismos niveles que en 1980 (IAPG, 2012), es decir, que sus reservas se mantienen estancadas sin darse expansiones significativas.

La producción obtenida por YPF no es producto de nuevos descubrimientos, sino de la producción secundaria de los pozos viejos. En 1998 alcanza el pico histórico de producción con 890 mil barriles diarios, que en 2010 queda reducida a 651 mil barriles. En cuanto la exportación, pasa de 100 millones a comienzo de la década a poco menos de 40 millones en 2010. La experiencia de Repsol YPF, ha consistido en obtener ganancias iniciales con la venta de las reservas que tenía la empresa al momento de su privatización, sin hacer mayores esfuerzos exploratorios. Ganancias que caen en el 2008-2009, para reactivarse en el 2010 como producto del alza de los precios de los combustibles a nivel internacional. Esa situación se corresponde con su estrategia de sacar del país buena parte de sus ganancias, redirigidas como pago de dividendos para sus accionistas. Sus ganancias representan en el 2000-2003 el 57% de las sutilidades totales, que suben entre el 2004 y 2007 al 65%. A partir del 2008 Repsol muestra interés en desarrollar otras áreas más prometedoras: Norte de África o costas afuera en Brasil y se habla de la “argentinización” de YPF, es decir, de la compra de parte de YPF por el grupo empresarial: Petersen; que implica la reducción de la participación del grupo español en YPF del 98% inicial a un 51%” (Farfaro, 2012). La producción de derivados del petróleo que crece en un 3% en 2010, revierte la baja del 1,2% de 2009; que no alcanza para satisfacer la demanda, dado el crecimiento en el consumo de nafta del 10,6% con respecto al 2009.(Harry854).
Como producto de esa política, Argentina ve menguar sus reservas desde fines de los años ochenta, como se puede apreciar en la gráfica N° 11.

**Gráfica N° 11.** Argentina: Reservas/producción 1980-2008


_Iniciando el siglo XXI, Argentina,_

...no es más que un mercado de combustibles de tamaño medio y con una masa reservas en contracción. La posibilidad de restituir reservas incorporando yacimientos no convencionales está supeditada a recuperar; a su vez, los márgenes internos en el plano de la extracción. Es decir, a subir más los precios de los refinados. La necesidad de avanzar sobre reservas no convencionales pondrá, aún más, en evidencia los límites de la industria petrolera local para garantizar las distintas formas existentes de subsidios en la energía (Farfaro.2012).

Para el 2010 la deuda de Argentina es de unos US$ 116 mil millones y el PIB de US$302 mil millones.

**3.4.2 Brasil**

Luiz Ignacio Lula da Silva (2003-2011) inaugura la vida política brasileña del siglo XXI. Su candidatura parte del primer congreso
nacional del partido Socialista (PT) de 1991, que impulsa una revisión ideológica, con la renuncia de la lucha armada.

El PT fue definido como “partido socialista” que rechaza tanto el capitalismo liberal como el socialismo soviético, pero también la socialdemocracia. Lula lo compara con un árbol de tronco socialista cuyas ramas eran lo bastante flexibles como para incluir diversas corrientes, desde los trotskistas hasta los ecologistas y los teólogos de la liberación (Biografías y vidas, 2004).

Derrotado en las elecciones de 1994 y 1998, es elegido con más de 50 millones de votos (el 61,27 %), y sienta un precedente en la historia política de Latinoamérica, por ser la primera vez que la izquierda radical llega al poder a través de las urnas. Lula es reelegido en el 2006.

Como presidente proclama la llegada de una nueva era para Brasil, y convoca a los brasileños “a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria”. Tiene entre sus retos calmar los mercados financieros, afrontar los próximos vencimientos de la deuda y proseguir la austeridad presupuestaria, que era condición para el apoyo del FMI. Este organismo le extiende un crédito de US$31.000 millones, y se lo incrementa en US$6.600 millones adicionales. Lula se la juega al desarrollo de unas políticas pragmáticas de estabilización, y vigilancia celosa de la economía, con reformas graduales pero firmes: “con el objetivo de modernizar las estructuras productivas y sociales e integrar a todos los brasileños en las dinámicas del desarrollo y el crecimiento sin abandonar los cauces del libre mercado”. (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona,, 2011). En cuanto a la política social, impulsa: 1. La campaña Hambre Cero, con la pretensión de acabar con las situaciones de hambre y desnutrición, habilita un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria bajo su directa jurisdicción apadrinado por celebridades de la cultura y el deporte, y con el apoyo de la FAO, 2. El Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, 3. El plan para erradicar el analfabetismo, que afectaba al 14% de los brasileños, 4. El Programa Bolsa Familia, destinado a cubrir las necesidades básicas de 3,6 millones de núcleos familiares empobrecidas y, 5. El Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), que contempla el asentamiento de más de medio millón de familias de campesinos sin tierras, y la entrega de títulos de propiedad a otro tanto, que no habían
recibido sus respectivas titulaciones. Para esos propósitos reduce el 16% del gasto público para cumplir los compromisos adquiridos con el FMI, e impulsa una reforma estructural que cercena parte de las pensiones de los empleados públicos, consideradas desmesuradas y un privilegio sangrante en relación con el resto de asalariados. Propone retrasar la edad de jubilación de los funcionarios y recortar sustancialmente la cuantía de sus pensiones. Eso le genera la primera huelga que Lula replica afirmando...

...que no se podía tolerar una discriminación tan abultada para el 87% de jubilados que habían trabajado en el sector privado y que cobraban unas pensiones comparativamente muy inferiores, contributivas a la sazón, y que los recortes graduales eran imprescindibles para suprimir el déficit de la Previsión Social, obtener recursos para financiar el programa Hambre Cero y avanzar en la reducción de las desigualdades sociales" (CIBOD, 2011).

En el escenario internacional impulsa el desarrollo del mercado regional del Mercosur. De otra parte, pese al tamaño de los intercambios comerciales que tiene Brasil con los Estados Unidos, su principal cliente y proveedor, (como el destino del 25% de sus exportaciones superando al conjunto de América Latina en ambos flujos), se enfrenta con el presidente Norteamericano Bush, respecto a los temas de la forma de combatir el terrorismo, la noción de la seguridad hemisférica, la actitud frente a la Corte Penal Internacional, y los acuerdos medioambientales multilaterales como las convenciones sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto de reducción de gases de efecto invernadero, la Biodiversidad, y las fórmulas para combatir la pobreza; que el mandatario estadounidense sustenta con base en la doctrina liberal de reducir los impuestos a las rentas más altas, para que los beneficiados hagan las inversiones productivas de riqueza y empleo, mientras Lula le apuesta a la movilización del Estado, la fiscalidad progresiva y la persecución del fraude evasor.

En la gestión económica Lula le da cierta continuidad al programa de su predecesor Cardozo (Sallum, 2008). De ese programa destaca: La apreciación del Real con respecto al dólar, la mejora de los índices del riesgo-país y la revalorización de los títulos de deuda pública, la autonomía del Banco Central, la asunción del servicio de la deuda
externa, la prolongación de la ortodoxia anti-inflacionista y la elevación del objetivo de superávit fiscal. Al finalizar su primer gobierno Lula refiere los alcances de su gestión, entre lo que destaca: la cancelación anticipada de la deuda contraída con el FMI con cargo a las crecidas reservas internacionales del Banco Central. La reducción de la deuda externa desde los US$131.000 millones alcanzados en 2003 a US$90.000 millones de dólares. La reducción de la inflación al 2%, a costo de una política monetaria muy estricta, y un crecimiento, entre 2003-2006, del 3,5% del PIB nacional.

Para su segundo gobierno se plantea el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el programa tienen el propósito de obtener un crecimiento económico anual del 5% hasta 2010, y avanzar en la distribución más equitativa de la renta disponible y de la nueva riqueza generada, a través de la inversión masiva del Estado en infraestructura: Transporte, energía, vivienda, saneamiento, recursos hídricos, y estimulando las inversiones y los negocios privados por medio de facilidades crediticias, exenciones tributarias y otros incentivos fiscales, en particular a las industrias de bienes y servicios con peso tecnológico. Esas inversiones disparan la deuda hasta el 77% del PIB a finales de 2009.

La gestión del gobierno de Lula en el año 2010, muestra un PIB de 7.5%, un crecimiento de la producción industrial del 4.2% y de la agricultura en un 2.7%. Un aumento del empleo para 1.6 millones de personas. Cifras que ubican a Brasil como la octava economía del mundo.

En lo que respecta al sector de la energía, que incluye a los hidrocarburos, Lula coloca al centro de su gestión el desarrollo en varios frentes: Biocombustibles, energía nuclear, eólica, termoeléctrica y la petrolera, que iban a convertir al Brasil en “la mayor potencia energética del planeta dentro de 20 o 30 años". Para su conducción nombra en el Ministerio de Minas y Energía a Dilma Rousseff, con la misión urgente de paliar el déficit de generación eléctrica en Brasil. Desde el 2004 reimpulsa en el país, el desarrollo de una industria heredera de la crisis del petróleo de 1973, la producción de combustibles obtenidos de la biomasa: El bioetanol y el biodiesel. Los
biocombustibles Lula los considera como la “revolución energética del siglo XXI”, y fundamento para convertir al Brasil en el primer país con una economía sostenible en ese ámbito, y referente mundial por su uso generalizado en el parque automovilístico. (Novello., 2009). Para 2009 la producción nacional de etanol para combustible en motores de explosión, es de 24.900 millones de litros; esto es, el 37,7% de la producción mundial. Para entonces ya circulaban en el país más de ocho millones de vehículos, los llamados flex, por la flexibilidad en el tipo de combustible que podían consumir. La producción de ese energético tiene sus detractores ambientalistas y conservacionistas, quienes formulan que no se trata de un carburante renovable, y que no es en absoluto un combustible “limpio” pues su producción, genera abundantes agentes contaminantes del suelo y el aire; requiere vastas superficies de terreno susceptible de ser arrebatado a la selva virgen amazónica y atentar contra la seguridad alimentaria mundial.

Pero además de los biocombustibles, Lula acelera el programa nuclear, con la presentación de planes de construcción de un tercer reactor el Angra 3, operado por Eletrobrás Electrunuclear en la Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto de Angra dos Reis, en Rio de Janeiro, y de un submarino para la Armada impulsado por energía atómica.

Las políticas desarrolladas en el sector petrolero le permiten a Brasil alcanzar el autoabastecimiento en el 2006, debido a las grandes inversiones hechas en aguas profundas, que le permiten poner en marcha la producción del campo Albacora Leste en la Bacia de Campos. De otra parte Petrobras S.A, la convierte en una empresa de carácter semi-público, dedicado no solo al sector petrolero y gasífero sino también al mercado de la generación de energía eléctrica y fuentes de energía renovables. Desde entonces es considerada la 4° mayor corporación de energía del mundo según PFC Energy, actuando en 12 países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, México, Colombia y Bolivia. Para el 2010 cuenta con más de 100 plataformas de producción, unos 15.000 pozos productores, y alrededor de 26.000 km de ductos; 5 plantas de biocombustible, 2 fábricas de fertilizantes y una flota naviera de 172 embarcaciones, 52 de ellas de su propiedad; además, de 15 refinerías con una capacidad instalada de 2,2Mb/d., y unas 9.000 estaciones de servicios. (Business News América. 2012). Petrobras ejerce el control
de la industria petrolera en el Brasil en donde solo la Royal Dutch-Shell extrae petróleo sin control de la estatal. Petrobras además adelanta una estrategia de internacionalización sin descuidar su mercado interno y su objetivo del autoabastecimiento, pues esas inversiones en el exterior solo copan un 20% del total. De ellas se destaca la compra de una refinería en Japón a la Exxon y del 50% de otra en Pasadena, Texas; el desarrollo de operaciones de extracción en África Occidental, y diversas en América Latina, que agencia con el mismo talento de las demás transnacionales que operan en esos países. A través de Petrobras Energía S.A. agrupa las operaciones en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. De Argentina extrae el 60% del petróleo y el 83% del gas, país en el cual realiza, entre el 2003-2006, la explotación de 256 pozos para aumentar la extracción de las reservas existentes. En Bolivia, país del cual depende para satisfacer su demanda gasífera, compra dos refinerías, tiene la mayoría accionaria de las reservas, y participa de la propiedad de los gasoductos internacionales que unen los dos países. País con el cual se dieron tensiones luego de decretar Evo Morales la nacionalización de los hidrocarburos, y que Petrobras amenaza con no realizar nuevas inversiones; la tensión es revertida por la gestión personal de Lula. (Mancilla, 2008).

En el aspecto financiero la petrolera estatal brasileña registra en el 2010, la mayor oferta de acciones en la historia de los mercados, para captar unos US$65.000 millones para financiar inversiones. Una iniciativa que incluye un intercambio de petróleo por acciones con el Gobierno por 43.000 millones de dólares. Es interés del Gobierno aumentar la participación estatal en la compañía al 40%, desde el nivel actual cercano al 30 por ciento, que significa una mayor influencia del Estado en la firma. El plan es la piedra angular para la financiación del proyecto de inversiones a cinco años, que busca convertir a Brasil en un exportador de petróleo, accediendo al crudo que se encuentra en las profundidades debajo del lecho marino, en una región conocida como Presal (IPME, 2010). El Presal hace alusión a grandes descubrimientos petroleros hechos en el 2007 en mar adentro (Offshore), que según Petrobras indican volúmenes recuperables de 10.600 a 16.000 millones de barriles equivalentes (crudo y gas), que duplican las reservas brasileñas de hidrocarburos (Osorio., 2012) y lo ubican entre los mayores
del mundo. Únas reservas totales para el 2010 de 13 mil millones de barriles de crudo y de 363.000 millones de metros cúbicos de gas.

Respecto a la deuda, ésta alcanza en el 2010 un monto de US$310.000. El 70% es de carácter público. La deuda de Petrobras se estima en US$22.000 millones.

Una síntesis cuantitativa del comportamiento de estas dos políticas brasileña y argentina durante el periodo considerado, teniendo en cuenta tres variables: Reservas petroleras, exportaciones de crudo y deuda, la podemos apreciar en los siguientes gráficos:

**Gráfica N° 12.** Argentina-Brasil: Reservas: 1970-2010

Los dos países han tenido comportamientos invertidos en el manejo de las reservas petroleras. Brasil ha seguido una curva ascendente, que se dispara en el último quinquenio 2005-2010 en más del 200%.
Brasil es el mejor ejemplo en la región, de un país que no teniendo suficientes recursos respecto a su demanda satisface sus necesidades con base en el desarrollo científico, tecnológico y financiero con base en una empresa semi-estatal: Petrobras, que está bajo el dominio del Estado pero operando industrialmente con independencia.

**Gráfica N° 13.** Argentina-Brasil: Exportaciones de petróleo: 1970-2010

Argentina, que en lo que respecta a recursos potenciales y demanda de energéticos presenta un cuadro similar al Brasil, implementa a partir de los años ochenta una política exportadora de un recurso que le es escaso, junto a la privatización de la estatal YPF. Un boom exportador ajeno, que agota sus reservas en el 2010 y la obliga a repensar en la estatización de sus recursos energéticos a través de Enarsa. Su política permite el desarrollo de empresas petroleras privadas nacionales y la presencia de las transnacionales.
Respecto a las exportaciones de petróleo, las curvas de los dos países se corresponden con el manejo que le han dado a las reservas.

Brasil incrementa las exportaciones a tono con los descubrimientos que hace Petrobras dentro o fuera del país, en un proceso que se muestra ascendente desde el 2005.

Argentina, durante el periodo, ha tenido un proceso permanente de exportaciones. Las mismas se incrementan a mediados de los años ochenta hasta alcanzar cifras significativas en los diez años que van de 1995-2005, de la mano de YPF privatizada; para descender vertiginosamente al cerrar el periodo. Ese manejo de la política la potencia como importadora de energía, con costos que repercuten en su dinámica macroeconómica; salvo la acción que pueda desarrollar la recién creada estatal, ENARSA.


Fuente: Cuadro N°7
La deuda de estos dos países comporta durante el periodo dinámicas similares, graficadas en sus sinuosidades, pero de razones diferentes en sus causas y consecuencias. En general muestran un proceso creciente hasta el año dos mil, para descender en el 2005 y retomar su crecimiento a partir del 2010. Esta última situación se corresponde en Brasil con las necesidades de Petrobras de invertir en el desarrollo de los descubrimientos petroleros hechos en el 2007; mientras, para Argentina, fundamentalmente, para mantener sus equilibrios fiscales. En el 2010 la deuda brasileña representa el 41% de su PIB, y la deuda Argentina alcanza el 62%, la tasa más alta de la región. En términos per cápita el índice Argentina es de US$3.925/Habítante y el Brasil es de US$1.224/Habítante.

3.5 CONCLUSIÓN

Los casos de las políticas petroleras de Brasil y Argentina, ilustran las características e implicancias de la acción de gobiernos que inician en el sector sus desarrollos petroleros por cuenta propia, bajo condiciones poco generosas por parte de sus geologías, que no los hizo atractivas a las grandes trasnacionales. Unas políticas agenciadas hasta los setenta por militares nacionalistas, y en cabeza de sus empresas estatales: YPF en Argentina y Petrobras en Brasil.

Dos políticas similares en su fundación, que a raíz de los acontecimientos económicos y políticos de los años setenta-noventa, asumen destinos diferentes. En Brasil, Petrobras, se convierte en una multinacional semi-estatal, que está estrechamente relacionada con el Estado pero opera como empresa industrial, con independencia, y de forma casi monopólica en el país. Eso le ha permitido satisfacer su demanda interna, incrementar sus reservas y exportar crudo, tener inversiones en el exterior, desarrollar tecnología de punta como las explotaciones mar adentro (offshore), y hacer nuevos descubrimientos como Presal, entre otras. Por su parte en Argentina, junto a la privatización de YPF, aparecen empresas privadas y hacen presencia las transnacionales. Convertida en Repsol YPF de dominio de capitales españoles, incrementa sus exportaciones, agota sus reservas, y aumenta las importaciones; a tono con el incremento de la deuda, que en términos per cápita es una de las mayores de la región.
IV
Bolivia y Colombia

4.1 ANTECEDENTES

Bolivia y Colombia son países que cuentan con recursos hidrocarburíferos, no al nivel suficiente para ser considerados potencias petroleras pero sí con la capacidad para satisfacer sus demandas internas, y hacer un aporte al mercado mundial y/o regional.

Bolivia se destaca por sus reservas de gas, las segundas en la región, y sus exportaciones a Brasil y Argentina. Colombia por sus reservas en petróleo, y sus exportaciones a los Estados Unidos; sus reservas en gas son menores. En términos generales, los dos países han mantenido sus reservas de forma constante y promediadas a través de su historia petrolera. Estos dos países, a partir del año dos mil, implementan políticas de signo invertido en la relación de reparto de inversión y producción 51% - 49% Estado – Multinacionales, para el primer caso Bolivia, para el segundo Colombia; determinante en el tipo del manejo soberano del recurso por parte del Estado.

Bolivia, después de la guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935) (Chiavenato, 2005), promulga una ley petrolera que pone fin a la concesiones firmadas en los años 20 con las multinacionales. Crea la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En 1937 anula la concesión de la Standard Oil Company, a la que acusa de vender crudo ilícitamente a la Argentina, de fraude fiscal y de haber negado el petróleo al ejército boliviano durante la guerra. La situación nacionalista se reversa en 1953 ante las necesidades financieras del
gobierno, que se ve obligado a acudir a una deuda por US $3 millones, y ver regresar las multinacionales.

La historia petrolera colombiana en sus orígenes está ligada a los intríngulis de la situación internacional como la separación del canal de Panamá en 1905, los negocios entre familiares de sus gobernantes, y la historia particular de La Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL). La empresa surge en 1948 a raíz de una huelga del sindicato de los trabajadores: La Unión Sindical Obrera (USO), para presionar al gobierno el recibo de la reversión de la Concesión De Mares en Barrancabermeja, pues el gobierno de entonces quería prorrogársele a la Multinacional. En el mejor intento nacionalista conocido, el gobierno busca a los empresarios nacionales para que se hagan cargo de la reversión, quienes no se arriesgaron, lo que obliga al Estado a constituir la corporación estatal ECOPETROL. La fortuna de ECOPETROL, constituida a desgano de quienes administraban el Estado y gracias a la presión nacionalista de sus trabajadores, depende de la tensión crónica entre el gobierno y las directivas de la Empresa con la USO, como lo ilustran sus numerosas huelgas.

Cuadro N° 8. Huelgas Trabajadores del Catatumbo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Año</th>
<th>Inicio</th>
<th>Terminación</th>
<th>Total días</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1934</td>
<td>ago-08</td>
<td>ago-06</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1946</td>
<td>oct-29</td>
<td>nov-26</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>1948</td>
<td>feb-04</td>
<td>mar-14</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>1960</td>
<td>ago-06</td>
<td>sep-10</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>1963</td>
<td>abr-23</td>
<td>may-24</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>1969</td>
<td>oct-02</td>
<td>oct-07</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1971</td>
<td>may-11</td>
<td>jun-02</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>37 años</td>
<td></td>
<td></td>
<td>170</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: G. Solano B. 50 años de vida Norteantandereana

Su dinámica productiva y de la deuda la podemos ver ilustrada en el cuadro N° 9.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas de Petróleo MB</td>
<td>1.605</td>
<td>1.939</td>
<td>2.180</td>
<td>2.461</td>
<td>3.156</td>
<td>2.952</td>
<td>1.972</td>
<td>1.453</td>
<td>2.058</td>
<td>Reservas de Gas Trillones M3</td>
<td>n.d</td>
<td>0.10</td>
<td>0.12</td>
<td>0.13</td>
<td>0.13</td>
<td>0.22</td>
<td>0.13</td>
<td>0.11</td>
<td>0.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Petróleo KB/d</td>
<td>214</td>
<td>155</td>
<td>125</td>
<td>178</td>
<td>445</td>
<td>585</td>
<td>687</td>
<td>541</td>
<td>746</td>
<td>Producción Gas MM3/año.</td>
<td>n.d</td>
<td>2,1</td>
<td>2,8</td>
<td>4,0</td>
<td>4,1</td>
<td>4,4</td>
<td>5,1</td>
<td>11,9</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportación Petróleo KB/d</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>110.22</td>
<td>148.01</td>
<td>254.16</td>
<td>169.43</td>
<td>376.00</td>
<td>Exportación Petróleo US$</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>310</td>
<td>454</td>
<td>893.73</td>
<td>905.72</td>
<td>1.321</td>
<td>2.823</td>
<td>6.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas de Gas MMM3</td>
<td>n.n</td>
<td>25,9</td>
<td>52,50</td>
<td>92,73</td>
<td>172,01</td>
<td>207,97</td>
<td>221,0</td>
<td>306,4</td>
<td>824.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción Gas MM3/año</td>
<td>n.d</td>
<td>n.d</td>
<td>2,0</td>
<td>2,4</td>
<td>3,0</td>
<td>3,2</td>
<td>3,2</td>
<td>6,2</td>
<td>12,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Deuda</td>
<td>588</td>
<td>825</td>
<td>2,702</td>
<td>3,260</td>
<td>4,275</td>
<td>5,272</td>
<td>5,762</td>
<td>5,439</td>
<td>5,653</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.2 BOLIVIA: 1970-2010

Durante los 30 años comprendidos entre 1970-2000, Bolivia ha tenido 17 jefes de estado, la mayoría de ellos militares que se han hecho al poder a través de golpes de Estado. Comportamiento diciente de su crónico estado de ingobernabilidad. En 1969 ejerce el poder el General Alfredo Ovando Candía (1969 – 1970), quien intenta reiniciar la revolución nacionalista de 1952. Elimina la severa ley de Seguridad del Estado, establece libertades para la ciudadanía y la prensa, autoriza a los dirigentes sindicales para reorganizar la Central Obrera Boliviana (COB); y con una clara posición nacionalista frente al uso de los recursos naturales, deroga en 1969 el Código Davenport del petróleo, expropiando a la Gulf Oil Co., y nacionalizando el gas y el petróleo.

El código de petróleos conocido como Davenport, redactado por la firma extranjera Schuster & Davenport, y promulgada por Víctor Paz Estenssoro en 1954 buscaba atraer a las multinacionales. “Durante la vigencia del Código Davenport, varias empresas extranjeras llegaron al país para realizar trabajos de prospección exploratoria y perforación de pozos, entre ellas se encontraba la Gulf Oil Company que descubrió los campos Colpa, Caranda, Río Grande, El Palmar, La Peña y Yapacani, todos ellos ubicados en el departamento de Santa Cruz” (Fundación Jubileo, 2009, pág. 11).

La nacionalización tensiona las relaciones con la Gulf Oil Company que le aplica al país un embargo petrolero, impidiéndole a Bolivia la comercialización del petróleo producido, la continuación de la construcción del Gasoducto Bolivia-Argentina y la ejecución del préstamo de US$50 millones de dólares (US$25 financiados por el Banco Mundial y US$25 por el Banco Morgan de la Gulf). Esa situación...

...explica la urgencia de Washington por aplastar la rebeldía nacional. Inmediatamente después de la nacionalización de la Gulf, la CIA conspira para detenerla. Los regímenes militares de Brasil y Argentina secundan esos aprestos. La embrionaria oligarquía cruceña articula sus planes golpistas con los empresarios mineros. En este crucial enfrentamiento, la izquierda foránea se equivoca al combatir a Ovando. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) abrió un foco guerrillero que al plantear la destrucción de las FFAA, hace que la mayoría de los militares cambien de bando” (Rada, 2005).

En lo que respecta al enfrentamiento con la Gulf Oil Company, señala Enrique Mariaca Ministro de Hidrocarburos de Torres, que la multinacional exige una indemnización por las inversiones realizadas durante el tiempo de su concesión, para lo cual Torres organiza una comisión para viajar a Estados Unidos y negociar con la Gulf Oil Company. Paralelamente, solicita la intermediación del Banco Mundial y acude al Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento faltante para el gasoducto a Argentina. Respecto a la nacionalización, acuerda una indemnización por un monto de US$78 millones a la Gulf, sin intereses y pagaderos en un plazo de 15 años con los recursos provenientes de la comercialización de la producción. (Fundación Jubileo. 2009).

El golpe de Hugo Banzer era el número 187 en los 146 años de la historia de la República boliviana, y será bien visto por el Gobierno de Estados Unidos, preocupado por la gestión nacionalista y estatista de Torres. Banzer gobierna hasta 1978 bajo un ejercicio dictatorial del poder, caracterizado por la represión, la ilegalización de los partidos políticos, la prohibición del ejercicio sindical, la suspensión de los derechos civiles y la militarización de los centros mineros. “Hasta el final del Gobierno de facto, no menos de 35.000 bolivianos, entre arrestados
y exiliados, sufrieron las represalias del poder. De entre ellos, alrededor de 500 fueron muertos o hechos desaparecer” (CIDOB. 2001). Su gobierno será apoyado desde el exterior por Augusto Pinochet de Chile, la dictadura de Brasil, de Argentina y los Estados Unidos; a quienes en reciprocidad apoyó en el desarrollo del denominado Plan Cóndor. En cuanto a la gestión económica, Banzer no se aparta del modelo estatista y desarrollista, pero reduce el proteccionismo en aras de la apertura a la inversión extranjera. Esta le permite alcanzar una tasa media de crecimiento superior al 5% del PIB, obtenida de la exportación de recursos naturales: gas, estaño, cinc, tungsteno. Con base en esa bonanza, Banzer recurre sistemáticamente al crédito de la banca privada internacional y endeuda al país a un ritmo mayor de lo que crecía la economía. Para 1978 los compromisos financieros de Bolivia representan el 94% del PIB.

Banzer promulga en marzo de 1972, la primera Ley General de Hidrocarburos de Bolivia. Una de sus principales características es la eliminación del Régimen de Concesiones y el establecimiento del Contrato de Operación, y de Servicios Petroleros. La ley considera el rol protagónico de YPF en todas las actividades de la cadena de hidrocarburos, le asigna facultades para la exploración y explotación del territorio nacional, así como en las demás áreas de la cadena hidrocarburros y sus derivados. YPFB queda facultada para llevar a cabo todas las fases de la industria petrolera, ya sea a través de terceros, contratando servicios especializados o en sociedad con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Sin embargo el régimen fiscal no contempla recursos adicionales a favor de YPF. El régimen mantiene la regalía departamental de 11% del valor de la producción y crea un impuesto equivalente a 19% del valor de dicha producción a favor del Estado. El contratista, por su parte, percibe el 50% de la producción bruta. El tiempo de vigencia establecido para los Contratos de Operación es de 30 años, aproximadamente. (Fundación Jubileo. 2009). De igual manera Banzer busca con la Ley General de Hidrocarburos, tener el medio que le permita, a través de las multinacionales, la venta de gas a Brasil y Argentina.

En 1978 Banzer se ve presionado por la tensión social a realizar elecciones. Hace oficial la candidatura del general Juan Pereda Asbún.
Tras la anulación por la autoridad electoral, por el evidente fraude, Asbún se toma el poder y destituye Banzer (quien volverá a ejercer el poder en la década de los ochenta). Asbún ejerce la Presidencia por algo más de tres meses y es derrocado y reemplazado, en 1978, por el General David Padilla Arancibia (1978 – 1979) quien además de crear la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), habilita el poder al mando de un Presidente elegido constitucionalmente. Por razones electorales propias de la norma constitucional, se erige como presidente interino por un año, al presidente del Senado Walter Guevara Arce (1979). Arce fue derrocado tres meses después de manera cruenta por el Coronel Natusch Busch (1979), quien ejerce como funcionario y Ministro en el gobierno de Banzer. Natusch goberna por 16 días al cabo de los cuales renuncia, dejando el poder en manos de una Junta Militar que permite el ejercicio del gobierno interino de una mujer: Lidia Gueiler Tejada (1979 – 1980), quien se compromete con la realización de elecciones en 1980. El atentado aeronáutico días antes de las elecciones, que cobra la vida de varios líderes de la Unidad Democrática y Popular (UDP) incrementa el favoritismo del líder izquierdista, Hernán Siles, pero nuevamente se interrumpe el proceso democrático, al ser destituida la mandataria Gueiler por un nuevo golpe de estado, al mando de su primo el comandante Luis Meza, que impide la asunción de Siles Suazo.

Luis García Meza Tejada (1980 – 1981), será denominado como el “narco dictador”, por sus relaciones con el narcotráfico. Asume el poder acompañado de paramilitares, y ejerce el terrorismo de Estado a través del Ministerio del Interior dirigido por Luis Arce Gómez, quien después será extraditado a los Estados Unidos. Las luchas entre facciones militares lo hacen renunciar en favor del General Celso Torrelío, derrotado nuevamente por Meza, que tras su intento fallido, genera el mandato del Genera Guido Vildoso. En 1982 una huelga general convocada por la COB, pone al país al borde de un conflicto generalizado y hace colapsar a la dictadura militar que entrega el poder a un Congreso Nacional. Este valida las elecciones de 1980 y designa en consecuencia como presidente a Hernán Siles Suazo (1982-1985).

Siles Suazo se encuentra con una situación económica crítica. El país prácticamente está quebrado por causa de las deudas contraídas
por las dictaduras, con una hiperinflación que llega al 27.000% y
destruye el poder adquisitivo de los asalariados, lo que deriva en la
anarquía del país.

...la economía estaba en recesión aguda, el paro rozaba el 18% y, sobre
todo, atenazaba una hiperinflación del 2.800%, que, de continuar su
crecimiento exponencial, podía llegar al índice del 50.000% a final de año,
la más alta del mundo. Desde 1982 el peso se había depreciado hasta
el punto de cambiarse a 750.000 unidades por dólar, mientras que los
salarios reales se habían recortado en más de un 60%" (CIDOB. Centro de
estudios y documentación internacionales de Barcelona, 2002).

Sus medidas económicas fracasan y la gravedad social y militar
lo obliga a renunciar, y llamar a nuevas elecciones en 1985. En estas
elecciones es elegido Víctor Paz Estensoro.

Paz Estensoro (1985 – 1989), había sido Presidente en 4 ocasiones:
se plantea las nacionalizaciones, la reforma agraria y educativa, y el
sufragio universal. En éste último gobierno Estensoro pacta con Banzer
el llamado Pacto por la Democracia, para aplicar, por medio del decreto
supremo 21060, un plan de ajuste económico basado en el concepto de
la Nueva Política Económica (NPE) de corte neoliberal, que cuenta con el
asesoramiento del economista norteamericano Jeffrey Sachs. La Nueva
Política es un programa de ajuste estructural, estabilización monetaria
y financiera para sentar las bases para la reversión del estatismo de la
economía boliviana y su inserción en las dinámicas del libre mercado.
Es una profunda reforma estructural y un viraje desde la Revolución de
1952, con la significación de ser su artífice el mismo actor de aquella:
Estensoro. El ajuste levanta los controles sobre los precios y cambios,
y su regulación por el mercado; levanta la suspensión del pago de la
debuda; renuncia a la emisión de moneda para suplir el déficit fiscal y
ejerce una rigurosa austeridad del gasto. Incrementa la recaudación
del Estado, ordena impuestos sobre el valor agregado, sobre la renta
y el patrimonio. Congela los salarios de los funcionarios, y traspasa
la titularidad de empresas estatales a corporaciones regionales de
development. Las medidas tienen como respuesta la protesta de la COB
y la FSTMB que serán fuertemente reprimidas. Proclama dos veces el
estado de sitio y confina a los dirigentes sindicales a zonas inhóspitas del
norte del país. (CIDOB, 2002). La difícil situación económica se apremia con el colapso de los precios mundiales del estaño y otros minerales no ferrosos, base del comercio exterior boliviano. Cuando la Bolsa de Londres clausura las actividades del metal, Bolivia ve evaporarse el 90% de sus ingresos por la materia prima. Entonces Estensoro echa mano de la reconversión total de la Corporación minera de Bolivia (Comibol), despide 25.000 trabajadores de la minería que terminan engrosando la economía sumergida; buena parte de ellos se dedican a los cultivos tradicionales como la planta de coca.

Los resultados de su política muestran para 1986 un índice de inflación del 66%, un déficit público reducido al 2,8%, y la cotización del dólar estabilizado en torno a los $1.900.000. En 1987 pone en circulación una nueva moneda nacional el boliviano, que equivale a un millón de pesos, con un tipo de cambio flexible con relación al dólar. Su tercer año de gobierno se constituye en el primero de la década con crecimiento positivo, en torno al 2,5%. En cuanto a la deuda, elevada a los US$4.000 millones, con un servicio equivalente al 130% del PIB, logra tener acceso a nuevos créditos de contingencia, a exoneraciones temporales del pago de intereses y a condenaciones parciales de amortizaciones, a cambio de mantener las políticas de ajuste. Consigue rescatar el 50% de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras pagando sólo el 11% de su valor nominal. Al final de su mandato, ofrece un balance positivo de la NPE en los aspectos macroeconómicos: crecimiento del PIB en un 3%, el déficit público recortado a la mitad y situado en el 5,4%, un superávit comercial de 180 millones de dólares, el tipo de cambio oscilando en torno a los 2,5 bolivianos por dólar, y, el logro más espectacular, la inflación interanual por debajo del 20%, siendo su índice del 16% para el conjunto de 1989. Esos resultados los alcanza con un gran costo social, representado en un paro laboral del 25%, que llevan a miles de ciudadanos a engrosar la legión de pobres. (Morales, Septiembre-Octubre 1992).

Estensoro, en acuerdos con el Gobierno de Ronald Reagan, acepta sus asesores militares para las operaciones de destrucción de laboratorios clandestinos de cocaína, y persecución de los jefes narcotraficantes; pero desiste en aplicar una política antidroga integral, tal como deseaba Washington, pues arruinaria la única fuente de ingresos de decenas de
miles de bolivianos que viven del cultivo de esta planta, además, fuente esencial de la dieta tradicional de los indígenas. Estensoro concluye su mandato entregando su banda presidencial a Jaime Paz Zamora.


Económicamente hereda de Estensoro una situación en trance de estabilización, fundada en las políticas de ajuste a las que Zamora les da continuidad, conforme a los cánones del FMI. Su gestión alcanza un crecimiento medio del PIB del 3,3%, una tasa de inflación del 12%, una deuda externa de US$3.500 millones de dólares, la balanza comercial con superávit y las reservas de divisas incrementadas. Esas variables se resienten al finalizar el mandato presidencial, acompañadas de la agudización de los índices de pobreza, y la resistencia de la COB

...que salieron al paso de la congelación de los salarios y los amagos de privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Corinbol) con las acostumbradas huelgas y movilizaciones, llevando a Paz Zamora a declarar, en noviembre de 1989, el estado de sitio, que, entre otras actuaciones, amparó el arresto y la deportación de 600 sindicalistas” (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona., 2003).

Tuvo entre sus propósitos la privatización de las seis empresas públicas que consideraba “estratégicas”: 1. YPFB, 2. La telefónica ENTEL, 3. La eléctrica ENDE, 4. Los ferrocarriles ENFE, 5. La siderúrgica ENAF y 5. La aerolínea LAB. En lo que respecta a YPF, Zamora promulga en el mes de noviembre de 1990, la Ley de Hidrocarburos N° 1194, que otorga mejores condiciones a los inversionistas privados extranjeros, y relega a YPF del papel central que tenía en el sector. Reza el artículo cuarto de la ley citada:
Artículo 4°.- declárase de necesidad nacional la actividad de las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que en relación contractual con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, bajo alguna de las modalidades previstas en la presente Ley, exploren, y/o exploten, refinen e industrialicen hidrocarburos y/o instalen plantas industriales de procesamiento y transformación de hidrocarburos, sin mayores límites que los establecidos por la Constitución y las leyes vigentes al momento de promulgarse la presente ley.

También considera la ley un nuevo modelo de contrato petrolero, el Contrato de Asociación. Un tipo de contrato que establece, que la empresa estatal realiza de forma conjunta con las privadas las fases de exploración y/o explotación de la industria de hidrocarburos; o que una vez declarado comercial un descubrimiento, podrá ejercer su opción para asociarse. En este último caso, la estatal reembolsa al asociado lo pertinente a los costos de exploración, efectuados por el contratista o asociado. En cuanto a la regalía, se crea la llamada “Regalía Nacional Compensatoria equivalente a 1% del valor de la producción bruta pagadera en 2/3 al departamento de Beni y 1/3 a Pando, por considerarse departamentos en vías de desarrollo, conforme a lo dispuesto en la Ley 981, de 7 de marzo de 1988. Asimismo, se establece un Impuesto a las Utilidades de 40% sobre la utilidad neta resultante de la aplicación de los Contratos de Operación o Asociación” (Fundación Jubileo, 2009, pág. 16).

Zamora mantiene el plan de lucha contra el narcotráfico lanzado por la administración anterior, erradica algunas plantaciones de coca y lleva a cabo la sustitución de otras por cultivos alternativos, aunque mantiene la defensa del cultivo tradicional de la planta de coca. Acepta el plan de destrucción de plantaciones presentado por Estados Unidos, que incluye el envío de unidades militares especiales y la entrega a la justicia de Estados Unidos de capos del narcotráfico o con ellos relacionados como la del coronel Luis Arce Gómez, exministro del Interior. Las medidas que tomó no fueron suficientes para dejar de ser considerado por los EE.UU. de sospechoso, y ser denunciado de haber financiado su campaña electoral con dinero del narcotráfico. (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona., 2003).
Su gobierno es considerado como el más neoliberal de todos, que en 1992 aprueba la ley N° 1330 de privatización del sector público cuyo artículo 1° Reza: “Se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del Sector Público a enajenar los activos, bienes, valores y acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales o colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”. (Zamora, 1992) Esta ley es antecesora de la ley de capitalización que va a implementar su sucesor Sánchez de Losada.

Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997) fue precursor de la revolución nacionalista de 1952, y posteriormente Ministro de Planeamiento y Coordinación en el gobierno de Paz Estenssoro, con quien empezó a aplicar el recetario neoliberal; que profundiza durante su administración. En 1995 implementa un paquete de enmiendas a la Constitución de 1967 que contempla, entre otras, la ampliación del tiempo de los mandatos presidencial y del legislativo, de cuatro a cinco años.

Por medio de La Ley de Capitalización (1994), dispone la venta del 50% de los activos empresariales a compradores privados y, el otro 50% los designa para financiar las pensiones de jubilación contratadas con sociedades privadas. La privatización abierta le permite al capital extranjero adquirir la mitad de sus acciones y hacerse cargo de su administración. Son seis las compañías afectadas: 1. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 2. La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), 3. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 4. La Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), 5. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y 6. El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Incluye igualmente a Comibol, que funciona como administradora de licitaciones mineras. Esta Capitalización le proporciona ingresos por valor de US$1.700 millones de dólares, que cataliza el proceso en curso de dolarizar la economía. Su política encuentra la oposición de la Central Obrera Boliviana (COB), que origina la declaración del estado de urgencia, con una huelga general seguida de un paro general el 25 de febrero de 1997. También se encuentra esta política con las protestas de los campesinos cocaleros en 1996, agremiados en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y
dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe, en contra del proyecto de Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que obliga al gobierno a reconsiderar los aspectos expeditivos de su plan antidroga.

En lo concerniente al sector de los hidrocarburos, Lozada se propone el gradual desmembramiento de YPF, que inicia con la aprobación el 30 de abril de 1996, de la Ley de Hidrocarburos N° 1689. La ley elimina los Contratos de Operación y de Asociación, y establece los Contratos de Riesgo Compartido, con una vigencia de 40 años. Este contrato no constituye una sociedad ni establece personalidad jurídica, pues los derechos y/u obligaciones del riesgo compartido se rigen por lo acordado en el contrato. La ley además, declara libres las actividades denominadas de “aguas abajo”: transporte, refinación comercialización, exportación e industrialización de hidrocarburos, y permite a cualquier persona realizar esas actividades; con la sola condición de que se registren en la superintendencia de Hidrocarburos. En el orden tributario, hace una diferenciación entre hidrocarburos nuevos y existentes. Los hidrocarburos nuevos son los encontrados a partir de la promulgación de la ley, y quedan sujetos al pago del 18% de Regalía sobre el valor de la producción. Los hidrocarburos existentes son aquellos que se encuentran en producción y están sujetos, además del 18% citado precedentemente, a una Participación Nacional de 19%, y una Regalía Nacional Complementaria de 13% Se totaliza un pago de 50% sobre el valor de la Producción. La ley excluye a YPF de las fases de “aguas arriba”: exploración, explotación y comercialización, al establecer la modalidad de contratos de riesgo compartido y facilitar la concesión administrativa al sector privado. (Fundación Jubileo. 2009). El proceso se oficializa el 5 de diciembre de 1996, cuando se privatizó la estatal al amparo de la Ley de Capitalización No. 1544, de 21 de marzo de 1994, so pretexto de que era una empresa ineficiente y corrupta. Bajo este contexto,

...el 5 de diciembre de 1996, el consorcio estadounidense-británico Enron-Shell se adjudicó la Unidad Transportadora Boliviana de Hidrocarburos, en 263,5 millones de dólares, mientras que la Unidad de Exploración y Producción Andina SAM fue transferida al consorcio YPF S.A. Pérez Companc-Plunpetrol (Argentina), en 264,8 millones de dólares. Por su parte, la Unidad de Exploración y Explotación Chaco SAM quedó en poder del consorcio Amoco Bolivia Petroleum Co. (EEUU), por 306,7 millones
de dólares. La suma total del proceso de capitalización de YPFB alcanzó a 835 millones de dólares, aproximadamente... Como resultado de este proceso, YPFB se convirtió en una empresa residual, sin patrimonio, con muy pocos campos para operar” (Fundación Jubileo. 2009: 18).

El proceso culmina el 4 de agosto de 1997 cuando promulga el D.S. 24806, por medio del transfiere la propiedad estatal de las reservas de gas y petróleo a varias empresas transnacionales: Repsol (Andina), Amoco (Chaco) y Enron-Shell (Transredes). En 1993 firma el primer contrato de venta de gas a Brasil, rubricado con otro más importante en 1994, contratos que incluían a la empresa norteamericana ENRON.

La distribución de la propiedad de las reservas de gas se puede apreciar en la siguiente gráfica.

**Gráfica N°15.** Gas Boliviano: distribución propiedad

![Gráfica de distribución de propiedad de gas](image)

Fuente, con base en (Kozolj, 2004)

En este su último mandato, Banzer enarbola un discurso más que populista, demagógico. Proclama la creación de condiciones para imponer la justicia social en el país, sin acompañarlo de algún programa concreto que lo diferencie del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. Su gestión se centra en la erradicación de las plantaciones de coca a través del denominado Plan Dignidad, con apoyo de Estados Unidos; que ocasiona grandes movilizaciones, bloqueos de rutas, marchas, lideradas por el diputado Evo Morales. Esas manifestaciones se unen a la oleada de protestas sociales contra la privatización de los servicios públicos, en la llamada Guerra del Agua, que lo obliga en el año 2000 a decretar el Estado de sitio con el objetivo de detenerlas.

La situación se enmarca en una situación económica que muestra un PIB en caída del 4,7% registrado en 1998 al 2,5% en 1999, y a un anémico 1% en los años siguientes de su gobierno. No detiene la pobreza extrema, ilustrada en un producto interno per cápita boliviano por debajo de los 1,000 dólares anuales. La situación social estalla el 8 de abril de 2000, desafiando las medidas de excepción, con el asalto de cuarteles que causa la muerte a tres militares, y los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad que producen varios muertos adicionales. Banzer se ve obligado a echar atrás el proyecto de privatización del agua, cuyo carácter público y gratuidad defienden los actores sociales de la región de Cochabamba, epicentro de la acción. La protesta que alcanza el nivel nacional, se reactiva por las nuevas alzas en los precios de los productos, que lo obliga a transigir en la abrogación de la Ley de Tierras y en el retiro del nuevo impuesto sobre el agua.

Su gestión petrolera es la continuación de su antecesor. Entre 1998 y 1999 privatiza las refinerías Gualberto Villarroel, ubicada en el departamento de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, por un monto de US$102 millones. A su vez el consorcio Oil Tankin se hace a la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB), por US$12 millones, complejo que tenía a su cargo toda la infraestructura de almacenaje y transporte de derivados de hidrocarburos. De esa manera culmina la capitalización de los principales negocios de YPFB, que se ve reducida a la supervisión y suscripción de contratos, agregación de volúmenes de gas natural para la exportación, fiscalización de las actividades de exploración y explotación, y a la certificación de la
producción fiscalizada, sujeta al pago de regalías y participaciones. (Fundación Jubileo, 2009). Banzer igualmente firma con el Presidente Cardozo del Brasil, un acuerdo económico de 13 puntos que significa "más gas a menor precio", al lograr Brasil una rebaja del precio del gas en un 10%, a partir del 2003, a cambio de la demanda de 10 millones de pies cúbicos diarios adicionales a los 30 millones contratados. Por el conjunto de acuerdos firmados, "Petrobras monopolizó la industria energética integrada del gas en el país y el mercado brasileño. Es decir, Petrobras, produce gas, lo transporta, lo comercializa y lo compra ella misma en la frontera, sin ninguna intervención del Estado" (García., 2002, págs. 214-215).

Señala Enrique Mariaca que, "en el período 1993 - 2001 se aplicó la "capitalización y privatización" de YPFB. Con este proceso se mató la "gallina de los huevos de oro" y entró en crisis la economía nacional. El considerable excedente económico de 410 millones de dólares al año generado por la empresa estatal, fue transferido a las transnacionales petroleras" (Mariaca, 2002).


4.3 COLOMBIA: 1970-2002

Ocho presidentes rigen a Colombia en los treinta años que van de 1970-2010, que da la sensación de la estabilidad del régimen político, de un país gobernado desde el siglo XIX, bajo el denominado Estado de Sitio constitucionalizado en la carta de 1886, y que significa un régimen de excepción. Es el único país de la región que se ha mantenido en un crónico conflicto armado, con centenares de miles de muertos, prolongado hasta la primera década del siglo XXI. Un país condenado a un cómodo impasse, es decir, a un sistema de guerra, que según Nazih Richani, se perpetúa por obra y gracia de los militares, que escogen para su accionar una estrategia de contención y no una de eliminación
de la guerrilla, que lleva a la dilatación del conflicto. (Nazih, 2003). Un conflicto que significa para el país ser considerado, junto a Sudán, como el país con mayor número de desplazados; entre los años 2002-2008 alcanzó la cifra de más de dos millones de personas, siendo los más afectados los opositores al régimen, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y los niños.


Corresponde a Misael Pastrana Borrero, un periodo que se caracteriza por la internacionalización y liberación de la economía, la crisis petrolera de los setenta, y el llamado agotamiento del proceso de sustitución de importaciones. El país sólo ha desarrollado la industria de bienes de consumo pero no de bienes de capital, por demás una industria protegida, no competitiva y dependiente interna y externamente.
Externamente, de los bienes de capital producidos en Norteamérica, e internamente del sector agrario en cabeza del café, que genera las divisas que hacen posible su parque industrial. Entonces, la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) es el poder económico que sustenta la dinámica del poder político del país. Pastrana da inicio al desarrollo de la política de Seguridad Nacional, que convierte en una estrategia global; y la militarización de la sociedad en manos de las fuerzas militares, que son el tercer poder junto a los partidos tradicionales. Para mantener la neutralidad ante el bipartidismo, se nombra en la Registraduría del Estado Civil a un Oficial en retiro: Gerardo Ayerbe Chaux, quien asume la dirección de esta entidad, para ejercer el control del proceso electoral de 1974. En 1972 se le entrega la dirección del Resguardo de Aduanas, a un oficial del ejército en servicio activo, al igual que la dirección general de Prisiones, una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. “... puede indicarse que los Militares se estaban preparando, académica e intelectualmente, para asumir las riendas de la administración pública y del poder político, si el proceso de traspaso del poder, en el último período presidencial del Frente Nacional, no resultaba pacífico” (Muñoz).

Pastrana implementa el plan de desarrollo denominado: Las Cuatro Estrategias, que tiene como uno de sus grandes objetivos elevar la generación de empleo, el principal problema social del país. Es su columna vertebral el crecimiento de la construcción, considerado desde entonces el sector líder de la economía; que a su vez se sustenta en el desarrollo del sector financiero con la implantación de la llamada Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). Esta unidad es un medio a través del cual se introduce el sector financiero en el destino de la economía, en perspectiva de la apertura; y para lo que se crean condiciones e incentivos en pro del sector exportador. Es parte de las estrategias, el desarrollo de las exportaciones diferentes al café, la reducción de algunos aranceles excesivos, la actividad agrícola a través de su tecnificación, además de la reglamentación de la inversión extranjera en la banca. También contempla la disminución de los gastos de funcionamiento del Estado, como una medida entre otras, del saneamiento fiscal. El proceso está atado a la solicitud de préstamos en el exterior que aumentan de manera significativa la deuda. (Cuevas, 2002).
Los resultados de su gestión económica indican para 1973 el más alto crecimiento de empleo, con respecto a los últimos 15 años. El PIB durante el cuatrienio es de 7%, en promedio, y, superior a cualquier cuatrienio anterior. Las reservas que en 1970 ascienden a US$125 millones, en 1973 alcanzan los US$515 millones. Las exportaciones crecen desde 1971, con una cifra de US$120.5 millones, en 1973 tiene reintegros por el café, de US$535 millones y de otros productos por US$473 millones. Los gastos de funcionamiento de la administración aumentan un 1% de 1972 a 1973, y su inversión, en contraste, aumenta 30%; al amparo de los Decretos 1272 y 1641, que establecen un estricto control en los gastos de los establecimientos públicos. Respecto a la exportación de productos, se da un cambio notable en los indicadores. Para 1960 el 71.5% corresponde al café, el 17.2% al petróleo y el 11.3% a exportaciones menores, para 1971 los porcentajes, sobre éstos ítems, varían así: 55% café, 7.0% petróleo y 37.9% exportaciones menores, es decir que, la diversificación de las exportaciones que se venía gestando desde el cuatrienio anterior, se consolida en el periodo de Pastrana. La inflación se acelera hasta alcanzar niveles del 20%. (Perry., 1989).

Respecto a la política petrolera, 1970 fue para el país el año de mayor producción en lo que va de sesenta años de historia. Alcanza los 218 mil barriles diarios, de los cuales se refinan en el país 134.300 b/d y se exportan 82.900 b/d. A partir de ese año empieza su declinación. (Ayala., 1978). La empresa Ecopetrol adopta en ese año su primer estatuto orgánico, ratificando su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado. La estatal es considerada una sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos. La empresa se amplía al obtener las empresas petroleras Colpet y Sagog, con la reversión anticipada del 50% de sus derechos en las concesiones entonces vigentes; también adquiere el 50% de la Gulf en los yacimientos de Orito en el Putumayo, y de las instalaciones del oleoducto a Tumaco en Nariño. En lo financiero, el gobierno de Pastrana modifica el dólar petrolero, para acabar con la financiación de la gasolina por parte del Estado; eso origina el aumento del precio de los combustibles con consecuencias nefastas para el grueso de la población, por el encarecimiento de los bienes de consumo. En 1971
se lleva a cabo una más de las huelgas obreras originada en razones convencionales, que termina en el asesinato de uno de sus líderes y la aplicación de consejos verbales de guerra a la dirigencia del sindicato. (Vega, 2009). En lo referente a la contratación, se dan los primeros pasos en la implementación del sistema de asociación en materia de explotaciones petroleras, para reemplazar el sistema de concesiones. Política asociativa que se desarrolla a plenitud en el siguiente gobierno de Alfonso López Michelsen.


López propone el plan: Para Cerrar la Brecha, entre el sector rural y el urbano, con el objetivo fundamental de frenar la tasa de inflación, y evitar el deterioro de los salarios. En el marco del plan implementa el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y el Plan Nacional de Alimentación y nutrición (PAN), con el que daba importancia a la producción de la seguridad alimentaria del país. En su filosofía, el plan se enmarca en el modelo neoliberal de desarrollo (MND) en la versión de Ronald I. McKinnon (Dinero y capital en el desarrollo económico.1974), “menos conocido que la versión monetarista tradicional de la “escuela de Chicago”. McKinnon parte de la reflexión acerca de las economías subdesarrolladas, asociadas con la fragmentación de las economías, la propensión al autoabastecimiento, y la represión financiera, ...“sugiriendo un programa de liberación por etapas, con base en un sistema financiero monetario como mecanismo clave para alcanzar ahorros hacia la inversión” (Florez, 2002, pág. 105-116). La propuesta reviste en el país el denominado proceso: “gota a gota” de implementación del modelo, que evite entre otros, la necesidad de un golpe de facto para su ejecución.

López se ve beneficiado de una bonanza cafetera, cuyos recursos alimentan al sector financiero del país para consolidarse como el sector
dominante. Pero igualmente pone a la inflación fuera de control, al desbordar los incrementos salariales, lo que originó en 1977 un gran paro nacional.

Bogotá vivió ese 14 una de las jornadas más críticas con decenas de miles de personas en las calles manifestándose...Las cifras oficiales hablan de 18 a 33 muertos en las refriegas y en las verdaderas batallas campales con las tropas en la Bogotá, víctimas de las balas oficiales...Las investigaciones sobre las decenas de muertes que dejó el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, no condujeron a nada y los crímenes siguen en la impunidad (Oficina de Comunicaciones Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Alcaldía Mayor de Bogotá., 2010).

En conclusión, "la mayoría de la sociedad asumió los costos de una política que no pudo alcanzar sus objetivos" (Flórez. 2002: 120.).

Las cifras económicas de su gestión indican un aumento creciente del PIB que alcanza en 1978 casi un 9%. Las reservas internacionales son igualmente crecientes con cerca de US$2.500 millones, en buena parte generadas por la bonanza cafetera de 1977-1978. La deuda pública se aumenta en US$515 millones. Se presenta un superávit financiero cercano a los US$ 15 mil millones, y una inflación del 18.8%. Un periodo en el cual el país, que era exportador de petróleo a bajos precios, se convierte en importador a precios altos por un valor cercano a los US$600 millones, similar al aumento del endeudamiento externo. (Ramírez., 2002). Esa situación motiva al gobierno de López a proponer un cambio en la política petrolera del país, que incluye el inicio de la desestatización de Ecopetrol, su empresa emblemática.

Hasta 1969 la producción petrolera del país está a cargo de la Ecopetrol y las multinacionales a través de los Contratos de Concesión. Con la Ley 20 del mismo año, y en el marco del acuerdo 24 del Pacto Andino en Cartagena, se determina que la producción de crudos y gases se haga exclusivamente a través de los denominados Contratos de Asociación, firmados entre los capitales privados y el Estado a través de Ecopetrol. Esos contratos son asimilables a un Contrato de riesgo, con regalías totales del 20% para la nación, pagos 10% por parte de la asociada y 10% por parte de Ecopetrol; y la participación igualitaria: 50% y 50% en la producción y distribución. Esa disposición queda ratificada
y generalizada con el Decreto 2310 de 1974 expedido por el presidente López (Ecopetrol). Ese cambio en la política de contratación, se justifica oficialmente en la incapacidad exploratoria y productora de Ecopetrol, que representa el inicio de la privatización de la empresa, pues con los nuevos contratos la estatal comparte con las multinacionales la explotación de los campos descubiertos, y deja su administración en manos de las socias privadas. El Contrato Asociado, responde igualmente, a los requerimientos prestamistas del sistema financiero ligado a las multinacionales, urgido de encontrar acreedores para sus petrodólares acumulados. Por ese medio, Colombia carente de capital, y que debe ir 50% y 50% en las inversiones asociadas, acude obligatoriamente a la banca internacional; de paso profundiza su endeudamiento.

En 1973, ante el cambio de precios del petróleo a nivel internacional, el país se mantiene a la expectativa, pues cuenta con una producción suficiente para atender su demanda interna. Ecopetrol recibe de Colpet el 99% de las concesiones y campos del Catatumbo y el 100% de la South American Gulf Oil Company (Texaco), que incluye el oleoducto Coveñas, los campos y la refinería en Tibú, los campos de Cucuco y el oleoducto y estaciones de Coveñas, El Retiro, Convención y Bellavista. Este sistema de reversión de las concesiones es la forma como la empresa se expande, pues su acción para ampliarse por cuenta propia, está limitada por el Estado que la considera una empresa proveedora de recursos para el fisco, y medio para satisfacer sus demandas requeridas para el desarrollo de infraestructura vial, educativa y social de las regiones y municipios donde tiene presencia la empresa. Compra el 50% de los derechos de la Gulf en Orito Putumayo, que contribuye para que Ecopetrol se haga en 1974 al 51% de las reservas probadas del país, y eleva su producción al 44%. En el área de la refinación, compra a Intercol la refinería de Cartagena, elevando su capacidad refinadora al 95%. En la distribución se mantiene el monopolio de las multinacionales, aunque se da inicio a la constitución de los Terminales de Producto de Petróleo (Terpeles) creadas con participación de algunos los Departamentos: Santander, Caldas, Quindío, Antioquia y Risaralda. (Almeyda., 1975). En relación con los precios, el país se mantiene al margen del marco internacional, lo que desalienta su actividad exploratoria. En mayo de 1976 el gobierno para atraer al capital extranjero, expide la resolución N°
050, que establece el pago a precio internacional del petróleo puesto en las refinerías, eso activa la actividad exploratoria privada que pasa de 2 pozos en 1976 a 30 en 1977 y 50 en 1978. En lo laboral, en 1977 se da una nueva huelga por parte de los trabajadores, esta vez a raíz del nuevo sistema de contratación asociada, que los trabajadores consideran el inicio del desmantelamiento de la empresa y la cesión de parte de sus activos a la multinacionales. (Vega. 2009) el conflicto declarado ilegal, origina la expulsión de 250 trabajadores y el encarcelamiento de 5 de sus dirigentes.

En las elecciones de 1978 es elegido presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982), quien propone el llamado Plan de Integración Nacional (PIN). El plan combina dos estrategias para el desarrollo del país: 1. El otorgamiento de mayor autonomía administrativa y económica a los municipios y departamentos y, 2. La construcción de obras de infraestructura. Eso implica el aumento en los servicios públicos y del crédito externo, y la liberalización de importaciones y la disminución de aranceles. Entre 1980 y 1982 la economía colombiana experimenta un deterioro acelerado, y los índices de desempleo comienzan a aumentar; al igual que incremento en el accionar de las fuerzas guerrilleras, que junto a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (El ELN y el EPL (Ejército Popular de Liberación), cuenta con la presencia de un nuevo grupo insurgente: El M-19. Este grupo se toma la embajada de la República Dominicana en Bogotá, y obliga la negociación del gobierno, mediada por la Habana. Igualmente se da la aparición de grupos armados de derecha como el denominado Muerte a los Secuestradores (MAS), y el crecimiento de las actividades del narcotráfico y el contrabando. Por la aplicación del Estatuto de Seguridad este gobierno se conoce como uno de los más represivos de la historia del país con cientos de muertos y desaparecidos en su haber. Turbay afianza la alianza con Estados Unidos, pasando el país de colaborador con el gobierno de Carter, a la alianza incondicional a partir del ascenso de Ronald Reagan al poder. “La alianza incondicional entre estos dos gobiernos se evidenciaría en acciones como el envío de tropas colombianas al Sinaí y la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba –las cuales recièn habían sido restablecidas por su antecesor” (González R. , 2009).
En el Plan se da relevancia al sector minero y energético, en un momento en que el país entra en una situación energética difícil, por el racionamiento eléctrico de 1977, y la suspensión de las exportaciones de petróleo. Una situación cuestionable en un país poseedor recursos mineros y energéticos. El país exportador de petróleo pasa a convertirse en importador neto de crudos a altos precios, por efecto del choque petrolero de 1979. Eso representa la disminución de ingresos para el Estado, y el desangre financiero de la economía a través del endeudamiento, pues la situación hace obligatorio el aseguramiento de la oferta de energía. Colombia importa crudos especialmente de Venezuela Perú, y las Antillas Holandesas entre 20 mil y 30 mil barriles diarios, y entre un 30%, y 40,4% de gasolina fuel oil; por un valor calculado entre 1975-1985 de US$ 5 mil millones.

Era de esperar que la condición de importador de petróleo del país motivara un esfuerzo mayor de búsqueda de crudo, pero ello no ocurrió; en el período 1977-1983, la inversión de Ecopetrol en exploración decaía. En 1977, esta inversión representaba el 50% de la inversión total en exploración y en 1983, solo el 20%, con el agravante de que el interés de las empresas transnacionales también disminuye al final del período, como consecuencia de los bajos precios internacionales del crudo” (Ecopetrol).

Al reducir el esfuerzo y la disciplina de ahorro doméstico para la financiación de la inversión pública, la administración recurre a un sustancial endeudamiento externo.

En la segunda parte del gobierno, entre 1980 y 1982 se produce el deterioro de gran magnitud en el frente fiscal y de balanza de pagos, como consecuencia de la concentración del gasto en el sector de infraestructura, y el compromiso creciente que para las finanzas estatales representa el pago oportuno del servicio de la deuda. 1982 cierra con un PIB del 3.91%, un déficit fiscal del 7.6% del PIB, y la deuda que pasa de US$6.457 millones en 1980 a US$10.269 millones, para promover la acción del gasto público en el sector de infraestructura y la inversión en los nuevos proyectos mineros.

Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), da inicio a la llamada apertura democrática con un cambio de orientación en el contenido y el tratamiento de la crisis política respecto a la administración de Turbay.
Belisario, a pesar del capital político que ostenta, da continuidad a la coalición heredada del Frente Nacional. Considera que el problema de la violencia puede tener un tratamiento más político que represivo, por eso amnistía a las guerrillas, y le da vía libre a la libertad de la dirigencia del M-19 de acuerdo a la ley correspondiente, con el propósito de iniciar un proceso de paz. Esa postura tensiona la relación con los militares que no aceptan la liberación de la dirigencia del M-19, culpando de esas hechos el crecimiento subversivo subsiguiente.

... la institución militar buscó sabotear el proceso de paz, en una lucha sorda pero radical. Atentados a guerrillas en tregua y diálogo con el Gobierno, forcejeo por hacer uso de la autonomía en el manejo del orden público, declaraciones agresivas que provocaron el retiro de un General Ministro de Defensa y ruptura por el M-19 de las negociaciones con el Gobierno a mediados del año 85, fueron parte de una confrontación entre las dos instituciones estatales que culminó, finalmente, con la batalla del Palacio de Justicia en noviembre de ese año”. (Arana, 2004).

Suceso con el cual se entierra el proceso y la figura misma del mandatario. El asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por parte del narcotráfico indica que el narcotrófico entra a formar parte de la violencia e inestabilidad política del régimen. El Narcotráfico será una fuerza económica y social procreada en la década anterior, para convertirse en uno de los motores de la antigua dinámica de cambio de la sociedad, que contrapone la inestabilidad propia de la transición con la permanencia de los sistemas económico y político dominantes.

En lo que respecta a la gestión económica, en su plan de gobierno “Cambio con Equidad”, Belisario se propone implantar el plan de vivienda sin cuota inicial, dar estímulos a la inversión extranjera e intervenir el sistema financiero, nacionalizando varios bancos. Betancur no disminuye el gasto público como herramienta para reactivar la economía, sino que aumenta el subsidio a las exportaciones a través del Certificado de Registro Tributario (CERT).(Castro., 2002.). A mediados de 1984 cambia de estrategia para corregir el desequilibrio externo mantiene el control a las importaciones y los subsidios a las exportaciones, pero disminuye el déficit fiscal. Estas políticas responden a presiones del FMI y el BM, a los que el Gobierno solicita supervisión y asesoría, para plegarse a un programa de ajuste estructural que incluye
una fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, la austeridad presupuestaria, la limitación de las importaciones y una reforma fiscal. Esas medidas empujan las exportaciones, y permiten la obtención en 1985 de un crédito de US$1.000 millones para proyectos de desarrollo, por parte de la Banca Internacional. A partir de 1984 el PIB tiene tasas de crecimiento anual superiores al 3%, junto a un paro oficialmente reconocido del 15%, y una inflación en torno al 20%. (Cidob. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona, 2011). Al final de su gobierno la deuda alcanza los US$ 12.350 millones, mayor a las reservas de US$1.264 millones, producto de la brusca caída de los ingresos por las exportaciones cafeteras. El déficit del erario público aumenta sensiblemente y se hace más complicado abonar el servicio de la deuda externa. La situación se acompaña de un aumento en los niveles de desempleo y subempleo. Las fuerzas políticas beneficiadas por la protección y el sindicalismo público le hacen una fuerte oposición a la apertura, que todavía no pasaba de su fase inicial.

En lo correspondiente al sector petrolero, en 1983 se descubren nuevas reservas en Cravo Norte, en los Llanos Orientales. El pozo Caño Limón-2 confirma inicialmente reservas por 36,6 millones de barriles. En ese año, el fuel oil representa el 86,2% del valor de las exportaciones de Ecopetrol, con un precio de US$24,17 el barril y un crecimiento de 1,3% con respecto al año anterior. El volumen exportado crece un 27,6% y su valor un 25,6%. En consecuencia, cae el déficit comercial de Ecopetrol en un 41,2%, para un total de US$185,4 millones. (Ecopetrol). Con los nuevos descubrimientos se da inicio a una bonanza petrolera en el país, que hereda su sucesor Virgilio Barco.

Virgilio Barco (1986-1990), es considerado como un Presidente con poca capacidad en el manejo político. Con el fin de institucionalizar los conflictos y acabar con su desborde violento ensaya la concertación, la diplomacia, y la represión con visos de guerra, es decir, casi todo, con excepción de la movilización política. Finalmente confluye su gobierno, en la mayor indefinición política de la etapa contemporánea de la historia política del país. Su proyecto gobiernista está representado por un programa tecnocrático: Estrategia de Desarrollo Social (Cuellar, 2002.), que consiste en un plan de inversiones para desarrollar las zonas marginadas ocupadas por grupos guerrilleros, con el objetivo de quitarle
la base social a la subversión: "quitarle el agua al pez". Su búsqueda de medidas alternativas para solucionar la crisis, pone en guardia a sectores dominantes temerosos de perder sus privilegios. Mientras, la criminalidad política arrecia contra dirigentes populares, acompañada de diversas violencias paralelas, en buena parte agenciadas por el narcotráfico. Este nuevo fenómeno pone a la luz del día la impunidad, dado el desamparo de la administración de justicia. En el listado de asesinatos se cuenta el más firme aspirante a la Presidencia de la República, Senador Luis Carlos Galán, y de dos candidatos presidenciales de la izquierda: Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica (UP) y Carlos Pizarro del M-19; un Procurador General de la Nación y diversas masacres de campesinos, líderes populares y miles de militantes de la UP, contando a su presidente el ex candidato presidencial Jaime Pardo Leal. La política de Barco frena el rápido debilitamiento estatal de los años anteriores, y pone un pare al proceso de descomposición institucional y moral de las Fuerzas Armadas. Éstas, en su compenetración con la ideología de la Seguridad Nacional y el anticommunismo norteamericano, despliegan el uso de la tortura, el asesinato, y espionaje policial de la vida privada; y se alían en su accionar con los grupos paramilitares y el narcotráfico. Barco aumenta el presupuesto de Defensa, iniciado durante la administración Turbay, y delimita los frentes de batalla con la identificación de los enemigos, para adelantar negociaciones de paz con el M-19, y pone sobre la mesa la discusión del significado del derecho internacional de los conflictos armados en el país.

La inflación marca en 1990 un 29%, y el déficit del sector público, 1.78% (Cuellar, 2002.). Con Barco se da comienzo a la racionalización del comercio exterior colombiano, que se constituye en el primer paso hacia las reformas económicas que llevará a cabo el gobierno de Cesar Gaviria. (Bustos., 2005).

En cuanto la Política Petrolera, cabe recordar que Barco es descendiente del General Virgilio Barco, beneficiado a principios del siglo XX por el gobierno del general Reyes con la adjudicación de una concesión petrolera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que termina vendiendo por cuenta propia e ilegal a la Colpet. (Villegas, 1975). Esta vez el Barco nieto, cuenta con la fortuna del inicio del boom petrolero, a raíz de la producción de los campos ubicados en los Llanos Orientales, que se convierten en la región petrolera promisoria del país. Ese Boom le permite al país volver a ser exportador durante todo el período (Ver cuadro No 8). En 1986, Ecopetrol vuelve registrar utilidades y tener un superávit comercial. La puesta en marcha del oleoducto Caño Limón-Coveñas le permite exportar la creciente producción del contrato de asociación Cravo Norte, descubierto en 1983. El país abandona su condición de importador de crudo, pero no de importador de gasolina. La producción nacional de petróleo crece más del 70% en un año, la participación de la empresa estatal, sumando la directa y la que le correspondía en los contratos de asociación, es de casi 56%. Las exportaciones de crudo de Ecopetrol superan los 100 mil barriles día. El esfuerzo financiero crece con los requerimientos de la perforación de desarrollo y la construcción de facilidades en el terminal marítimo de Coveñas, en el marco del contrato Cravo Norte, que requiere un aporte de US$149,9 millones por parte de Ecopetrol. Con el objetivo de garantizar el autoabastecimiento hasta el año 2000, se constituye un Fondo Nacional de Exploración, al que se le destina el 10% de las exportaciones de crudo y derivados para financiar así el 90% del Plan Quinquenal de Exploración 1987-1991; que busca quintuplicar la actividad de la compañía. El financiamiento de las inversiones Ecopetrol las hace con recursos de caja y de deuda, que crece en un 55%; al utilizar US$200 millones de un préstamo denominado Jumbo, obtenido del Exim Bank de Japón, del BIRF y de AKA de Alemania.
Con Barco también se da inicio a la formulación de nuevos planes dentro de los cuales se destaca el del sector del gas, a raíz de las reservas de gas natural descubiertas a principios de la década de los años setenta, en la Guajira; y del que apenas se había desarrollado en un 15%. Se inicia la construcción de un gasoducto central que atraviesa el país desde el Caribe hasta la capital Bogotá. Así se superan varios problemas, pues se sustituye la electricidad por gas natural en el consumo residencial, y de combustibles líquidos en el centro del país, que baja la factura de gasolina importada. Para su efecto se crea en 1986 una Sociedad Promotora. También, se satisfacen objetivos sociales con el plan de gas al llegar a los hogares, y construir gasoductos y redes domiciliarias; igualmente, se sientan las bases para incrementar la producción de gas propano y se decide darles impulso a iniciativas para usar gas natural en el sistema de transporte público. Se sientan las bases del plan de masificación de gas de la década siguiente.

Los impuestos a los combustibles recaudados por Ecopetrol representan más del 40% de las ventas de productos blancos. En esta coyuntura exportadora, “gracias a los nuevos recursos provenientes de las exportaciones de crudo, Ecopetrol profundizó su papel de ente paraestatal” (Ecopetrol), acompañado de un nuevo gran descubrimiento en 1989, por parte de la British Petroleum en Cusiana, (Casanare), un yacimiento gigante rico en gas.

Unido como candidato presidencial por el hijo del candidato del Nuevo Liberalismo asesinado: Luis Carlos Galán, en 1990 asume la presidencia de Colombia César Gaviria (1990-1994). Un economista oriundo de la zona cafetera, que ha entrado en crisis a raíz de la ruptura del pacto cafetero (1989), y que transforma la entonces pujante zona cafetera en escenario de acción de los nuevos actores de la economía emergente del narcotráfico, como Pablo Escobar y Carlos Ledher, entre otros; con todas sus implicancias, que incluye la violencia paramilitar.

El objetivo de su administración es poner a tono al país con la política de apertura económica, y demás ingredientes del neoliberalismo dominante en la región. Para su efecto realiza una reforma Constitucional, con base en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobada al finalizar la anterior administración de Barco.
En febrero de 1991, al iniciar su trabajo la Asamblea, no existían más proyectos para discutir. Vinieron luego, improvisadamente. Sobre esta base comenzó un atropellado proceso de confrontación institucional de fuerzas, rodeada por múltiples y caóticas violencias cuya matriz principal es la de carácter político (Buitrago.).

Para sorpresa general, el AD M-19., legalizado y en cabeza de Antonio Navarro se puso electoralmente en igualdad de condiciones con los dos partidos tradicionalistas, Frentenacionalistas mayoritarios, representados por Álvaro Gómez Hurtado conservador y Horacio Serpa Liberal. El 4 de julio de 1991 se proclama la Nueva constitución, que reemplaza a la emitida en 1886. Gaviria “la presenta como el instrumento legal llamado a transformar las estructuras políticas y las normas de convivencia del país en un sentido modernizador y democrático”. (CIDOB. Centro de estudios y documentación Internacionales de Barcelona., 2011).

Su gestión es bautizada por el mismo Gaviria como el Revolcón, fundado en los cambios constitucionales de 1991. Esos cambios reconocen la democracia participativa, a través de diversos mecanismos de participación ciudadana. Institucionaliza los cargos de Vicepresidente de la República, Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Inserta la posibilidad del ministerio civil de la cartera de defensa, y la preeminencia de los Derechos Humanos. Afirma el carácter laico del Estado con la posibilidad de nulidad de todos los matrimonios, incluidos los realizados por el rito religioso. Aspectos todos que jalecan dos instituciones centenariamente intocables del país: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, como a las improntas del régimen Frentenacionalista.

Frente al conflicto con la insurgencia, Gaviria declara en 1992 el estado de conmoción interna por tres meses, ante la ofensiva guerrillera lanzada por las Farc y el ELN, a través de la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM). Lleva a cabo las desmovilizaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL), la Corriente de Renovación Socialista del ELN, y el grupo indígena armado: “Quintín Lame”. Mantiene la confrontación abierta con las FARC y el ELN. Frente al Narcotráfico, propone la no extradición de sus jefes, que se venía implementado de hecho desde 1985 en el gobierno de Betancourt, a cambio de su entrega. Los resultados son puestos en juicio público por
la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de máxima seguridad en Envigado Antioquia y construida para ese fin. La fuga evidencia la connivencia de estos jefes con el aparato de la seguridad del Estado. Gaviria responde con las destituciones de algunos de sus colaboradores y la autorización de vuelos de reconocimiento por parte de las Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pablo Escobar es abatido a finales de 1993 en un operativo en donde participaron la DEA y la CIA estadounidenses, junto a la colaboración de los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), una organización de antiguos socios y sicarios del narcotraficante vueltos en su contra. Esta organización posteriormente forma parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una federación de bandas paramilitares con las cuales se mantiene y acrecienta en las siguientes administraciones presidenciales la violencia.

Por lo que respecta a la economía, Gaviria en su discurso de posesión anuncia la transformación de la economía con base en su internacionalización, y de esa manera “sepultar el modelo de desarrollo intervencionista y cepalino e instaurar, en cambio, un modelo abierto, sujeto a la competencia” (Bustos. 2005). En cabeza de su Ministro Rudolf Hommes lleva a cabo la liberación o apertura de los mercados de bienes, trabajo y capitales. En ese orden libera el comercio, reforma el código laboral, interviene la tasa cambiaria, el sector financiero y la inversión extranjera. Reforma instituciones como el Banco de la República y el régimen fiscal, e incluye nuevas reglas del endeudamiento. Modifica las instituciones de salud y seguridad social. En lo administrativo privatiza varias entidades públicas (Hommes., 2002). Respecto a los resultados, su gestión está acompañada por una apreciable inyección de narco dólares en el sistema productivo, particularmente en el sector de la construcción, que vive su propio boom. Se da un empuje en las exportaciones mineras que compensan los ingresos por la caída internacional del precio, y la masiva afluencia de inversiones y divisas extranjeras,

...atraídas por los altos tipos del interés, el cambio sobrevalorado del peso con respecto al dólar y las políticas librecambistas y desreguladoras aplicadas por el Gobierno... Todo ello se tradujo en una tasa media de crecimiento anual del 4% del PIB, con una inflación, eso sí, elevada, en torno al 26%. Además, la deuda externa se mantuvo congelada en algo más de 17.000 millones de dólares gracias al Plan Brady acordado
por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI, al que Colombia se había acogido para refinanciarse (CIDOB. Centro de estudios y documentación Internacionales de Barcelona., 2011).

La situación económica no se compensa en lo social, en donde el país continúa exhibiendo considerables déficits de desarrollo humano; que valida desde entonces el lema: "que a la economía le va bien pero al país le va mal". En este periodo se percibe, "la tensión entre las nuevas instituciones y aquellas, que como la planeación, son herencias del pasado que han sobrevivido gracias a su inserción remozada en la nueva Constitución" (Bustos 2005).

En el sector petrolero la administración desarrolla el Programa para la masificación del gas natural con diferentes acciones, como estimular la exploración para aumentar la oferta, que obliga la construcción de una red troncal de gasoductos y de una empresa para la gestión del transporte; y la conformación de un mercado con los sectores industrial, comercial y residencial a cargo de Ecopetrol. Se crea la figura del BOMT (Build Manage Operate Transfer), una especie de concesión a través de la cual se financia el proyecto que se paga durante el período de operación, a través de las tarifas del servicio, que resultan altas porque incluyen la remuneración de la inversión y su financiamiento. En 1993 se da un nuevo descubrimiento: Cupiagua que junto a Caño Limón y Cusiana, aumentan las reservas del país y dan lugar para que desde 1986 se vuelva nuevamente exportador (Ver cuadro N° 8). Este crecimiento trae consigo la preocupación por la enfermedad holandesa, (Thorp., 1998) para la que se recomienda la creación de un Fondo de Estabilización. El flujo de capitales del sector petrolero

...financió el déficit en cuenta corriente y el diferencial de tasas estimuló la repatriación de capitales. El aparato productivo se modernizó gracias al abaratamiento de la importación de bienes de capital, necesarios para enfrentar la competencia creada por la apertura. Para algunos, el flujo de capitales que atrae el desarrollo de Cusiana-Cupiagua hizo viable la apertura. (Urrutia., 2010).

En competencia con el candidato conservador Andrés Pastrana, Ernesto Samper del partido liberal, resulta elegido para gobernar a Colombia durante el cuatrienio: 1994-1998. Su gabinete es una coalición
con el denominado Partido Social Conservador (el PSC), que rememora el rancio Frente Nacional. Acusado por Pastrana, desde los mismos resultados electorales, de recibir dineros del narcotráfico para su campaña, su administración queda ligada al denominado narco-escándalo que da inició en el Congreso al llamado Proceso 8.000, contra el Presidente. Si bien el Congreso falla a su favor, Samper no pudo evitar dos duros golpes propinados por Estados Unidos: 1. Que priva al Gobierno colombiano del certificado de buena conducta en materia de lucha contra el narcotráfico y 2. Le retira el visado personal de entrada en ese país. La situación se convierte en una crisis política larvada a lo largo de su mandato, que el régimen mantiene en aras de no desmoronar la institucionalidad presidencialista, tan celosamente protegida por el establecimiento.

Su plan de gobierno: El Salto Social, tiene como objetivo la consolidación de las reformas económicas, avanzar en la democratización política, profundizar en la participación ciudadana y en la superación del excluyente régimen político heredado del Frente Nacional. Pero a raíz de la incertidumbre política, asentada desde el inicio mismo de la administración, y la violencia crónica, alimentada desde múltiples frentes, “no logró en cuatro años disminuir los niveles de pobreza y sacar al país del atraso tecnológico y de infraestructura, sino que buena parte de los recursos para programas de inversión fueron desviados a otros fines” (NULLVALUE, 1997.) En su último año del Gobierno se da una crisis de una magnitud como no se sentía desde la gran depresión de los 30. Se da una estampida de capitales y las exportaciones no se recuperan, yendo al tenor de la crisis mundial iniciada en 1997. Cerca de dos millones de personas abandonan el país, el déficit en cuenta corriente alcanza casi un 8% del PIB. El gasto público se duplica como lo venía haciendo desde 1991. Las FARC crecen hasta unos 20 mil hombres, le propina 16 duros golpes a las FF.MM., le aniquila fuerzas de elites y bases militares en el sur del país, y le captura más de 500 prisioneros, que “puso a la nación entera, y no solo al Estado, al borde de un colapso integral: político, diplomático, militar, económico y moral (...) diversos fuentes de EE.UU., señalaron a Colombia como “narcodemocracia, la Casa Blanca promovió el aislamiento internacional del Gobierno.” (Restrepo, 2004., pág. 47).
En lo que respecta a la política petrolera se destaca la transferencia al gobierno del 100% de las utilidades de ECP. Una política común a otras administraciones, y que implica la descapitalización de la empresa para su desarrollo. En 1998 las exportaciones netas de la estatal alcanzan unos US$1.075, aproximadamente un 10% del total de las exportaciones del país, que representan el 15% del presupuesto nacional. La administración efectúa también varias reformas adicionales a la legislación petrolera, buscando mejorar la participación, y teniendo en cuenta los descubrimientos recientes. Samper se propone modificar los términos de la política existente, introduce el llamado factor R, por medio del cual, en el contrato, se efectúa una distribución 50:50 hasta que la multinacional recupere el 100% de los gastos de inversión y de producción incurridos. Punto a partir del cual, y de acuerdo a la producción acumulada, se hace a una distribución de 70:30 a favor de la estatal. La reforma elimina algunos impuestos de la anterior reforma tributaria como el impuesto de guerra, consistente en aportar US$ 1 por barril a favor de las fuerzas Armadas (que había sido propuesto por el ELN para las comunidades); el de la sobretasa, y un reducción del impuesto a las remesas que pasa del 12 al 7% a favor de las multinacionales. También en 1995, el Congreso de la República aprueba la Ley 209 de 1995, que crea el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep) con el fin de ahorrar parte de los excedentes petroleros en cabeza de los receptores de regalías y de Ecopetrol, para utilizarlos cuando los ingresos bajen. El Faep es un sistema de cuentas, a nombre de cada uno de los ahorradores, manejadas en el exterior por el Banco de la República. Un fondo que llega a acumular US$2.200 millones entre 1997 y 2007. (Ecopetrol).

La acérrima oposición de Andrés Pastrana a Samper le rinde frutos electorales, al ser elegido en 1998 para presidir los destinos del país hasta el año 2000. Pastrana pretende la reconstrucción de la legitimidad política en medio de un déficit fiscal que alcanza al 4% del PIB, una pérdida fuerte de las reservas internacionales, de 1.398 millones en 1998; un aumento de la deuda interna que presiona las tasas de interés, un desempleo que alcanzaba el 18%, y una creciente corrupción. En medio de esa situación promulga su plan: Cambio para construir la Paz, que tiene pocas posibilidades de éxito, además de enfrentar limitaciones presupuestales, y ser declarado inexplorible por la Corte Constitucional.
En esas circunstancias la estabilización macroeconómica se convierte en la prioridad del manejo de la política económica y en un prerrequisito para la estrategia del desarrollo, que adicionalmente, opta por centrar el plan en torno a la paz, su hilo conductor.

"La paz involucra también otros temas que hacen parte de lo que yo he llamado la Paz Integral, los cuales conforman una trilogía indisoluble: primero, la negociación propiamente dicha...segundo, el respaldo y acompañamiento internacional obtenido a través de la diplomacia por la paz y su consiguiente apoyo la inversión social en las zonas de conflicto, y tercero, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de la institucionalidad y de la paz" (Pastrana., 2001)

En consecuencia, recién electo se reúne con el comandante de las FARC Manuel Marulanda Vélez para sentar las bases de futuras negociaciones encaminadas a finalizar el conflicto. Mientras, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, dialogan en la ciudad alemana de Maguncia. De ese encuentro emerge un acuerdo para convocar una Convención Nacional, que se rompe a mediados de año, acompañado por una ola de atentados y acciones guerrillera sin precedentes, con cientos de soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Pese a eso, Pastrana a mediados de octubre, inicia conversaciones con las FARC, despejando una vasta zona de 42.130 km² al sur del país, llamada Zona de Distensión de San Vicente del Caguán. Marulanda no acude al encuentro inaugural, en manifestación por la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, agrupadas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de Carlos Castaño. Las AUC habían desencadenado en la víspera, una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, con el fin de sentar al Gobierno en una mesa de negociaciones y obtener iguales beneficios. En medio de una espiral de violencia, en mayo de 1999 se abre una crisis sin precedentes en el Ejército, por la dimisión de 14 generales y coronelos, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz. Se da también un paro nacional, para protestar por la política económica y social del Gobierno, que
...se mostraba incapaz de detener el desempleo que alcanzaba el 20%, y una deuda exterior exorbitante, de 34.000 millones de dólares. “En septiembre de 1999 el peso entró en flotación con respecto al dólar y en diciembre de 1999, la recesión económica, finalmente del 4.4% del PIB, aparecía como la primera desde 1931 en un país que a pesar del permanente estado de violencia había mantenido durante décadas unas tasas de crecimiento bastante estables... junto a la adopción de un plan de contingencia con el FMI al que le solicitó un préstamo de urgencia para reducir el déficit fiscal, equivalente al 6% del PIB, por valor de 2.700 millones de dólares, a sumar a los 4.200 millones ya concedidos por el Banco Mundial y otras organizaciones crediticias” (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona., 2002).

En términos económicos, el período de la administración Pastrana es de estancamiento, que cierra con una fase de recuperación modesta con un crecimiento del PIB del 1.9% anual, ayudado por el aumento de los precios del petróleo (Torres). La situación corresponde al contexto mundial...

...marcado por la crisis financiera asiática y por la cesación de pagos por parte de Rusia en 1998, además de una desaceleración en el crecimiento de las economías más industrializadas. El 2001 fue el primer año de recesión económica mundial después de varios años de rápido crecimiento. Este fenómeno se acentuó aún más con los acontecimientos y consecuencias del 11 de Septiembre (Velasco, 2003).

Especial atención tiene el denominado Plan Colombia que Pastrana suscribe con los Estados Unidos. Un Plan diseñado por los intereses de los Estados Unidos con el objetivo de la lucha contra las drogas y defender los Derechos humanos en el marco de esa lucha. El plan original tiene un presupuesto de US$7,5 mil millones de los cuales: un 51% se dedica al desarrollo institucional y social, un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% para revitalización social y económica y un 0,8% para apoyar los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente solicita US$4,864 mil millones de dólares provenientes de fondos colombianos (65%) y US$ 2,636 mil millones a la comunidad internacional (35%). (Hernández L. H., 2009). El plan es acogido con aprensión por otros gobiernos de la región, en particular por los afectados por los flujos transfronterizos del negocio de narcóticos. Provoca malestar y preocupación en diversos sectores sociales y políticos colombianos, que temen la internacionalización del
conflicto. Pastrana logra el apoyo de once presidentes sudamericanos en la cumbre de Brasilia del 1 de septiembre del año 2000.

Al finalizar el gobierno en el 2002, la propuesta de paz de Pastrana cae en la debacle, al declarar la suspensión del proceso y la ocupación de la zona de distensión por parte del ejército. A partir de entonces queda el espacio expedito para que su sucesor: Álvaro Uribe Vélez, emprenda la guerra total contra las organizaciones armadas, declaradas terroristas a tenor con los atentados del 11 de septiembre.

Respecto al petróleo, desde el año de 1998 se empieza a dar altibajos en el proceso de exportación de crudo, a raíz de la paulatina disminución de la producción y ausencia de nuevos descubrimientos. Las exportaciones descienden un 14% en 1998, y 61% en 1999; en el 2000 marcan un 21%, para llegar en el año 2001 al orden del 28% y cerrar el 2002 en un 0,3%. La participación del petróleo en el PIB, que llega a ser en 1998 del 3%, desciende a partir del 2000 a proporciones cercanas al 2%. En 1999 el gobierno de Pastrana introduce la tercera modificación al denominado Factor R, con el objetivo de captar para el Estado mayor renta de los contratos. Establece nuevas cifras y porcentajes: para un Factor R entre 0 y 1,5 b/d la participación del socio será del 70%, para cifras entre 1,5 y 2,5 b/d la participación será del 70%/ (R - 0,5) y para cifras mayores al 2,5 b/d la participación será del 35%. En lo correspondiente a los costos de exploración se reembolsa el 30%, y en cuanto a los costos de desarrollo, según la participación de Ecopetrol en la producción y la aplicación del campo, se hará por campo y no por contrato como lo dispone la anterior versión. Por medio de la Ley 756 de 2002 se modifica el régimen de regalías. El Fondo Nacional de Regalías queda adscrito al Departamento Nacional de Planeación y sus recursos serán destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución Nacional, a la promoción de la minería la preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales de inversión, definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

4.4 COLOMBIA- BOLIVIA: 2000-2010

Dos presidentes de signos ideológicos totalmente opuestos asumen el poder en Colombia y Bolivia: Álvaro Uribe Vélez y Evo Morales,
respectivamente; quienes rigen a sus países durante los primeros diez años del nuevo siglo. Sus posturas políticas se van a reflejar en las políticas petroleras que implementan en sus respectivos países

4.4.1 Colombia

En Colombia, la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia en el año 2000, se corresponde con la necesidad que tiene el establecimiento de resolver la crisis integral que de forma larvada vive el país desde mediados de los años noventa. Uribe es reelegido de manera amañada en el 2006, por una amplia mayoría de sufragios, en unas elecciones que estrenan la figura de la reelección presidencial. Su reelección significa una ruptura en las costumbres políticas colombianas, tradicionalmente dominadas por los partidos conservador y liberal que se alternaban el gobierno. Su triunfo refleja una profunda crisis de esos partidos, pues por primera vez en la historia política de Colombia, un candidato disidente del partido liberal, logra superar las lealtades tradicionales de los jefes locales y regionales de ese partido.

Álvaro Uribe Vélez hace su aparición como candidato presidencial en el año 2001, y se presenta como un candidato independiente de los partidos políticos tradicionales, con partido propio: el partido de la U. En pocos meses asciende vertiginosamente en las encuestas de opinión al pasar del 1% a más del 50%. Como candidato capitaliza los sentimientos de los colombianos frente a la inseguridad y de rechazo frente a la actividad de los políticos corruptos, así como de las acciones de los actores armados. (González F., 2006).

El fracaso del proceso de paz del Caguán, y la agudización del conflicto interno, hacen que la guerrilla se desacredite como actor político, lo que lleva a la gente a preferir una solución militar del conflicto en vez de una salida negociada. A tono, con un cambio de percepción de la opinión pública nacional frente a la lucha armada, por la expansión de la actividad de la guerrilla hacia zonas urbanas y la afectación de las vías de comunicación, que contribuyen a la organización y expansión de grupos paramilitares. La nueva lógica territorial del conflicto hace que la guerra entre las guerrillas (FARC contra ELN), los grupos paramilitares y el Estado dejen de ser algo periférico de las ciudades y los centros de
producción económicos, para pasar a ser percibida como una amenaza para todos los colombianos.

Muchos sectores de población pensaban que podrían ser secuestrados o extorsionados en cualquier momento: a todos podía llegarle la guerra. Como consecuencia los colombianos se sentían encerrados en sus pueblos y ciudades, las relaciones comerciales se veían afectadas y la inversión de capital económico se percibía como inviable en muchos casos (González. 2006.)

Las condiciones están servidas para la constitución discursiva del enemigo por parte de Álvaro Uribe, por demás enemigo personal de las FARC, que le habían asesinado a su progenitor. Junto al conflicto armado -como señala González- los colombianos consideran que los males de la nación se deben en gran parte a la incompetencia de sus representantes, y la corrupción que invade a las instituciones en general. Para los colombianos la política y los políticos dedicados a buscar su enriquecimiento individual y su permanencia en el poder, atentan contra el desarrollo social de las comunidades y perjudican notablemente a la sociedad. Aspectos ligados, desde los años 70 y 80, a las problemáticas divisiones entre los sectores tecnocráticos del Estado y a la clase política tradicional, tras los intentos de modernización del Estado... "el rechazo generalizado al siguiente gobierno conservador de Andrés Pastrana acabó por extender la frustración que los colombianos sentían acerca de los partidos tradicionales, las maquinarias políticas y las instituciones corruptas e ineficientes" (González. 2006). Aparecen entonces los candidatos "antipolíticos", que conquistan amplias franjas del electorado, con propuestas de una opción de gobierno de transparencia técnica, administrativa y gerencial, en la que se inscribe el candidato Uribe. Este panorama se torna más grave al considerar el pobre desempeño económico y social del país. Ejercicio económico relacionado con el tema de la violencia, que lleva a pensar en la necesidad de un mayor control militar del territorio como una condición esencial para el desarrollo y la reactivación económica.

El resultado de la combinación de las relaciones descrita se traduce en el amplio triunfo electoral de Uribe en el 2000, en la primera vuelta, con una votación de 5.800.000 que correspondían al 53% del electorado. "El nuevo mandatario se ha propuesto derrotar al terrorismo
y modernizar las instituciones. Todas las expectativas de los colombianos están puestas en el señor presidente” (Palacios. 2002).

Sueño con una Colombia con predominio de una clase media democrática, tolerante, solidaria y respetuosa con el medio ambiente. Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz, resolver nuestras diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia de nuestras carreteras, paisajes y ríos. Sentir con ilusión que nuestra Patria nos pertenece y que debemos cumplir seriamente nuestras obligaciones con ella. Una Colombia con autoridad legítima y cero poder para los violentos. Sueño con un país democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades para todos. Con un país de propietarios, con una revolución de impulso a la pequeña y mediana empresa. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en la politiquería y avaro en los social”. (Uribe. 2002).

Así reza el discurso del candidato Álvaro Uribe Vélez, consignado en el llamado: Manifiesto Democrático - 100 Puntos. Álvaro Uribe Vélez (2000), que son los contenidos de los dos Planes de Desarrollo de sus dos gobiernos: 1.) Hacia un Estado comunitario (2002-2006) y 2.) Estado comunitario: Desarrollo para todos (2006-2010). Señala también su discurso como propósito: “consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad, y afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social” (Uribe 2002), convertidos en su conjunto en tres objetivos: 1.) la consolidación de la seguridad con alcance democrático. 2.) La consolidación de la confianza inversionista, y, 3. La construcción de cohesión social, equidad y superación de la pobreza; las cuales van de la mano por cuanto no son excluyentes. La seguridad era el concepto clave del proyecto, pues la llamada Política de Defensa y Seguridad Democrática era la columna vertebral de proyecto. La seguridad es concebida como “la protección del ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad”, como política,

...será una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder... Se considera que la seguridad requiere del fortalecimiento del
Estado de Derecho que proteja a todos los habitantes del país, de acuerdo a la Constitución “y en la medida en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá la participación ciudadana y la seguridad” (RESSDAL, 2003).

La misma se funda en tres pilares: 1. La protección de los derechos de todos los ciudadanos. Los derechos del campesino, del empresario, del sacerdote, del sindicalista, del maestro, del defensor de derechos humanos, del profesor universitario, del periodista, del soldado o del policía serán igualmente protegidos, sin discriminación. (RESSDAL, 2003.) 2. La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. “La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca proteger a dirigentes y disidentes políticos, afianzando a la vez el marco democrático y las amplias posibilidades de participación ciudadana que establece la Constitución Política”. (Resdal. 2003). 3. La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos.

...el buen funcionamiento de las instituciones requiere igualmente de la participación activa y el compromiso solidario de los ciudadanos. La participación democrática se expresa no sólo en el ejercicio del voto, sino también en el respeto y la promoción de los valores cívicos que enmarcan la pluralidad del debate político”. (RESSDAL, 2003).

En fin se considera como una política que protege la población, pues la seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. De donde se desprende su propuesta de constitución de un Estado Comunitario, sinónimo, o en correspondencia con un Estado de Opinión que “

...no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; ... es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas” (Uribe., 2009).
El Presidente Uribe va a presentar a las Farc y los grupos contestatarios en general, como una minoría mala opuesta a una mayoría de buenos ciudadanos.

Como el enemigo interno contra un “nosotros” trabajador y honrado. (...), como una demanda que queda instalada en todos los sectores de la política” (Ibid). Cuando se dan los sucesos del 11 de septiembre, que transforman radicalmente los contextos del discurso político mundial, “Uribe Vélez ya había sembrado en la opinión colombiana la idea del viejo sheriff del Oeste: ‘O conmigo o contra mí’. Pocos como él tienen la credibilidad para hablar de las FARC y del ELN como organizaciones terroristas y al mismo tiempo para subrayar cuán nefasta resultaba la politiquería tradicional. Modernizar las instituciones y derrotar el terrorismo iban de la mano, y sólo un Gobierno eficaz, inspirado en valores de clase media, podría salvar el país”. (Palacios M., 2002).

La propuesta de nuevo régimen es de carácter corporativista privatizante que lleva la fusión del país, como “mercado emergente”, a los intereses nacionales y transnacionales dominantes del mercado global.

Su cuenta de capitales, se basa en los flujos de inversión extranjera siendo el sector privado el ejecutor de los proyectos de inversión, desarrollando un modelo empresarial competitivo. El campo se constituye en el motor del crecimiento, “de la generación de empleo y de la modernización del aparato productivo” (DNP Departamento Nacional de Planeación., 2001), incorporado al sector financiero.

El Estado actúa como empresario en las actividades definidas como estratégicas donde sea indispensable, y los entes territoriales y el sector privado serán sus ejecutores. Eso lleva al rediseño del modelo burocrático y de gestión pública por resultados, para que sea un Estado eficiente. De esa manera se redefine el papel del Estado hacia un tipo de Estado residual mínimo y limitado en sus funciones, que hace recortes en el gasto social e implementar una política social bajo los criterios de focalización, descentralización y privatización de los servicios. Un escenario y condiciones para un nuevo comportamiento clientelista que persiste como fundamento de consenso del nuevo régimen. La propuesta es un pacto desde arriba entre los sectores económicos del país, los intereses extranjeros particularmente norteamericanos, y los grupos
ilegales del narcotráfico, acompañada de políticas asistencialistas, como Familias en Acción, para los sectores marginados y desplazados. Además, porque: La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio”. (Álvaro Uribe 2008c).

El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida. (...) Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas”. (Uribe, 2008).

En el 2001 se lleva a cabo un acuerdo entre los narcotraficantes y paramilitares, conocido como el Pacto de Ralito, en el que se proponen refundar la patria. El pacto involucra a parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos. Se enmarca dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley, con la financiación del narcotráfico y para concretar, a futuro, la toma del poder político. En un proceso que se inicia en la Región Caribe, para consolidarlo posteriormente a nivel nacional. Pacto del cual afirmaba entonces el jefe máximo de las AUC, Carlos Castaño Gil: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable” (El Espectador, 2007).

El gobierno de Uribe se reafirma en la reelección del 2006, gracias a los resultados de la política de seguridad democrática, la reactivación de la economía y su política de los Consejos Comunitarios. Uribe gana las elecciones de 2006 con 7.300.000 votos equivalentes a un 62.2% de los sufragios. Supera en un millón y medio de votos el evento electoral de 2002, como muestra de que el país le daba un mandato de continuidad a su gobierno. Sin desconocer la contundencia y razón del proceso, la reelección está acompañada de trampas constitucionales y respaldos de los grupos paramilitares y del narcotráfico; pero eso no deja de indicar que el éxito electoral tiene el respaldo de amplios sectores de población, grupos políticos, agremiaciones empresariales y varios medios de comunicación, que lo hacen depositario de una
legitimidad considerable y de amplios márgenes de gobernabilidad. Como señala González:

Esas diversas estrategias reflejan una hábil combinación de distintos lenguajes, estilos políticos y lógicas de actividad según los auditores e interlocutores a los que se dirigía, para adecuarse a las complejidades de la vida política de Colombia. Para el electorado independiente, Uribe representaba un estilo de gobierno ajeno a los tejemanejes de la clase política tradicional, corrupta y clientelista. Para las agremiaciones económicas, los sectores tecnocráticos, ilustrados y especializados, Uribe adoptó un lenguaje moderno para justificar sus actos de gobierno a través de amplias exposiciones estadísticas y técnicas. Para la clase política y el electorado tradicional, la alianza con Uribe garantizaba el acceso a los recursos del Estado y permitía beneficiarse de su caudal electoral” (González 2006).

En cuanto al éxito legitimador, se destaca la recuperación de importantes zonas del territorio nacional en poder de la guerrilla y el mayor control de las vías de comunicación entre las grandes ciudades. Las escoltas militares a las caravanas de turistas y viajeros intermunicipales, siembran la sensación de confianza de la mayoría de los ciudadanos en las instituciones del Estado y el futuro del país; al lado de los procesos de desmovilización de grupos paramilitares que disminuye los indicadores de homicidios, secuestros, masacres, desplazamientos forzados y ataques a infraestructura, que aumentan la percepción de seguridad. La reactivación de la economía con el aumento de la inversión extranjera, la creación de nuevas empresas, el aumento del PIB que muestra un crecimiento económico del 6% anual, atado al lema de “trabajar, trabajar y trabajar”, consensúa una ciudadanía que tiene la imagen de que los gobernantes robaban mucho y trabajaban poco. El presidente se reivindica los éxitos, mientras los fracasos caen en las espaldas de sus ministros, comandantes, generales y subordinados.

Los reveses que llevan el fin del ejercicio gubernamental de Uribe, al no poder candidatizarse para un tercer mandato, por sentencia de la Corte en el 2010, se dan alrededor del enfrentamiento que tiene con otros órganos del poder como el Legislativo y las altas Cortes, su intento de enterrar la Constitución de 1991, y a los roces con los partidos. En su gestión el presidente Uribe intenta saltarse las instancias de representación y los conductos institucionales diseñados para gestionar
las políticas públicas, y poner en tela de juicio la mediación ejercida por la clase política tradicional. En ese orden se propone transformar el Congreso de la República para revocar el mandato de los congresistas y reducirlo a una cámara, y gestiona un Referendo que termina perdiendo. La fortaleza del Congreso, escenario de la clase política tradicional, evidencia que la crisis de legitimidad había erosionado seriamente la credibilidad del régimen político imperante pero sin producir un colapso total de los partidos. La fortaleza de los políticos tradicionales en los niveles local y regional obliga al presidente a modificar gradualmente su actitud frente a los políticos profesionales. El fracaso del referendo obliga a Uribe a acercarse a la clase política tradicional,

...para asegurar la aprobación de sus proyectos en el Congreso con mecanismos de transacción clientelista muy cercanos a lo que criticaba en la clase política tradicional. (...) esta necesidad del ejecutivo de conseguir apoyo de los congresistas se veía correspondida por la necesidad de la mayor parte de la clase política de acceder al botín burocrático y al reparto de los recursos fiscales. Los lazos de interdependencia entre el ejecutivo y el legislativo explican la cohesión de buena parte de los políticos tradicionales en torno al presidente Uribe". (González, 2006).

Alejado del poder en el 2010, el expresidente de la Seguridad Democrática ve como emerge el carácter ilícito de su gestión alrededor de los escándalos de corrupción de la política de Agro Ingreso Seguro, de las intercepciones de las comunicaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de las altas Cortes y a los opositores, y la evidencia de sus vínculos con los narcotraficantes y el paramilitarismo; junto al recrudescimiento de la violencia armada y el inconformismo social.

El balance de la gestión económica de su administración señala un aumento en el PIB gatillado por el incremento de la inversión extranjera, y por una política fiscal expansiva financiada en buena parte por recursos de emisión del Banco de la República. En contraste con un delicado saldo social en donde crece el desempleo y la miseria. El PIB que tiene una tasa del 3% en el 2000, alcanza su punto máximo en el 2007 con 8.2%, tiene su mínimo en el 2009 con 0.8%, para cerrar el 200 en 4.3%. (Index. Mundi., 2011). Se destaca el comportamiento del sector minero y construcción que alcanzan las tasas de crecimiento más elevadas.
de: 11.3% y 12.7%. Un comportamiento que se da en medio de la desaceleración económica que se empieza a sentir a partir del 2008, con la ralentización del crecimiento para la mayoría de los sectores, pero particularmente profunda en el caso de la Industria, el Comercio y Transporte. La industria manufacturera y el comercio decrecen: 6.3% y 2.9% respectivamente, lo cual es grave porque son los sectores que más generan empleo, y a la vez indicativo de la desindustrialización del país. El 26% del total de ocupados está en el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles. En cambio la minería que crece 11.3%, apenas participa con el 1% del empleo. En cuanto al desempleo, el país sigue mostrando las tasas de desempleo más altas de la región, que alcanza un poco más del 18% en 2001, con alguna tendencia a la baja cerrando por encima del 14% al cerrar el periodo. La tasa de inflación presenta un comportamiento favorable a lo largo del periodo en el que se observan 3 momentos: Primero, un descenso sostenido entre 2001 y 2006, cuando pasa de 7.6% a 4.5%. Segundo, un repunte en 2007 y 2008, y tercero: Una caída drástica de la inflación que se ubica en 2%, un nivel sin precedentes durante la década. La demanda interna alcanza su mayor dinamismo entre el 2005 y 2006 cuando la inversión crece a tasas cercanas al 20%, para una notable contracción a partir del 2009 con un equivalente del 5.2%. Mención especial tienen las importaciones y la inversión extranjera. Las inversiones pasan del 1.7% en el 2002 al 9.8% en el 2008, que alcanza un máximo de 17% en 2005. A partir del 2009, tanto las importaciones como las exportaciones se contraen, siendo mayor la caída en el caso de las primeras: -9.1% frente -8.2%. La inversión extranjera se incrementa en un 164%, fundamentalmente en el sector de hidrocarburos y minería. El monto de la inversión extranjera acumula un monto cercano a los US$ 60 mil millones, donde Estados Unidos es la principal fuente de capital extranjero, con el 46% en el 2009.

Esos flujos de inversión los podemos ver ilustrado en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 10. Flujo de Inversión Petrolera**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Flujo</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Promedio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Millones US$</td>
<td>449</td>
<td>278</td>
<td>495</td>
<td>1,125</td>
<td>1,995</td>
<td>3,333</td>
<td>3,409</td>
<td>3,571</td>
<td>12,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado con base en ANH gestión y finanzas 2009 y ECP
La política petrolera refleja la visión y misión socioeconómica neoliberal del gobierno de la seguridad democrática. En ella se profundiza la presencia del sector privado multinacional, que evidencia la Consigna presidencial de: "atraer inversión extranjera" y "hacer de Colombia un país de propietarios", con el claro objetivo de promover "la inversión privada nacional y extranjera en la actividad petrolera" (DNP, 2002). Un propósito que implica cambios estructurales e institucionales en el sector y la empresa: Ecopetrol. Con base en las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 790 de 2002, en el año siguiente expide el Decreto 1760, que escinde de Ecopetrol la administración integral de las reservas de hidrocarburos, así como de la administración de los activos no estratégicos representados en acciones y participaciones en sociedades. El mismo Decreto da lugar a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para que administre las reservas de hidrocarburos de la nación, celebre contratos y administre los mismos; se encargue de su diseño, y haga el correspondiente seguimiento. Ecopetrol, queda administrando las regalías y compensaciones causadas por contratos celebrados antes del primero de enero de 2004, así como la administración de los contratos celebrados con anterioridad a la misma fecha. La ANH diseña dos nuevas clases de contratos: 1. Los primeros denominados contratos de Exploración y Producción (E&P), y 2. Los llamados Contratos de Evaluación Técnica (TEA), con el objetivo de atraer el capital extranjero, aumentar el nivel de exploración, elevar el volumen de reservas y aumentar las exportaciones. El 1. E&P se basa en el sistema de Regalías e Impuestos, donde el contratista se obliga a ejecutar un Programa de Trabajo Exploratorio Mínimo, construye y es dueño de los medios de transporte y opera la actividad, de manera autónoma a su propio costo y riesgo. También es dueño de los derechos sobre toda la producción, luego de descontadas las regalías, y de una participación en la producción ofrecida a la ANH durante el proceso licitatorio y de la participación en el mayor precio, el cual se causa cuando el precio internacional de referencia del crudo excede el nivel preestablecido. El 2. TEA, es un contrato que se aplica para áreas libres y especiales. Su objetivo principal es evaluar el potencial hidrocarburífero de un área e identificar prospectos para celebrar un eventual contrato de E&P sobre una área contratada. El evaluador puede hacer actividades de exploración con una duración máxima de 36 meses según el programa de trabajo, y debe desarrollar el programa
con autonomía bajo su responsabilidad operacional exclusiva, con un derecho de prelación para suscribir un Contrato de E&P (ANH, 2011). La ANH por su parte, verifica el avance de las actividades, administra la información obtenida en desarrollo de los contratos y recauda el derecho económico. En ese marco la ANH, abre el país petrolero al mundo a través de las denominadas “Rondas Colombia” para la promoción y adjudicación de áreas del país para otorgarlas en concesión con base en los contratos diseñados, en ellas se promociona y oferta las zonas que han sido “calentadas” con una cierta actividad exploratoria previa. Desde el 2004, se han realizado cuatro rondas. La primera de carácter regional denominada Ronda Caribe 2007; otra de carácter nacional denominada Mini-ronda Colombia 2007, posteriormente la Ronda Colombia 2008, finalmente, el 15 de octubre de 2009, se publica en la página oficial de la ANH el primer borrador de los términos de referencia para adelantar la Open Round Colombia 2010. Como en cualquier feria de negocios, la ANH estudia y evalúa las distintas ofertas nacionales e internacionales que se allegan por parte de las sociedades proponentes y sus delegaciones.


Se destaca la variable de reservas y del precio de los combustibles, por cuanto ellas resumen el carácter de esa política. Las reservas, pasan de 1.972 millones de barriles en el año 2000 a 2.058 millones en el 2010, que se extraen a un ritmo cercano a los 530 mil barriles diarios, y en proyección para exportar un millón de barriles diarios. Eso implica
que Colombia en el 2010, cuente con reservas para unos siete años más, a partir del cual el país podrá volver a ser importador. Importación que tendrá que hacer bajo el imperativo de altos costos, pues la era del petróleo barato ya finalizó en el mundo. Ilustra esa situación el carácter repetitivo que comporta el ciclo propio de la política petrolera del país de: 1. Vivir de bonanzas petroleras exportadas como producto de cambios en los términos contractuales, 2. Agotar rápidamente las reservas descubiertas en como boom petrolero, para 3. Volver a ser importador, y así, 4. Reiniciar el ciclo.

En cuanto al precio de los combustibles, que toca directamente el costo de vida de los colombianos, la gasolina pasa de un precio de $3.367 en el año 2002 a $7.207 en el 2010, es decir un incremento del 214%, como nunca se había dado en su historia; que representa uno de los más altos de la región, incluido los Estados Unidos. Su comportamiento lo ilustra la siguiente gráfica.

**Gráfica No. 16.** Precio Máximo con Sobretasa

[Gráfica]

Fuente: Con base UPME 2010.
El alza de precios, que se hace mensualmente en el país, se argumenta oficialmente diciendo, que se referencian en la dinámica de los precios internacionales del Golfo de México como precios FOB, los cuales incluyen: “Flete internacional, Seguros, Arancel, Costos de Inspección, Impuesto de timbre, y por último, la tarifa del poliducto Pozos Colorados Galán (Donde se transporta la gasolina desde Santa Marta hasta Barrancabermeja”). (Ministerio de Minas y Energía, 2009, pág. 88), así se esté extrayendo el crudo de pozos aledaños a las refinerías. La política se implementa desde 1999 con la justificación, que el bajo precio que tienen los combustibles respecto al precio internacional, beneficia a los consumidores privados, que se ven subsidiados por los pobres, que además, se derrocha un recurso escaso, cuyo consumo acentúa el impacto ambiental. Medida que realmente es producto de una política macro, internacionalizada y financierizada, donde los recursos naturales, al perder con las privatizaciones su referente de propiedad estatal y las mercancías el valor de su producción nacional, hace que a un país le dé lo mismo tener o no tener recursos, tener o no tener producción o riqueza natural nacional, pues paga el precio de su propio recurso a precio ajeno, es decir, a precio internacional. Esos precios benefician a los países del centro, urgidos del recurso que no poseen, y que pese al alza, les resultan cómodos de adquirir dado sus niveles de ingresos.

4.4.2 Bolivia

Por su parte en Bolivia en el 2002, Sánchez de Lozada (2002-2003) asume su segunda magistratura en medio de una aguda una crisis social y económica heredada del anterior gobierno. Lozada pretende sanearla aplicando un impuesto al salario (“impuestazo”), lo que provoca el amotinamiento de la fuerza policial, que precisamente exige alza de salarios. La situación desencadena un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía en la ciudad capital: La Paz. Echar atrás la medida le sirve para aplazar unos meses más su destitución. El desgaste y la pérdida de gobernabilidad se hace evidente con su renuncia en el 2003. La abdicación se precipita a raíz de rumores según la cual el presidente intenta exportar gas boliviano por puertos chilenos a los Estados Unidos, México y Chile, que origina una serie de movilizaciones y bloqueos sociales en la ciudad del Alto y otras ciudades del país; las
cualles son reprimidas por el presidente con un saldo de 64 muertos y 228 heridos. Las demandas se convierten en una expresión de carácter nacionalista, conocida como la “guerra del gas”, llevada a cabo entre septiembre y octubre del 2003 (García., La guerra del gas., 2002), que obliga su renuncia. Una situación similar a la acontecida con el ecuatoriano Abdala Bucaram (1997), el paraguayo Raúl Cubas (1999), el peruano Fujimori (2000) y el argentino Fernando de la Rúa (2001).

La denominada “guerra del gas”, tiene su antecedente en la administración de Jorge Quiroga quien propone la construcción de un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa y barata al Océano Pacífico. Una propuesta imposible de llevar a cabo por la disputa histórica existente entre los dos países a raíz de la guerra del Pacífico (1879-1883), que le acarreó a Bolivia la pérdida de su salida al mar. Sánchez de Lozada quien es un empresario, muestra complacencia por el proyecto, pero igual que Quiroga evita adoptar una declaración oficial acerca de la construir el gasoducto. La lucha de la población no es solo patriótica, sino que involucra demandas en torno al lema, de “recuperar el gas para industrializarlo”, para que contribuya en la mejora de su propia situación. La gente considera que su riqueza natural sólo llega a 1.5-2% de las familias de Bolivia que no forman parte de la red de consumo; mientras más de 90% del gas es exportado. Que la mayor parte va alimenta las plantas termo-eléctricas, en manos de privados. Además de tener que pagar esa electricidad a altos precios, que no llega a la mayoría de la población, especialmente la rural. Así que “la gente quiere tener acceso al gas para poder mejorar su nivel de vida” (Dang, Sunday, 07 May 2006). Por eso reclaman la revisión de la Ley de Hidrocarburos, promulgada en abril de 1996 el primer Gobierno de Sánchez, que le permita al Estado recaudar más por el gas. (CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona., 2007). Una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple condiciones económicas más favorables para el Estado y potencie YPFB para que asuma todas las actividades de la cadena productiva. En el 2004, por medio de un referéndum vinculante, el pueblo decide por mayoría absoluta, la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo, y la refundación de YPFB. En el año siguiente 2005, el Congreso Nacional promulga la Ley de Hidrocarburos N° 3058, que tiene como actor principal al Movimiento al Socialismo (MAS). A través de esa ley se elimina el régimen de los contratos de Riesgo Compartido y establece tres tipos de contrato: 1.
El Contrato de Operación, 2. El Contrato de Asociación y 3. El Contrato de Producción Compartida. En cuanto al régimen fiscal, elimina la clasificación entre hidrocarburos nuevos y existentes e instaura un solo régimen para todos, que mantiene el 18% de regalías y participaciones, y crea un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32% sobre el valor de la producción fiscalizada, aplicable a todos los campos del sector. La ley conmina a los titulares que tienen Contratos de Riesgo Compartido suscritos, a convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en la nueva norma, en el plazo de 180 días. Hecho que no se produce sino hasta finales de la gestión, en el 2006, por la postergación de nuevos contratos. (Fundación Jubileo. Ob. Cit). De igual manera queda refundada YPF.

Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) no gobierna por más de dos años, pese a la popularidad lograda por una gestión considerada transparente, y la demanda que hace por la salida al Pacífico de Bolivia; que no fueron suficientes para que concluyera su mandato. Su dimisión se da en medio de la movilización social reactivada, que pide el cierre del Congreso, la elección inmediata de una asamblea constituyente, la realización del Referendo Autonómico impulsado por el departamento de Santa Cruz, la región económicamente más rica de Bolivia; y la nacionalización del gas. Es su mayor acierto, ganar el primer Referendo democrático para aplicar una nueva política nacional de hidrocarburos, aunque no logra hacer aprobar su proyecto de Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005, que es rechazado por el Congreso que aprobó una ley distinta. La ley supuestamente refunda a YPF; recupera las acciones de las capitalizadas petroleras, reestructura los Fondos de Capitalización Colectiva y asume el financiamiento del Bonosol: una renta anual vitalicia de 1.800 bolivianos entregados a las personas mayores de 65 años. Pero en el marco de esa ley YPFB no queda con capacidad, y en condiciones para participar de manera autónoma en el negocio petrolero, dirigir al sector, fijar los precios, y actuar como instrumento de política económica; pues queda relegada al mercado interno y, por lo mismo, sin participación preponderante en el negocio del recurso. (CDLA. Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario., 2005).

Su gestión económica considerada austera, reduce el déficit fiscal de 8% a menos del 2,5%, duplica las exportaciones del país en
el 2004, y revierte la recesión al obtener en el 2005 un crecimiento de casi el 3,5% del PIB. Su sucesor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez (2005), debe gestionar la fecha para las elecciones generales bolivianas, que se fijan para el 18 de diciembre de 2005, y de las que sale triunfante Evo Morales.

Evo Morales (2006-2012). De extracción indígena, es fundador del movimiento al Socialismo (MAS) y líder del movimiento de los campesinos cocaleros Bolivianos. Su programa político considera la lucha contra el neoliberalismo, el capitalismo y el imperialismo y la refundación de la nación, por cuanto considera que el colonialismo interno ha fracasado en la construcción del estado nacional moderno. Diez puntos constituyen su agenda gubernamental: 1. Tierra y Territorio para los pueblos originarios. 2. Recuperación de los recursos naturales. 3. Un país productivo, para salir de la pobreza. 4. Un Estado bajo control social. 5. Las armas son del pueblo. 6. Educación para la libertad. 7. Salud integral y total. 8. Cada persona es imprescindible, en su efecto supresión del servicio militar obligatorio y la integración real de la mujer en la vida pública. 9, La integración es la recuperación de nuestro mundo y, 10, Asamblea Popular Constituyente, conformada por representantes de las organizaciones sociales. El Programa se sustenta en una serie de principios ideológicos entre los que se cuentan: la justicia social, el socialismo comunitario, la soberanía económica, la democracia participativa, el reconocimiento de filosofía ancestral y milenaria indígena, la constitución de la gran patria latinoamericana, la unidad de destino con los pueblos del Tercer Mundo y el rechazo a toda forma de penetración o sojuzgamiento imperialista. En medio de un ambiente nacional al borde de una "guerra civil", y acompañado de Álvaro García Linera para Vicepresidente, es elegido presidente en las elecciones de 2005. Son sus propósitos: la recuperación de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, la Refundación de la República de Bolivia, la superación de las estructuras sociales y de producción excluyentes y discriminatorias, y el desarrollo de una revolución cultural que implique cambios en todos los sectores de la comunidad boliviana. Morales triunfa con el 54% de los votos, seguido por el expresidente Quiroga con el 29%. En las elecciones legislativas, su partido el MAS, logra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 84 de los 157 elegidos. Evo Morales, es el primer presidente indígena en la historia de
Bolivia y el segundo de toda Hispanoamérica después de Benito Juárez en el México de 1867. En su posesión se compromete a gobernar junto a los movimientos sociales, a nacionalizar los hidrocarburos y derogar el derecho de propiedad de las petroleras, y advierte que no hará tratos con quienes robaron al país y vendieron la patria, e instó a construir en Latinoamérica el Tahuantinsuyu, y la “patria grande” soñada por Simón Bolívar. (CIDOB. Centro de estudios y documentacion internacionales de Barcelona, 2012).

Sus primeras decisiones gubernamentales las dirige hacia la política petrolera, en perspectiva de la estatización de los recursos y la refundación de YPF. En las primeras decisiones que toma, pone en práctica la promulgación del Decreto N° 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco”. Es su objetivo recuperar, a favor del Estado, la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales hidrocarburíferos del país. Además, que las empresas petroleras que realicen actividades de producción de gas natural y petrolífero entreguen su producción a YPFB, empresa que re-estatiza para que defina las nuevas condiciones comerciales y aplique una política de reposición de reservas. En este nuevo marco, las empresas petroleras pasan a ser “socías”, y no “patrones” del Estado, a través de YPFB. (Fundación Jubileo.2009.). El 1 de Mayo del 2006, después de negociaciones con las Empresas Transnacionales firma nuevos contratos, donde el país pasa a tener la mayoría de las acciones de las empresas petroleras. Eso le permite incrementar los ingresos por la explotación del gas, al pasar el Estado a ganar del 18% que obtenía en el gobierno de Sánchez de Lozada al 84%. Igualmente firma un decreto en el que todas las reservas del gas quedan estatizadas, y el Estado recupera la propiedad y el control político y administrativo de los hidrocarburos. Para su efecto ordena a los militares y a los ingenieros de YPFB ocupar y asegurar instalaciones gasíferas. Morales da a las compañías extranjeras un plazo de seis meses para renegociar los contratos, o ser expulsadas del país. Advierte que no va a aplicar la forma de expropiaciones o de incautaciones, pues ofrece el pago de cerca de 50 por ciento del valor de la producción, aclarando el decreto que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirán solo el 18%. Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, que controla el 14% de las reservas del gas del país, ante la cual su
ministro de energía Rondeau de Silas reacciona con vehemencia, pues
considera como antipática la decisión y contrario al entendimiento
histórico entre su país y Bolivia. Las negociaciones con Petrobras son
complicadas y lleva incluso a la dimisión del Ministro, pero terminan
siendo concertadas con el presidente Lula. Morales señala, a la firma
de las negociaciones alcanzadas, que “nos obligan vivir con el Brasil en
una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos”, y subraya la
dependencia mutua entre Brasil y Bolivia en el tema de la producción del
gas boliviano. La estatización, no solo cobija solo a la producción sino
da los demás sectores de “aguas abajo” de la cadena productiva, entre
ellas la refinación y el transporte. (Wikipedia., 2012). Para su efecto,
YPFB inicia negociaciones con la empresa Petrobras Refinación S.A., y
compra en el año 2007, en US$112 millones el 100% de las acciones de
las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel, hasta entonces
propiedad de Petrobras Refinación. Luego adquiere el 50% + 1 de las
acciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB),
encargada del transporte y almacenaje de productos derivados como
gasolina, diesel Oil, GLP, etc. “Como CLHB no cedia, el Gobierno emite
el 1° de mayo de 2008, el Decreto Supremo Nº 29542, a través del cual
YPFB compra el 100% de las acciones” (Fundación Jubileo.2009.)

Al decir de Enrique Mariaca, se puede señalar que esta tercera
nacionalización boliviana

...no se produjo bajo políticas de confiscación de bienes y resolución
inmediata de contratos, sino que respondió a un proceso de concertación
y negociación de nuevas condiciones económicas para la suscripción
de nuevos contratos, así como para la adquisición del total del paquete
accionario de aquellas empresas capitalizadas y privatizadas”. Se
consideraba que ese nuevo plan de nacionalización pasaba a ser la base
para una “solución a los problemas económicos y sociales del país.”
(Dang, Sunday, 07 May 2006 ).

Un balance de la gestión económica de Morales en el 2010 es
resaltada por el mismo FMI, al señalar la existencia de una política fiscal
sólida. También, de una economía que ha crecido 4.4% en el 2005,
6.1% en el 2008 y 3.4% en 2009, el más alto de toda América, con un
promedio de crecimiento de 5.2% anual durante todo el gobierno, la
más alta de los últimos 30 años. Una gestión que sale airosa tanto de
la crisis internacional del 2008, como de los prejuicios políticos contra un gobierno de izquierda e indigenista; liderado por un trabajador del campo distante de las aulas académicas y la tecnocracia. Situación ponderable si se tiene en cuenta los bajos precios de las materias primas, para un país que obtiene 80% de sus ingresos de estos bienes; la rebaja de las remesas del extranjero, (su segundo rubro de ingresos: US$ 1.023 millones en 2009,) que equivale al 5,8% del PIB; la inestabilidad política en los llanos de la región oriental, controlada por la oposición, y la revocatoria de las preferencias comerciales por parte de Washington.

Con respecto a los ingresos del Estado, entre 2004 y 2008 obtiene un recaudo de US$ 3.500 millones. Una recaudación per cápita que pasa en ese periodo de US$58 a US$401, y que en el 2010 representa el 20% del PIB, que el Estado convierte en ahorro. Las reservas internacionales que en el 2008, equivalen a 41% del PIB, en el 2010 ascienden a US$ 8.400 millones, que bordean 47% del producto nacional. “Hoy Bolivia tiene reservas comparables a las de China”, afirma Gabriel Torres, analista de la agencia clasificadora de riesgo Moody’s. La inflación en el 2010 está en 0,8% y la deuda baja de 84% del PIB en 2003, a 37% en 2010.

Respecto a la inversión, que es una de sus debilidades del país, en el 2007 crea el Banco de Desarrollo Productivo, que ofrece pequeños préstamos, de unos US$10.000 en promedio, a unos 15.000 pequeños productores. Establece la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que ofrece créditos sin interés, y les compra directamente la mercadería, que luego revende al resto de la población. El resultado ha dado como resultado un aumento de 17% en la superficie plantada por pequeños y medianos agricultores, y una mayor estabilidad en los precios del azúcar, arroz y otros productos de la canasta básica.

Parte de sus flaquezas se encuentra en lo raquítico de su infraestructura, aunque en el 2008 invierte 6% del PIB en su desarrollo con obras públicas y bonos de consumo. En el 2009, aumenta el gasto a 10,1% del PIB. También es fuerte la informalidad liderada por el contrabando y el narcotráfico, pues al menos US$ 800 millones de los US$ 5.000 millones que el país importa anualmente provienen de estos dos sectores. Finalmente, la lucha contra la pobreza sigue al orden del
día, pues supera al 60% de la población, que limita el desarrollo de un mercado interno; aunque su demanda está creciendo a un sólido 6% anual, por encima del anterior 3%.

Sus perspectivas se muestran halagüeñas con el impresionante salar de Úyuni, la llanura de sal más grande del mundo, que contiene la mitad de las reservas conocidas de litio, el componente principal de baterías para vehículos eléctricos. Es un mercado al que muchos le auguran un crecimiento exponencial en los próximos 10 años, y que podrá resultar aún más significativo que el gas para la economía boliviana. Pero, afirman los analistas, que tan o más importante que la mera exportación de litio, es la capacidad de Bolivia de diversificar su economía. El 83% de los trabajadores produce apenas 25% del PIB, mientras que 65% del producto proviene de sectores que emplean sólo el 9% de la fuerza laboral. (Friedman-Rudovsky., 2011).

En las elecciones del 2009 Evo Morales gana con el 51%, para gobernar al país hasta el 2014. Obtiene en la Paz una votación de más del 73% y en Santa Cruz de la Sierra y Beni cerca del 37%. Una demostración del consenso en promedio de su gestión en la mayor parte del país, y de la oposición de las regiones más ricas, escenarios de potencial tensión política.

La síntesis cuantitativa del comportamiento de las políticas de Colombia y Bolivia descritas, la podemos apreciar en las gráficas No. 17 y 18.

Al comparar las curvas de reserva de los principales hidrocarburos de los dos países: petróleo para Colombia y gas para Bolivia, apreciamos un aumento creciente de sus respectivas reservas; con más regularidad para el caso Boliviano. Colombia alcanza su tope en 1990, año a partir del cual muestra una tendencia decreciente, con señales de ascenso a partir del 2010. Bolivia, que presenta un primer ascenso hasta 1980 para descender en 1990, inicia un proceso de aumento significativo hasta el 2010; con un salto vertiginoso (600%) en los 5 años que van de 1990 a 1995. La diferencia de los dos países estriba en la relación reservas/producción, pues Colombia cuenta con reserva para un poco
más de 10 años, mientras Bolivia puede superar los 100 años. La de petróleo colombiano la podemos observar en la gráfica No. 19.

Gráfica No 17. Colombia Reservas de Petróleo


Son las reservas de gas de Bolivia.

Gráfica No 18. Bolivia Reservas de Gas

Fuente: Cuadro N° 8
La producción de gas boliviano ha tenido la dinámica que se muestra en la Gráfica No. 20.

Fuente: Cuadro No. 9
Se aprecia en los dos países un aumento creciente en sus respectivos procesos de producción. En Colombia con dos bajas una en 1980 y otro el 2005, y dos altos uno en el año 2000 y otro en el 2010, relacionados con los altibajos que presentan sus reservas. Bolivia muestra un proceso de aumento creciente a partir de 1980, incrementada a partir del año 2000, que se corresponde con la dinámica que comporta desde el anterior quinquenio.

La dinámica de sus deudas la podemos observar en la Gráfica N° 21.

**Gráfica N° 21.** Colombia-Bolivia: Deuda Externa: 1970-2010

La gráfica muestra que sus dinámicas sus deudas son similares, aunque más pronunciadas en el caso de Colombia que muestra un
aumento de 1.772% entre 1970-2010, y moderada para Bolivia, que indica un 952% en el mismo periodo; para un promedio de US$18 mil millones para Colombia y de US$ 3.4 millones para Bolivia. En el 2010 la deuda representa para Colombia el 19% del PIB y para Bolivia el 23%, que las hace equilibradas en el manejo de sus finanzas. En términos per cápita, Colombia comporta, US$ 848/habitante y Bolivia: US$ 647/habitante.

4.5 CONCLUSIÓN

Estas dos experiencias nos sirven para ilustrar, lo que podemos denominar el comportamiento propio de países hidrocarburíferos de términos o condiciones medias, por ser países que cuentan con reservas energéticas pero sin ser potencias. Bajo esa condición autoabastecen sus mercado internos, aun estrechos; y mantienen una tasa de exportación significativa para el mercado hemisférico: Bolivia a Brasil y Argentina y Colombia, fundamentalmente, a los Estados Unidos. Además, cuentan con empresas estatales, igualmente de mediano alcance empresarial, y permiten la presencia de multinacionales a través de Contratos Asociados.

Sin embargo se destacan las transformaciones diferentes que se dan en el sector iniciando el siglo XXI, en correspondencia con el talante político, de signo contrario, impreso por las administraciones de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Evo Morales en Bolivia. Ambos mandatarios realizan cambios profundos en lo jurídico, lo contractual, lo organizativo e institucional del sector. En Colombia Uribe Vélez, implementa una política de corte neoliberal, que prioriza la privatización sobre la estatización a lo largo de todo el sistema productivo, es decir, “Aguas arriba” y “Aguas abajo”. También aboga por una contratación: 51%-49% a favor de los empresarios privados, que les da a la privadas el derecho a administrar los contratos; perdiendo así el Estado la capacidad de decisión sobre actividades de un sector considerado estratégico. Morales, al contrario, pone como condición de la contratación la relación 50% más uno a favor del Estado y 49% para las privadas, con las consecuencias administrativas a su favor, que permiten la consolidación de la reconvertida YPF y la dirección política de la producción en las áreas en donde participan las privadas. El impacto de esas políticas
se expresa en las cifras mismas, en donde los dos países muestran un repunte en sus reservas y exportaciones. Variables que se presentan más agresivas en el caso colombiano, que las agota al mismo ritmo que las producen las multinacionales.
V

Conclusiones

Una primera conclusión que se destaca, se refiere a la diversidad de políticas desarrolladas en la región desde sus mismos orígenes. Es significativo el caso mexicano, que a raíz de la crisis de los setenta inicia una reconversión profunda de su política nacionalista (base de un desarrollismo endógeno), para pasar a una apertura asida a los tratados de libre comercio propuesto por los Estados Unidos en el marco de NAFTA. El proceso le significa: 1. Un fuerte agotamiento de sus reservas a tono con unas exportaciones aumentadas, principalmente, hacia los Estados Unidos, 2. La desestatización de su emblemática empresa Pemex y 3. El mantenimiento de una abultada deuda. Venezuela en cambio, realiza el proceso de nacionalización en el marco de la crisis de los setenta, que pretende revertir el mismo Carlos Andrés Pérez en su segunda administración, pero que los acontecimientos de fines de siglo liderados por Hugo Chávez concitan en su profundización nacionalista. Venezuela presenta al final del periodo las mayores reservas del mundo, mantiene una producción y exportación sobre los tres millones de barriles, agencia la integración energética de la región, y salda la deuda al FMI. El no aumento de la producción es considerado por sus contradictores como demostración del debilitamiento de la industria por culpa de la política nacionalista; para el gobierno, forma parte de los acuerdos de cuotas acordados en la OPEP y la necesidad que tiene este organismo de controlar los precios recortando producción para mantenerlos en alza.

Los casos de Brasil y Argentina, ilustran el esfuerzo de dos países por constituir desarrollos industriales petroleros propios, que a raíz de la coyuntura de los setenta, se bifurcan de manera diferenciada.
Brasil opta por el fortalecimiento político, administrativo, industrial y financiero de Petrobras. La Empresa es convertida en una corporación semiestatal que cotiza sus acciones en la bolsa, y opera como empresa industrial con independencia del Estado. Petrobras se ha convertido en una transnacional, que desarrolla tecnología de punta Offshore, y descubre un gran yacimiento el Presal que aumenta sus reservas y la convierte en exportadora. Parte de la deuda del país se corresponde con las necesidades de la ampliación del sector. Argentina, opta con la administración de Menen por la privatización de su estatal YPF, que junto a otras privadas argentinas y multinacionales agencian el desarrollo petrolero del país. La privatización reditúa exportaciones inmediatas que benefician a Repsol y disminuyen sus reservas, para potenciar como importador al país. La deuda, una de las mayores per cápita de la región con US$3.800/habitante, responde a necesidades macroeconómicas fiscales del Estado. Enarsa, constituida como empresa estatal en el 2004, representa la crítica a los alcances de la política petrolera implementada en Argentina desde 1970.

Colombia y Bolivia, que se ratifican como países del término medio en cuanto a su industria hidrocarburífera, presentan sus propias diferencias. Bolivia muestra una tensión centenaria por consolidar una apuesta de tres intentos nacionalistas en el manejo de sus recursos, concretamente del más abundante: el gas. Los intentos privatizadores durante el período en mención, son cuestionados por el movimiento social en su “guerra del gas”, para cerrar el período con la gestión estatista de Evo Morales en su fórmula 50% más uno para el Estado y 49 para los contratistas transnacionales (que incluye a Petrobras), que le permite al estado la administración y conducción política de los contratos. La renegociación de los precios de venta del gas a sus vecinos Brasil y Bolivia, han doblado los ingresos de YPF-Boliviana, re-estatizada y fortalecida como empresa estatal; y le han permitido al Estado avanzar en el desarrollo de una política de equidad social. Su deuda de unos US$ 618/habitante al igual que su política petrolera resulta manejable en términos macroeconómicos. Por su parte Colombia, al iniciar el siglo XXI, le apuesta a la profundización de la privatización de su estatal Ecopetrol y del conjunto del sector, que venía haciendo gota a gota, desde los setenta. Con la reforma petrolera que agencia Álvaro Uribe, se le permite a las privadas hacerse al 50% más uno del negocio, y
en consecuencia con la misma proporción en la soberanía de su administración. Ecopetrol se convierte en una empresa por acciones que juega más a la especulación en la bolsa que a la inversión productiva. Sus resultados muestran un aumento de las reservas e incremento en sus exportaciones hasta alcanzar el medio millón de barriles diarios, en cadencia con su agotamiento. Patéticamente el país considerado un exportador de repunte en la región, cuenta con uno de los precios de combustibles más altos del hemisferio, incluso por encima de los Estados Unidos. Su deuda per cápita es de US$865/habitante, que como la boliviana, es igualmente moderada.

Una segunda conclusión, de carácter conceptual, la arriesgamos alrededor de los términos nacionalización y estatización. Estos dos conceptos han sido utilizados de manera indiferenciada en el argot de los asuntos energéticos, haciendo alusión al derecho del ejercicio de la soberanía, sobre el manejo de los recursos, por parte de los países o Estados propietarios. Teniendo en cuenta las experiencias descritas podemos precisar, o reconocer, sus nuevas re-significaciones. De sentido común se entiende que la nacionalización se refiere a la nación, entendida como comunidad imaginada de nacionales, y la estatización al Estado, entendido como la organización del ejercicio de la coerción y el consenso entre ciudadanos que obra sobre la comunidad de nacionales; en donde los gobiernos son la materialización o ejercicio de su conducción en un momento determinado. Mientras la nación reviste características socioculturales, el Estado se considera un organismo de orden político-jurídico. En ese marco, procesos como los de Bolivia en 1937, México en 1938 y Venezuela en el 2003 se pueden considerar como procesos de nacionalización; mientras el llevado a cabo por Evo Morales con su distribución en los contratos 50% más uno a favor del estado boliviano, y otros como los venezolanos del 50-50, nos ilustra la estatización. La diferencia estaría en que los procesos de nacionalización radicalizan la apropiación del recurso a favor de la nación, llevado al extremo por la expropiación. Las estatizaciones son un acto de poder del Estado que reconoce el marco jurídico establecido, para renegociar las condiciones de la explotación del recurso. En la realidad, las nacionalizaciones se presentan como procesos sociales “desde abajo” (Bottom Up), las estatizaciones como actos políticos-jurídicos hechos “desde arriba” (Top Down); en donde las mayoría
de las nacionalizaciones han terminado en procesos que reconocen indemnizaciones a los inicialmente expropiados, es decir, que las nacionalizaciones han culminado en actos estatizadores. Ambos son procesos del ejercicio de la soberanía de un país.

También se debe resaltar que las políticas aperturista que se despliegan a partir de los setenta en el sector, pretenden enterrar las pretensiones nacionalistas de las sociedades junto al adelgazamiento que se proponen del Estado. Apologistas de las privatizaciones resignifican como insignificante la nación frente a las fuerzas liberadas de un mercado global financierizado, que se traduce económicamente en la imposición del precio internacional, que desconoce las condiciones nacionales de propiedad y producción de los recursos, es decir, la base nacional de su valor.

Finalmente, vale destacar la diversidad de opciones que presenta la región en el manejo de sus recursos. Estas van desde la máxima aspiración autonomista nacionalista y endógena: mexicana venezolana y boliviana, a la cabeza de empresas emblemáticas como Pemex, PDVSA y YPF boliviana, hasta la constitución de empresas estatales mixtas, como Petrobras en Brasil convertida en una transnacional. Como experiencias en donde las estatales se convierten en una privada por ejemplo, el caso de YPF Argentina. En su conjunto, un síntoma de la compulsión centenaria que presenta la región por la realización, “por cuenta propia”, de su aspiración identitaria y autónomica.
Bibliografía


ALIP. (s.f.). Asociación Latinoamericana de la industria del petróleo. Recuperado el 20 de noviembre de 2011, de Breve historia de la industria del petróleo en Brasil.: www.alip.org


Benclowicz, J. d. (otoño de 2010). La lucha contra la privatización de YPF en Tartagal y Mosconi. *Núcleo básico de Revistas científicas Argentinas del CONICET, XIV(15).*


177
Bustos., M. A. (agosto de 2005). La economía de colombia. Recuperado el 1 de marzo de 2012, de La política, la intervención económica y el manejo fiscal en Colombia: http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/co/mabu.htm
Caratori, L. (julio de 2009). La caída de las reservas de Hidrocarburos y su relación con la evolución de la cantidad de periodos de exploración terminados en las últimas tres décadas. Departamento técnico Instituto Argentino de energía Generaños Mosconi.
CDLA. Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario. (10 de octubre de 2005). YPFB: LA NECESIDAD DE UNA EMPRESA ESTATAL QUE CONTROLE LOS HIDROCARBUROS. Recuperado el 23 de febrero de 2012, de http://www.cedla.org/content/515
CIDOB. Centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona. (6 de junio de 2011). http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_pol... Recuperado el 31 de enero de 2012, de Biografía de líderes políticos.


de desarrollo económico. Colombia 1960-2002 (págs. 223-294). Bogotá:
Oveja Negra.

Oveja negra.


Dang, B. (07 de Mayo de Sunday, 07 May 2006 ). La Riqueza Bajo el Suelo: El Gas
Boliviano en Las Manos del Estado y Las Corporaciones. Recuperado el 25
de febrero de 2012, de Covering activism and politics in Latin America: http://
upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/283-la-riqueza-bajo-el-suelo-el-
gas-boliviano-en-las-manos-del-estado-y-las-corporac


Capital intelectual .

DNP. (2002). Bases del Plan Nacional de desarrollo. Recuperado el 4 de marzo de

DNP. Departamento Nacional de Planeación. (2001). Bases para un plan Nacional
presidencia.gov.co/planacio/Bases%20listo.pdf

Ecopetrol. (s.f.). Colombia exporta petróleo (1986 -1999). Recuperado el 2 de
marca de 2012, de http://www.ecopetrol.com.co/espaciales/Libro60anios/esp/
cap8-3.htm

Ecopetrol. (s.f.). Ecopetrol Energía para el futuro. Recuperado el 1 de marzo de 2012,
de http://www.ecopetrol.com.co/espaciales/Libro60anios/esp/cap8-2.htm

Ecopetrol. (s.f.). El contrato de asociación en Colombia. Bogotá., Colombia:
Reproducciones ecopetrol.

Recuperado el 4 de marzo de 2012, de http://co.iplural.com/ver/55/los-secretos-
del-plan-birmania.html:).

El espectador.com. (16 de diciembre de 2011). Congreso aprueba proyecto de ley de
regalías. Recuperado el 20 de febrero de 2012, de http://www.elespectador.com/
noticias/política/articulo-316978-congreso-aprueba-proyecto-de-ley-de-regalías

com.co/.../regalías-enceuntran-entre-riqueza-y-despilfarro.

El tiempo.com. (25 de octubre de 2010). Gobernadores ya piensan como invertir
las regalías. Recuperado el 20 de febrero de 2012, de http://www.eltiempo.com/
economia/bienestar/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8203260.html


Farfaro, F. D. (enero-febrero de 2012). No los echarmos, huyeron. La argentinización de YPF y los limites d ella política petrolera del Kirchnerismo. *El Aromo*(64).


Gobernación de Arauca. Arauca. (s.f.). arauca.gov. Recuperado el 10 de septiembre de 2010, de arauca.gov.co/?id=2537&vn=Noticias&vertacreg=1&diarias=


Ibíd. La República. La regla fiscal. (s.f.).

Ibíd. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (s.f.).
Ibíd. Ministerio de Minas y Energía. (s.f.).

Index. Mundi. (enero. de 2011). *Colombia. Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real (%).* Recuperado el 4 de marzo de 2012, de http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=co&I=es


La Voz del Cinaruco. Arauca entre los mejores planes territoriales de desarrollo. (s.f.). lavozdelcinarucocom. Recuperado el 10 de septiembre de 2010, de www.lavozdelcinarucocom/?id=3108&vn=1...


Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Minas y Energía. Proyecto de Acto legislativo. Artículo 2. (s.f.).


La Política Petrolera en América Latina: 1970 - 2010


Rebossio., A. (26 de enero de 2012). Cristina Fernández de Kirchner vuelve a la actividad con críticas a las petroleras. El País Internacional


Universia Knowledge@Wharton. (16 de abril de 2008). *El debate sobre la reforma energética en México sube de temperatura*. Recuperado el 9 de febrero de 2012, de http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&Id...


SIGLAS

ALBA  Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América
ALCA  Acuerdo de libre comercio para las Américas
ANH   Agencia Nacional de Hidrocarburos
BP    British Petroleum
CIA   Centro de Inteligencia Americana
CIF   Cost, insurance and freight. (Coste, Seguro y Flete)
COLPET Colombian Petroleum Company
DOWSTREAM Industria petrolera. Aguas Abajo
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ECP   Empresa Colombiana de Petróleos
ECP S.A Empresa Colombiana de Petróleos Sociedad Anónima
ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima
EUR   En inglés Estimated Ultimate Recoverable.
FOGACOOP Fondo de Garantías de las Entidades Cooperativas.
FMI   Fondo Monetario Internacional
FNR   Fondo Nacional de Regalías
FOB   Free on Board. Libre a Bordo
FOB   Valor del crudo en el punto o puerto de embarque
FOWARD Transacción que congela los precios y los márgenes en el momento del acuerdo.
GULF-PLUS Sistema mediante el cual se fijaban los precios del Golfo Pérsico en función de los del golfo de México
IISS  Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. En inglés International Institute For Strategic Studies.
INCORA Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
IPA Iniciativa Para las Américas
IVA Impuesto al valor agregado
KPDC Miles de barriles diarios
MBIs Millones de Barriles
MCCA Mercado Común centroamericano
METROAGUA en Santa Marta, (Colombia)
MMB Miles de Millones de Barriles
MMm3 Miles de Millones de metros cúbicos
MMpc Miles de Millones de pies cúbicos
NAFTA North American Free Trade Agreement
NEPDG National Energy Policy Development Group
OCDE Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico
OLADE Organización Latinoamericana de Energía
OFFSHORE En el mar, alejado de la costa.
OPEP Organización de los Países Exportadores de Petróleo
PEMEX Petróleos de México.
PETROBRAS Petróleo Brasileiro.
PIB Producto Interno Bruto
PVDSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
SPOT Comercio consistente en una red de trabajo compuesta por contactos informales a nivel mundial que compra y vende crudo y derivados futuros.
UPSTREAM Aguas arriba.
YPF. Bolivia Yacimientos Petrolíferos de Bolivia.
LA POLÍTICA PETROLERA EN AMÉRICA LATINA: 1970-2010
LOS CASOS DE MÉXICO Y VENEZUELA, ARGENTINA Y BRASIL,
COLOMBIA Y BOLIVIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico–Sociales Gerardo Molina – UNIJUS

Se terminó de imprimir en los talleres de Corcas Editores S.A.S.
PBX: 549 4300 - Transv. 24 No. 59 - 34 Bogotá D.C.,
en el mes de Noviembre de 2013.
300 libros impresos sobre papel bond Libros de 70 grs,
con tipografía de familia Korinna BT a 12 puntos.
Diagramación Corcas Editores S.A.S